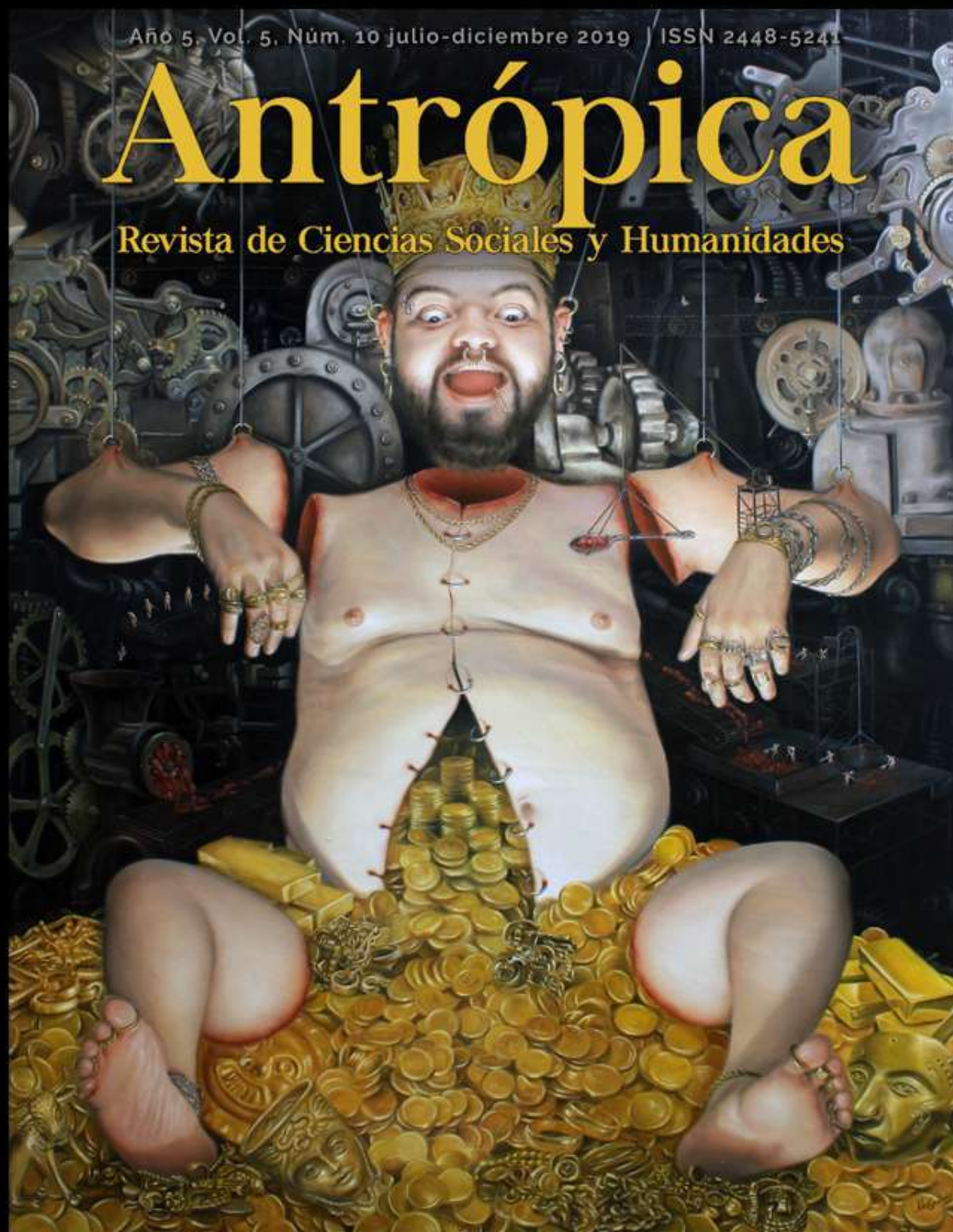


DINÁMICAS SOCIALES EN CONTEXTOS DE CAMBIO. MÉXICO ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX

DOSSIER 3



Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

Año 5, vol. 5, núm. 10 julio-diciembre 2019, Dossier 3

Editora invitada Inés Cortés Campos



Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una revista científica de ciencias sociales y humanidades en formato digital, semestral, fundada por estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El primer número apareció en 2015.

La publicación está dirigida a toda la comunidad científica y académica: estudiantes, profesores docentes, investigadoras e investigadores de los campos de la Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas, Comunicación Social, Derecho, Economía, Filosofía, Historia, Literatura, Psicología y Sociología. La revista recibirá colaboraciones originales e inéditas, escritas en idioma español y que no estén siendo postuladas de forma simultánea en otras publicaciones, revistas u órganos editoriales.

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, en afán de fomentar el intercambio global del conocimiento y las ideas, permite el acceso a sus contenidos (tanto de texto como visuales) sea para descargar, leer, copiar, imprimir y consultar. En caso de emplearse o reproducirse de forma total o parcial algún contenido, es obligatorio citar su procedencia y respetar los derechos de autor.

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una publicación gratuita y no cobra cuotas por la publicación de sus artículos.

Es una publicación arbitrada, dictaminada por pares ciegos e indexada. Integra el índice Latindex

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

ISSN: 2448-5241

Sitio web: www.antropica.com.mx

Email: revista.antropica@gmail.com

Información legal

ANTRÓPICA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, año 5, vol. 5, núm. 10, julio-diciembre 2019, Dossier 3 es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Yucatán, México a través de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Km. 1 Carretera Mérida-Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Apartado Postal 1405, Correo Centro, Mérida, Yucatán. Tel.: +52 (999) 930 0090 Ext. 2118 <http://www.antropologia.uady.mx/revista/antropica/antropica.php>. Editores responsables: Gabriel Angelotti Pasteur. Número de reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2018- 113011041100-203, ISSN 2448-5241, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización, Rodrigo Vences Nava. Facultad de Ciencias Antropológicas., Km. 1 Carretera Mérida- Tizimín, Cholul, C.P. 97305. Fecha de última modificación, 2 de julio de 2019.

Transparencia

Los materiales e insumos necesarios para el proceso de trabajo y publicación (fotocopias, impresiones y papeles) y los mobiliarios (escritorio, teléfono, conexión a internet) son provistos por la UADY y la Facultad de Ciencias Antropológicas. Mientras que los electrónicos (computadoras, escáner, impresora, grabadoras digitales, proyector digital, cámaras de videograbación, cámaras fotográficas, trípodes y otros accesorios) fueron adquiridos en proyectos financiados por PRODEP (Secretaría de Educación Pública) y CONACYT, en convocatorias distintas; estando todos ellos inventariados y resguardados por la UADY.

Además, la UADY brinda apoyo legal (mediante el departamento jurídico) y se responsabiliza por el pago para la renovación del nombre de la publicación ante INDEAUTOR. Mientras que la Facultad de Ciencias Antropológicas respalda técnicamente (mediante el departamento de computación) y aporta para el pago de la página web. Cualquier otro gasto adicional que pueda presentarse, en particular relacionados con la promoción y difusión de la publicación, pueden ser solventados por los integrantes del equipo técnico o el Director de la publicación.

Lo señalado resulta suficiente para que podamos publicar dos números anuales en el formato digital. Es importante señalar que **Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades** no posee cuenta bancaria ni está interesada en recibir financiamiento externo o apoyo económico de empresas, fundaciones, gobiernos o particulares.



Ilustración de la portada

La obra de la portada se titula “La fábrica” y pertenece al artista plástico José Luis López (Jalisco, México). Su obra se puede encontrar en la siguiente dirección: El Hurgador

<http://elhurgador.blogspot.com/2014/03/jose-luis-lopez-galvan-pintura.html>

Ilustraciones de interior

Grabados de Philippe Galle (1587)

Consultado en: Biblioteca Digital Hispánica

<http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html>

DIRECTORIO

Universidad Autónoma de Yucatán

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Facultad de Ciencias Antropológicas

Dra. Celia Rosado Avilés

Directora

Gabriel Angelotti Pasteur (UADY)

Dirección editorial

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Margarita Rosales González

Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mérida, INAH. Yucatán.

Dr. Frausto Oscar Martínez

Universidad de Quintana Roo, Quintana Roo

Dra. Paola Peniche Moreno

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.

Dr. Jesús Lizama

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.

Dra. Inés Cortéz Campos

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.

COMITÉ ASESOR

Dr. Marco Calderón Mólgora

El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán

Dr. Bradley S. Epps

Universidad de Cambridge, Reino Unido

Dr. David de Ángel García

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yuc.

Dra. Ella Fanny Quintal Avilés

Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Mérida, Yuc.

Dr. Enrique Rodríguez Balam

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yuc.

Dr. Jesús Solís Cruz

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Dr. Joel Francis Audefroy

Instituto Politécnico Nacional. México.

Dr. Raymundo Padilla Lozoya

Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación,
Licenciatura en Periodismo. Colima.

Dr. Guillermo Alonso Meneses.

El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, Baja California)

Dr. Luis Escala Rabadán.

El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, Baja California)

Dr. Luis Vázquez León.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Regional Occidente. Jalisco.

Dr. Carlos Welsh Rodríguez.

Universidad Veracruzana. Departamento Centro de Ciencias de la Tierra.

Dra. Lourdes Romo Aguilar.

El Colegio de la Frontera Norte. Sede Ciudad Juárez (Chihuahua).

Dr. Juan Manuel Rodríguez Estevez.

El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, Baja California).

EDITORES DE PRODUCCIÓN

Aurora Euan Couoh

Universidad Autónoma de Yucatán

Mtro. Gonzalo Rosado García

Universidad Autónoma de Yucatán

Mtro. Rodrigo Vences Nava

Universidad Autónoma de Yucatán



Índice

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Año 5, Vol. 5, núm. 10, julio-diciembre 2019, Dossier 3

Presentación del Dossier

Dossier no. 3 “Dinámicas sociales en contextos de cambio. México entre los siglos XIX y XX” 227-229

Dossier no. 3 “Social dynamics in contexts of change. Mexico between the 19th and 20th centuries”
por Inés Cortés Campos

Artículos de Investigación

Un puente entre lo divino y el pueblo. El papel de los fiscales en los pueblos de indios del siglo XIX 233-256

A bridge between the Divine and the People. The role of prosecutors in Indian villages from the Nineteenth century
por Abel García Gómez

La Ciudad de los Muertos: la transformación socialista del Cementerio General de Mérida, Yucatán, 1918-1919 257-281

City of the Dead: the socialist transformation of the General Cemetery in Mérida Yucatán, 1918-1919
por Marco Díaz Güémez

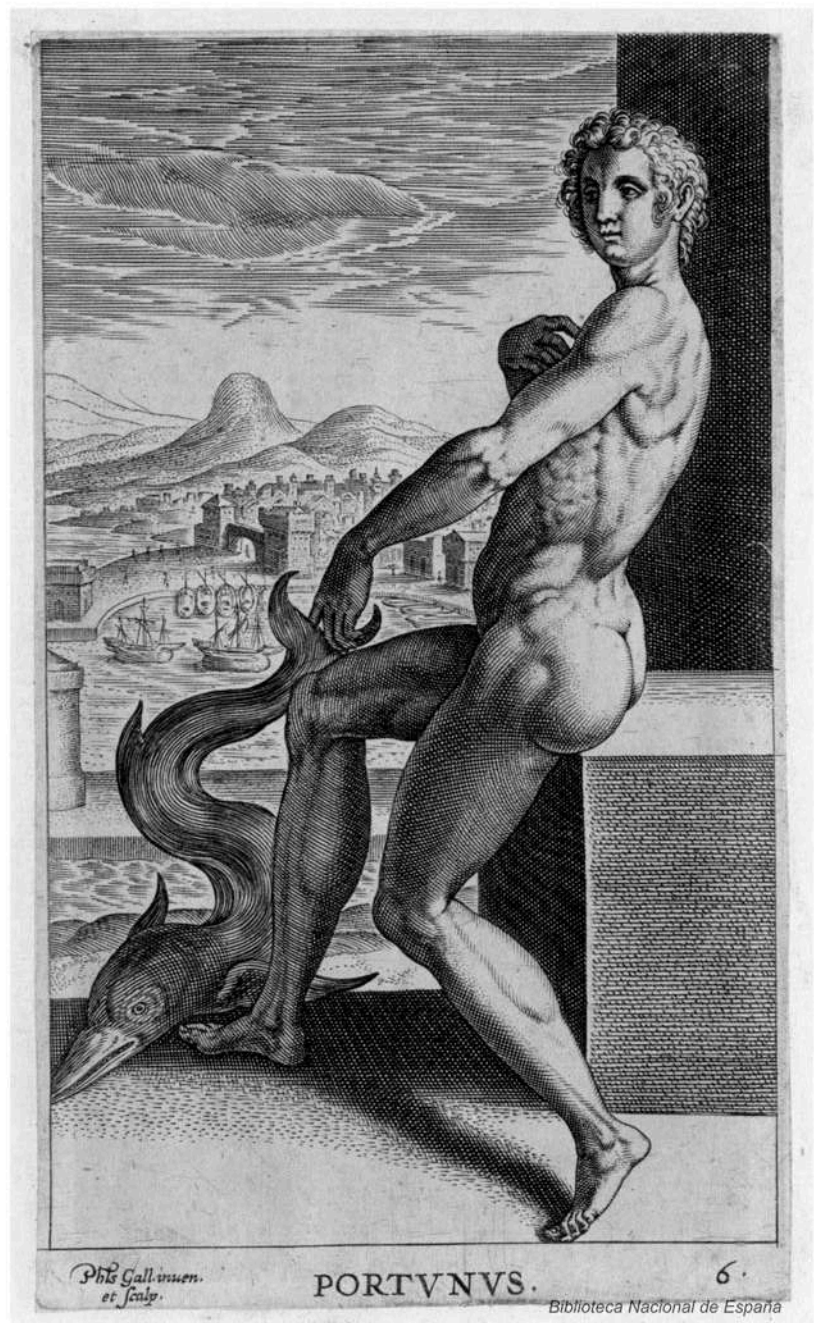
La Guerra de Castas y su impacto agrario en los pueblos del oriente de Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX 283-303

The Caste War and its agrarian impact on the eastern villages of Yucatán in the second half of the Nineteenth century
por Julio César Hoil Gutiérrez

El Cerro y Monte de Tepotzotlán. Los pueblos frente a la desamortización, 1856-1900 305-328

El Cerro y Monte de Tepotzotlán. Villages facing expropriation, 1865-1900
por Porfirio Neri Guarneros

Presentación Dossier





Dossier no. 3 “Dinámicas sociales en contextos de cambio. México entre los siglos XIX y XX”

Dossier no. 3 “Social dynamics in contexts of change. Mexico between the 19th and 20th centuries”

Inés Cortés Campos

Cátedras CONACYT-CIESAS Peninsular (México)

<https://orcid.org/0000-0003-3168-4903>

inescortes_c@hotmail.com

A fines del siglo XVIII, después de casi tres siglos de predominio del viejo sistema colonial que gobernó la vida y las riquezas del virreinato de la Nueva España, el rey Felipe de Borbón puso en marcha de una serie de modificaciones de gran envergadura en la administración de las colonias españolas en el continente americano. Conocidas como Reformas Borbónicas, estas modificaciones fueron producto de la acogida del pensamiento ilustrado y del absolutismo; su principal propósito fue la modernización de la recaudación fiscal, la eliminación del fuerte poderío con que algunos personajes llegaron a gobernar amplias regiones del virreinato y, en suma, el robustecimiento del dominio de la Corona española sobre sus posesiones en América. Aunque en su origen estas reformas procuraron la instauración de un nuevo orden administrativo y económico, tuvieron un fuerte impacto en una amplia variedad de aspectos de la vida social, política, económica y cultural de las colonias, siendo uno de sus efectos más trascendentes los procesos de independencia que tuvieron lugar en el transcurrir del siglo XIX y que, entre otros fenómenos, posibilitaron el surgimiento de México como nación.

Con este antecedente, el largo siglo XIX mexicano –que inició con las reformas borbónicas y terminó con la revolución de 1910– fue una centuria coyuntural y convulsa, caracterizada por rupturas, lo mismo que por continuidades, con respecto al viejo régimen colonial. Fue la época que posibilitó la construcción del andamiaje burocrático y la estructuración territorial del Estado-nación mexicano, que mantuvo muchos de sus rasgos durante buena parte del siglo XX.

El presente *Dossier*, titulado “Dinámicas sociales en contextos de cambio. México entre los siglos XIX y XX”, se compone de un conjunto de trabajos cuyo eje es el estudio histórico de diversos procesos, principalmente de orden social, que tuvieron lugar en distintas regiones de México, durante el periodo posterior al quiebre generado por las reformas borbónicas, abarcando en particular el largo

siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Estos trabajos presentan casos ilustrativos de algunos los profundos procesos de cambio social que tuvieron lugar en la centuria decimonónica, como las resistencias de la población indígena al dominio del Estado-nación, los conflictos por los usos y la tenencia de la tierra, los cambios en la administración y la fiscalización de las riquezas, así como también el uso y construcción de espacios acordes con los procesos emergentes de urbanización, entre otras problemáticas.

Así, Abel García Gómez argumenta, en su artículo “Un puente entre lo divino y el pueblo. El papel de los fiscales en los pueblos de indios del siglo XIX”, caracteriza a la Fiscalía como la institución religiosa de mayor importancia en los pueblos de indios, al establecer un actuar preponderante en la iglesia local, y al mantener una estrecha relación con la estructura política y económica de los pueblos de indios.

Por su parte, el trabajo “La Guerra de Castas y su impacto agrario en los pueblos del oriente de Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX”, de Julio César Hoil Gutiérrez propone que uno de los efectos de la guerra de castas fue el surgimiento de un nuevo paisaje agrario entre 1847 y 1870, para lo cual analiza las secuelas demográficas de dicha guerra y su relación con los excedentes de tierras en manos de los pueblos, entre otros elementos. Así, argumenta que el movimiento armado de los mayas yucatecos fue responsable de dibujar el paisaje agrario del oriente de Yucatán entre los años mencionados.

Por su parte, Porfirio Neri Guarneros, en su artículo “El Cerro y Monte de Tepetzotlán. Los pueblos frente a la desamortización, 1856-1900”, describe los movimientos y las acciones de resistencia que tres barrios del pueblo de Tepetzotlán emprendieron para garantizar su acceso a los recursos de los montes del cerro y sus alrededores del pueblo mencionado, en un contexto en el que la ley de desamortización vulneraba el uso comunal que aquellos barrios habían venido efectuando sobre dichos recursos.

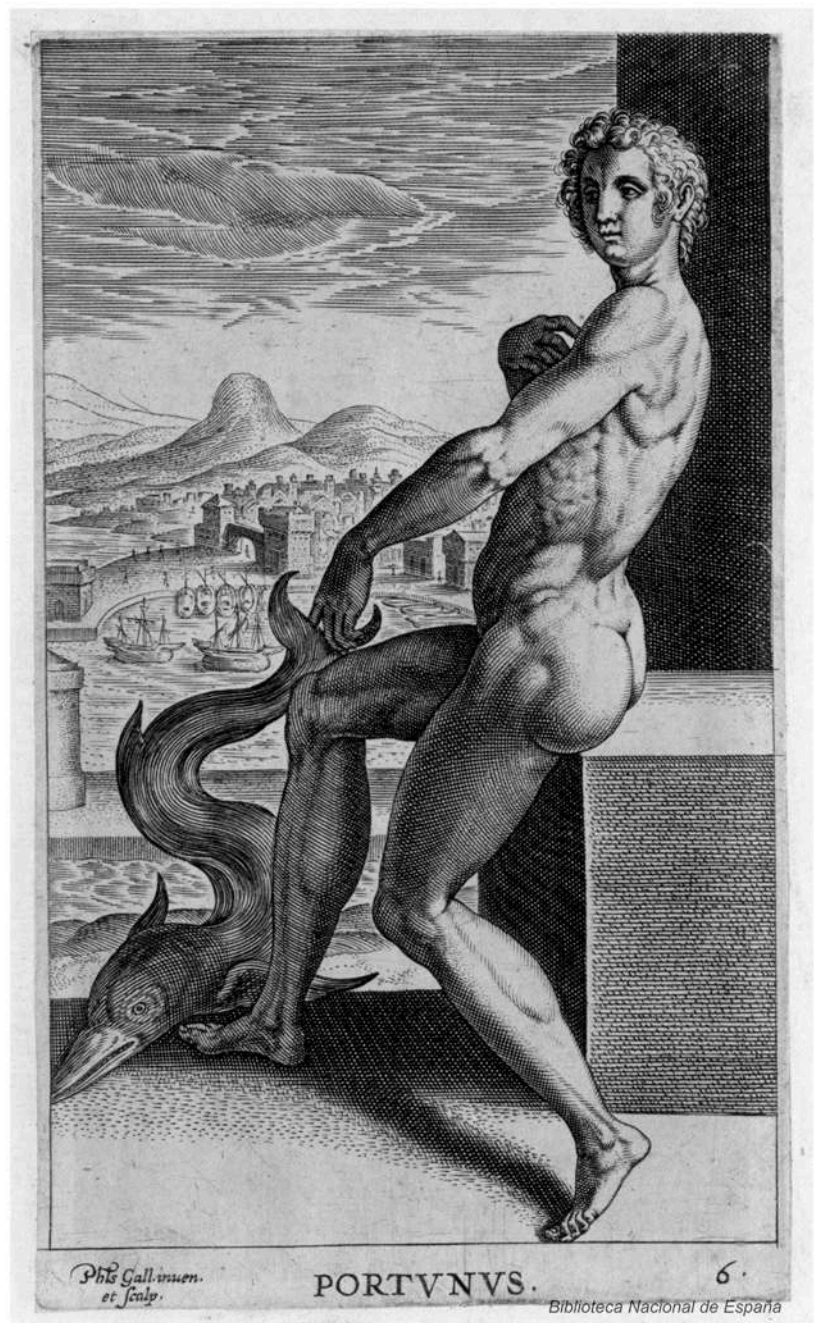
Por último, Marco Díaz Güémez, en su trabajo “La Ciudad de los Muertos: la transformación socialista del Cementerio General de Mérida, Yucatán, 1918-1919”, describe y analiza los cambios por los que atravesó el Cementerio General de Mérida a fines de la segunda década del siglo XX, cambios proyectados por el primer gobernador posrevolucionario de Yucatán, Carlos Castro Morales, y que significaron el inicio del arte monumental que caracterizó al socialismo posrevolucionario de Yucatán, con la consigna de ser un cambio cultural perceptible en el espacio público.



Es de destacarse que todos los trabajos que integran el presente *Dossier* son producto de las investigaciones llevadas a cabo por cinco jóvenes investigadores egresados del Posgrado en Historia del CIESAS. Agradecemos a *Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* la oportunidad otorgada para la publicación de estos trabajos, reiterando así su lugar como espacio abierto para la difusión del conocimiento más reciente generado en el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas. 



Presentación Dossier





Un puente entre lo divino y el pueblo. La importancia de los fiscales en los pueblos de indios del siglo XIX

A bridge between the Divine and the People. The role of prosecutors in Indian villages from the Nineteenth century

Abel García Gómez

CIESAS Peninsular (México)

<https://orcid.org/0000-0003-1344-8472>

abelg2_yolotl@hotmail.com

Recibido: 7 de enero de 2019.

Aprobado: 13 de junio de 2019.

Resumen

La fiscalía, una institución de origen colonial, surge como instrumento de ayuda a las órdenes mendicantes para llevar a cabo la evangelización. Para ello, el fiscal, como máxima autoridad, desempeñó un papel relevante y quienes ocuparon el cargo, con el pasar de los años, ayudaron a la fiscalía a consolidarse como pilar central en el ámbito religioso. Así, a finales del periodo novohispano, la fiscalía aparece como la encargada del lustre y arreglo del templo, como responsable de la fiesta patronal, de las funciones dedicadas a devociones locales y celebraciones del calendario litúrgico, además de custodiar fondos comunales. Por lo tanto, en este artículo se analiza el papel de la fiscalía durante el siglo XIX, lo cual permitirá situar el peso que tuvo en los pueblos de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco.

Palabras clave: Fiscalía, sistema de cargos, contribuciones, trabajo conjunto, actividades indirectas.

Abstract

The prosecution, an institution of colonial origin, emerges as an instrument to help mendicant orders to carry out evangelization. For this, the prosecutor, as the highest authority, played a relevant role and those who held the position, over the years, helped the prosecution to consolidate itself as a central pillar in the religious field. Thus, at the end of the Novohispano period, the prosecutor's office appears as the person in charge of the luster and arrangement of the temple, as responsible for the patronal feast, of the functions dedicated to local devotions and celebrations of the liturgical calendar, in addition to guarding communal funds. Therefore, in this article the role of the prosecution during the nineteenth century is analyzed, which will allow to place the weight that it had in the towns of San Buenaventura Tecaltzingo and San Juan Tuxco.

Keywords: Prosecutor's office, system of charges, contributions, joint work, indirect activities.

Introducción

En el presente artículo se analiza la Fiscalía, considerándola como la institución religiosa de mayor relevancia en los pueblos que se estudian, con un fuerte impacto en los ámbitos social y económico. Para lograrlo será preciso subrayar su papel como elemento determinante de la iglesia local, su vinculación tan estrecha con la estructura política, y su posición en la dinámica comercial de los pueblos durante el siglo XIX.

Sin embargo, antes de entrar de lleno al desarrollo de nuestro objetivo, cabe resaltar que la Fiscalía no puede ser analizada si no se comprende el contexto socio-cultural en el que se encontró inmersa. Para ello, situarla como parte del sistema de cargos es importante. Así, en primer lugar, se entiende a dicho sistema como la estructura donde todos los hombres de la comunidad tuvieron la obligación de desempeñar un cargo. Una dinámica social que les ofreció la oportunidad para ascender a los escalones superiores y alcanzar el estatus de anciano o principal. Desde esta perspectiva, Pedro Carrasco señala que la dinámica del sistema podría caracterizarse como un tipo de democracia debido a la apertura que hubo en todos los cargos, a casi cualquier individuo. De esta manera el sujeto podía alternar entre los cargos civiles y religiosos (Carrasco, 1979). Aunque no siempre funcionó de esta manera.

Por otro lado, para Carrasco los rasgos que definen al sistema de cargos son dos. El primero es el *sistema de escalafón*, una forma de adquisición de status y movilidad social que contrasta con la adscripción hereditaria y los cargos vitalicios o de período largo. El segundo rasgo es el *patrocinio individual*, cuando quien ejercía un cargo rebasaba sus obligaciones al cubrir los gastos de misas, danzantes, músicos, compra de cohetes y, sobre todo, de los convites. Respecto al primer rasgo, el autor sugiere que podría incluir a todos los miembros de la sociedad, o bien, sólo podría darse dentro de ciertos grupos como estamentos, linaje, barrios, gremios o cofradías. Pero, que al final, la movilidad únicamente pudo darse de forma ascendente (Carrasco, 1990).

Para Carrasco, al interior de comunidades decimonónicas, la unión de ambos ámbitos consistió en la participación de las autoridades civiles en funciones religiosas, en el financiamiento de estas con bienes de comunidades y en la vinculación de los dirigentes de la comunidad con ambas instituciones. Así, la alternancia de los cargos civiles y religiosos no es algo que aparece durante el siglo XIX, pero afirma este autor que sí aumentó la pérdida de los bienes de las corporaciones y el destino dado a estos bienes debido a la imposición de las nuevas formas de gobierno municipal que excluían explícitamente las actividades religiosas (Carrasco, 1990). Argumento con el que no estamos de acuerdo debido a los resultados en este artículo.



A nuestra consideración se debe situar a la Fiscalía como parte de una estructura social que articula la fe, cuida del templo, organiza las diversas festividades católicas y administra los recursos de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco en el estado de Puebla a lo largo del siglo XIX.

Sin embargo, antes de proceder al análisis de la información que nos ofrecen las fuentes, habrá que entender mejor la institución que nos interesa: la Fiscalía. Luis Reyes (2009) señala el momento de su aparición a comienzos del periodo novohispano, como un instrumento de apoyo a los franciscanos para las tareas de la evangelización. Y siguiendo los preceptos del catolicismo, algunos indios eran adiestrados por los hermanos de Asís para dejarlos a cargo de los templos locales. Esta delegación de funciones permite entender que con el paso de los años la Fiscalía se conformó como un espacio de poder político y económico paralelo al cabildo indio. Respecto al primer campo, Lidia Gómez García (2010) lo define así por ser una institución que estableció normas y requisitos a cumplir para aquellos que buscaron desempeñar algún cargo. Además, su presencia en ciertas circunstancias permitió otorgar validez legal a la redacción de documentos, como los legados o testamentos. En el campo económico, su relevancia descansó en el manejo de los medios y recursos que controlaban algunas fiscalías para llevar a cabo las festividades religiosas (Gómez, 2010). Es por ello que el fiscal, como encargado de funciones en los dos ámbitos, debía demostrar capacidad de cuidar los recursos de la iglesia y a su vez los del pueblo frente a otras instancias externas.

De esta manera, las grandes responsabilidades que un individuo adquiría al ocupar el cargo de fiscal debían sustentarse en haber demostrado capacidad para asumirlas a lo largo de una vida de servicios al pueblo. En otras palabras, ocupar diversos cargos dentro del templo permitió al carguero mostrar sus virtudes de liderazgo y de organización, habilidades de administrador (Guarisco, 2003), y actitudes de comerciante o negociador. Y una vez que cumplieran con todos los requisitos estos personajes podían ocupar el cargo de fiscal y asistir al cura o religioso, cuidar y vigilar la asistencia de los naturales a la catequesis y el mantenimiento del culto religioso (Palomo, 2000). Conforme avanzó el periodo colonial, aumentaron sus funciones y el grado de participación de los fiscales. Algunas de ellas fueron: buscar otros medios para el sostenimiento de las celebraciones religiosas, así como realizar construcciones y arreglos dentro de las iglesias. Entonces, bajo esta dinámica interna, la fiscalía se definió como una institución que desarrolló su propia tradición de organización político-religiosa, con espacios de decisión propios (Reyes, 2009). Ya en los últimos años del periodo colonial, el fiscal –junto con los cargos de sacristán y cantores– llegaron a ser de gran relevancia. Sin embargo, debido a sus facultades y obligaciones, fueron los fiscales quienes se posicionaron en un sitio estratégico en la vida de



la comunidad. Así, en un primer momento se convirtieron en el ayudante crucial del sacerdote al momento de celebrar los rituales religiosos, para luego ser un elemento vital en la enseñanza de la doctrina católica y culminar como un apoyo relevante en la impartición de los sacramentos. Por lo tanto, el ejercicio de todas esas funciones le otorgó el papel de líder espiritual; pero al mismo tiempo, al asumir responsabilidades como administrador del pecunio, tuvo como encargo en la recaudación de impuestos parroquiales como las dominicas (o *mixatomin*), así como del cobro de derechos parroquiales. Ello implicó que, en cumplimiento con sus funciones de policía de la religión, los fiscales y sus ayudantes tuviesen facultad para arrestar a los feligreses que no cumplieran con los preceptos religiosos y morales. Por otro lado, aunado a sus obligaciones anteriores, también tenían la tarea de encargarse del mantenimiento del templo y de la fábrica de los ornamentos sacros y, de igual manera, llegaron a participar como testigos en la elaboración, lectura y entrega de testamentos, e incluso organizar el trabajo comunal (Taylor, s/f).

Con esta creciente complejidad de funciones, para finales del período novohispano y para dar cumplimiento a todas sus obligaciones, en los pueblos grandes había un fiscal mayor y otro menor. En el resto de los pueblos con iglesias de visita solo había uno (Taylor, s/f). Para el caso de Puebla, por una instrucción de 1766 se determinó que los fiscales debían tener edad provecta, ser casado, de personalidad tranquila, no tomar demasiado alcohol y conocer muy bien la religión (Taylor, s/f). Por la estipulación de estos requisitos y el desempeño de funciones y obligaciones diversas y específicas, consideramos que los fiscales se convirtieron en personajes centrales en la organización de los pueblos durante el siglo XIX.

La revisión de diversos documentos permitirá acercarse a la dinámica interna de la fiscalía y conocer el peso que tuvo en la organización de los pueblos de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco durante el siglo XIX. Al subrayar las prácticas realizadas por los fiscales a lo largo de la centuria decimonónica podremos ubicar los cambios o continuidades dentro de la administración religiosa.

1.1. Origen y formación de la parroquia de San Martín Texmelucan

Al comienzo del período colonial, al igual que la administración civil, la Iglesia tuvo que organizarse territorialmente para llevar a cabo su tarea evangelizadora. Así, después de fundarse el obispado de Tlaxcala en 1526, a petición de Fray Julián Garcés la sede se trasladó en 1543 a la ciudad de Puebla. Pero es hasta 1550 que Huejotzingo con todos sus pueblos a cargo, quedó integrado de forma oficial a dicha jurisdicción eclesiástica. Entre esas comunidades estuvo San Martín Texmelucan, el cual para finales del siglo XVI apareció como una de las



capillas dependientes de la parroquia de San Salvador el Verde, quedando bajo su jurisdicción (Contreras, 1996) hasta finales del siglo XVII.

En cumplimiento con sus tareas, el obispo de Puebla, Don Manuel Fernández de Santa Cruz, realizó la visita episcopal a San Martín Texmelucan el 24 de noviembre de 1682, lugar en el que pudo observar una ermita con un altar digno para el sagrario, que además contaba con todos los enseres religiosos para las celebraciones litúrgicas. De esta manera, el obispo percibió la existencia de una feligresía organizada, adoctrinada y fervorosa de su religión. En 1683, cuando se dividió San Salvador el Verde y Huejotzingo, la ermita de Texmelucan se erigió en parroquia bajo la advocación de San Martín Obispo de Turonense, que estaría a cargo del Br. Miguel Cozar Moctezuma (Contreras, 1996). Los pueblos que quedaron bajo el curato de Texmelucan fueron: San Juan Tuxco, San Cristóbal Tepatlaxco, San Rafael Tlanalapan, Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Baltazar Temaxcalac, Santa María Moyotzingo, San Lucas Atoyatenco, San Buenaventura Tecaltzingo, y todos, como la cabecera del curato, también dieron su aportación reglamentaria. Para finales del virreinato, además de los pueblos mencionados, se agregaron a la doctrina de San Martín las haciendas de San Cristóbal Polaxtla, de Santa María Moyotzingo, de San Lucas, la del Rosario, San Miguel, Rancho San José y el barrio de Santiago (Contreras, 1996). Esta jurisdicción se conservó hasta 1802.

Después de situar los antecedentes de la parroquia de la cual dependían los pueblos estudiados, cabe pasar al resultado de la revisión de las fuentes que nos permitirán observar el papel de la fiscalía en los pueblos de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco, durante el siglo XIX. Como se ha mencionado ya, el objetivo será situar las tareas de los fiscales y su impacto en los pueblos.

1.2. Entre cooperaciones e impuestos eclesiásticos

Ya se apuntó que la fiscalía es una institución de carácter religioso con una estructura definida que se observó a nivel local y que sus funciones y el número de cargos cambiaba de un lugar a otro. Por ejemplo, para 1850 la fiscalía de San Buenaventura Tecaltzingo posicionó en el cargo más alto a los fiscales, seguidos por los mayordomos y en la base se encontraban los *tequihuas* o *topiles*. Una década más tarde, un padrón para el registro del cobro del *mixatomin*, elaborado por el fiscal Nicolás Alvarado, consignó a Francisco García y Manuel Alvarado como mayordomos de la imagen de San Buenaventura, a Martín Juárez como mayordomo de la virgen de Guadalupe y a Joaquín Roque como *topile*. La importancia de los ejemplos anteriores nos permitirá desentrañar la estructura de la fiscalía y sus funciones, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX.



Como parte de sus tareas, continuó la asistencia de estos cargueros al párroco en la administración de los sacramentos, los arreglos del templo y la recaudación de impuestos y derechos parroquiales, entre otras. Pero los ministros del culto también daban por sentado que dichas tareas fueran llevadas a cabo de igual manera en las iglesias de visita por su fiscal, como venía sucediendo desde el periodo novohispano.

Cabe resaltar que las fuentes consultadas no son anteriores al año de 1830, pero de igual forma muestran la dinámica interna de la Fiscalía. Así lo muestran los expedientes donde oficiales de doctrina, dejaron evidencia de sus actividades como recaudadores de los impuestos eclesiásticos y, en este caso, del diezmo que se recaudó en los años de 1848, 1859-1860. Para ello fueron elaborados un conjunto de listas donde serían registrados los pagos y adeudos de todos los vecinos. Tal y como lo hizo Nicolás Alvarado en 1859 para el pueblo de Tecaltzingo. Aunque no todas las recaudaciones se hacían de manera general, hubo cooperaciones con un carácter más específico. En 1861 se pidió un real de limosna y para 1863 cooperaron los vecinos para la limosna de “Nuestra madre santísima de Guadalupe”.¹

No obstante, en el caso de San Juan Tuxco, en el cobro del diezmo se vieron involucradas las autoridades civiles. Para 1852, fue el alcalde Luis Alvarado quien entregó el diezmo al recaudador Gregorio Hernández. Dada esta información podría pensarse en una intromisión o influencia de las autoridades civiles en el ámbito religioso, pero un oficio de 1874 de la Colecturía de Diezmo de Cholula notifica a los señores jueces, fiscales y principales del pueblo que deben comunicar el nombramiento de Joaquín Arroyo como colector.² Es decir, al notificar a funcionarios de los dos ámbitos de organización, las autoridades eclesiásticas superiores están manifestando que otorgaron la facultad a cualquiera de ellos para cobrar el diezmo. Entonces podemos hablar de una equidad de estatus entre alcaldes, jueces y fiscales, donde su responsabilidad, moral y honestidad, los respaldaron y crearon una figura de prestigio local. En opinión de Hilario Topete, la figura estaría impulsada por lo que él llama “poder para”, es decir, movida por la cualidad de todo carguero de servir (Topete, 2005), por el hecho de estar en un cargo y antes que todo porque eran hijos del pueblo.

Siguiendo con el tema del cobro de cooperaciones, ya se apuntó que las limosnas no fueron las únicas aportaciones recaudadas por los fiscales. Otros documentos asentaron listas y padrones de la contribución *mixatomin*³, una

1 AHFT, Fondo: Fiscalía, Sección: Servicio a la comunidad, serie: Contribuciones civiles, fol. 1r-6r.

2 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: correspondencia, fol. 114r. y también AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: egresos, fol. 9r.

3 El *mixatomin* fue la cooperación aportada por los vecinos del pueblo para cubrir los gastos de las misas.



contribución que se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de la Iglesia y, por lo mismo, en nuestra opinión, en una de las fuentes que muestra la dinámica interna de la fiscalía.

Cabe resaltar que no siempre el dinero recaudado fue utilizado para cubrir necesidades ajenas al pueblo que lo entregó. Por lo menos en 1851, Jacinto Juárez, siendo jefe de sección de San Buenaventura Tecaltzingo, orientó los recursos de la contribución *mixatomin* para el sostenimiento de la escuela del mismo pueblo. En suma, el uso del recurso es justificado en una cuenta de aportaciones mensuales hasta cubrir los 33 pesos, de un total 60 que fueron reunidos; situación que se repite en el año de 1852.⁴

Los padrones para el cobro del *mixatomin* son documentos más amplios y completos. En 1847, uno fue elaborado a cargo del fiscal don Ventura Escobar en compañía de los dos jueces de paz. En primer lugar, señalan la pertenencia de Tecaltzingo al curato de Texmelucan y, en segundo lugar, el padrón da muestra de sus habilidades de administrador, ya que al momento de recaudar el impuesto, el fiscal elaboró listas anotando por separado a los jefes de familia, viudos, viudas y solteros. Una variante del cobro la presentó al siguiente año José María Justo, fiscal que incluyó a las doncellas para el pago del *mixatomin* y utilizó los recursos no sólo para cubrir los gastos de la misa, sino también los pagos de alquiler de ornamentos y compra de tierra roja.⁵

Entre las contribuciones figura asimismo el pago de las confesiones que no es propiamente un impuesto ni mucho menos un derecho parroquial, pero sí fue un gasto que formó parte importante de la regulación y de la participación de la fe. Sin embargo, la vigilancia del cumplimiento de esta obligación es otra de las actividades que muestran la dinámica del sistema de cargos en Tecaltzingo, donde los ámbitos civil y religioso comparten algunas normas, como la excepción de pagos a favor de cargueros. De esta manera una lista de vecinos de 1864 fue elaborada para recaudar un real y medio por persona para cubrir los gastos de las confesiones del 10 de marzo, además de pagar con ello el sueldo al sacristán Clemente Rocha, siendo el único carguero de la iglesia en recibirlo. En cambio, los fiscales Leandro Juárez y Francisco Huerta, así como los alcaldes Agustín Ramírez y Jacinto Montes, sin dejar de lado mayordomos y el topil, no recibían sueldo, pero tampoco pagaban la cooperación.⁶ En otras palabras, la condonación de cooperaciones se observa como un privilegio a la condición de carguero y administrador de recursos tanto del ámbito civil como religioso.

4 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: contribuciones civiles, fol. 1r-2r.

5 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: padrones, fol. 1r-13v.

6 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: listas, fol. 4r-5r.



1.3. El fiscal como administrador de recursos

Otra de las funciones del fiscal fue dar mantenimiento y hacer mejoras en el templo. De esta manera fueron cubiertos los costos para la esquila de 1858, además de pagar la adquisición de material para los rituales religiosos como palmas para su bendición el domingo de ramos en los años de 1854 y 1855. Se costó, asimismo, el importe de otros actos litúrgicos,⁷ siendo las misas y bendiciones los más comunes, y los sermones del cura desde el púlpito las menos solicitadas. Además, ante el elevado número de tareas que el fiscal debía desempeñar, en algunas ocasiones recibió asistencia de las autoridades civiles.

Un caso de este tipo de actividades administrativas proviene de 1860, cuando el alcalde Juan Francisco rindió una cuenta junto con dos comisionados, don Domingo Rafael y don Domingo Huerta para la reposición de ornamentos. Las tres personas se encargaron de recaudar el dinero que fue utilizado principalmente para la festividad de Sagrado Corpus, cuya aportación consistió en un peso dado por los casados, los solteros cuatro reales y las viudas dos reales. En suma, el dinero reunido, al igual que en otros casos, fue utilizado para la compra de telas para vestir a los santos o para adornar el templo, para la adquisición de un galón de oro, un candil de latón y otro de cristal. No obstante, también habría que cubrir los gastos de comida de quienes fueron a buscar los ornamentos a Puebla, al igual que los cohetes, su bendición, la procesión y el confeti para recibirlos.⁸ Como podemos notar, en esta ocasión el alcalde del pueblo participó como encargado de una festividad importante del calendario litúrgico, ya que fue el responsable de organizar una tarea tan relevante en la ciudad de Puebla, como fue la compra de ornamentos sacros. Por otro lado, debido a la magnitud del encargo y las actividades para recibirlos, podemos pensar que se ofreció una comilona por iniciativa del fiscal y del propio alcalde.

A pesar de la colaboración de las autoridades civiles para el encargo de obras dentro de la iglesia, así como de comisionados para la recaudación de las cooperaciones, los fiscales continuaron manejando la principal aportación destinada al culto religioso. La mejor evidencia de ello fueron las cuentas de cargo y data que presentó José María Justo Juárez en 1848 por el pago de dominicas. En dicho registro se asentó el pago del cura por las ocho misas efectuadas, también sueldos del albañil y el herrero, material de construcción, pago del escribano, entre otros.⁹

En la mayoría de los casos encontrados los fiscales utilizaron los recursos recaudados para cubrir las necesidades directas del templo, como en el año 1853

7 . AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 3r.

8 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 5r.

9 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 11r-12r.



cuando el fiscal Mariano Escobar informó a los principales y al resto de los hijos del pueblo que los 133 pesos con siete reales recaudados cubrieron los derechos parroquiales por las misas, la compra de cuerdas para la campana, la adquisición de una olla para recoger la cera de las columnas, la compra de azúcar, vinagre, un cajete, por pago al tucero, por compra de cebada para los caballos de los sacerdotes, por manufactura de dos capas, además de cubrir el sueldo del preceptor,¹⁰ gasto que encuentra su justificación al requerirse la práctica del rezo en la educación de las niñas. No obstante, hubo tareas no tan comunes y una de ellas fue procurar evitar las calamidades naturales. De esta manera en 1859, para proteger a la comunidad de las perturbaciones climáticas, don Bernabé Antonio de Leo pagó la bendición de cuatro ceras, palmas y cruces para las lluvias con granizos.¹¹ Por lo tanto las tareas anteriores muestran cómo el fiscal, desde su espacio de acción buscó proteger a su pueblo.

Dada la incapacidad del importe de las contribuciones para cubrir relevantes gastos, el fiscal tuvo que buscar otros medios para generar ingresos. Uno de los mecanismos a los que recurrieron los fiscales fue el alquiler de artículos religiosos. Así lo hizo en 1860 don Nicolás Alvarado al rentar una cuna; para 1861 el fiscal Ascensión Alvarado rentó dos frontales a los pueblos de San Luis Coyotzingo y San Felipe Teotlalzingo; a San Lorenzo Chauzingo le fueron alquilado dos candiles a sus mayordomos. Y el año de 1862 se rentaron dos pilastras y diez bandillas a San Martín y una alfombra a José Pinto de Huejotzingo. En 1861, además del alquiler, el encargado del templo recibió la limosna que dio don Felipe Flores para la misa de la Purísima Concepción, y un peso de limosna de don Gregorio Flores por sepultura de su criatura; para el año de 1862 el fiscal recibió la limosna del mayordomo de la Purísima Concepción, don Mariano de Jesús.¹² En cuanto a las rentas podemos notar la amplitud geográfica que alcanzó, ya que por mencionar un ejemplo se ubica al distrito Huejotzingo. Entonces podemos decir que las actividades financieras de San Buenaventura Tecaltzingo crearon redes amplias, lo que también refleja la comunicación que tenía el pueblo con las diversas comunidades de la región, en las municipalidades aledañas a Texmelucan.

En cuanto a los gastos de las cuentas anteriores, los tres fiscales compraron diversos materiales como papel florete, sal para el agua bendita, compra de un petate, obleas para sellar cartas, listón para hábitos y el pago del sacristán como auxiliar del templo. Pero el cambio que operó de manera importante,

10 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 58r-58v.

11 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 23v. dentro de sus compras del año mencionado, se haya escobetas, jabón, jarritos de vidrio, compra de cohetes.

12 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 27r, 29r-32r.



consistió en la frecuencia de la celebración de las misas, porque este ritual litúrgico, a partir de 1860, se celebraba cada quince días, en contraste con años anteriores que se decía misa sólo cuando había sacerdote. Es muy probable que la alteración del pago por misa de un período indefinido, a uno fijo, haya generado la búsqueda de nuevos mecanismos para conseguir ingresos. Por otro lado, la cuenta de 1862 registró un gasto vinculado directamente con el ámbito civil de contexto regional, y fue de los treinta pesos que se entregaron al alcalde para el sueldo del soldado que fue asignado al pueblo.¹³

En San Juan Tuxco para el año de 1862, los fiscales Juan Trinidad y Domingo García. Además de las tareas mencionadas, se recibió la donación de don Miguel Moreno para ayudar a cubrir las dominicas de los hijos del pueblo que fueron a trabajar a las fortificaciones que el gobierno dispuso en la ciudad de Puebla, así como la donación para el aceite del Santísimo. Los gastos fueron muy similares a los cubiertos en Tecaltzingo, salvo por dinero enviando al obispado para el santo jubileo del Santísimo Patriarca, por la compra de material para la iglesia y por una cruz nueva para el cerrito.¹⁴ Como puede observarse, los fiscales cubrieron todas las necesidades que emergieron de las prácticas devocionales de la comunidad y, a su vez, se adaptaron al contexto.

Si bien la mayoría de las funciones eclesiásticas ya eran contempladas por lo fiscales, hubo algunas que surgieron debido a un evento local. Uno de los gastos imprevistos fue la misa que se pagó en honor del santo patrón San Buena-ventura por la recepción de la escritura pública del agua el 30 de mayo de 1864.¹⁵ Entonces, podemos deducir hasta ahora, que las habilidades administrativas de los fiscales tuvieron que estar a la altura del cargo, para así responder ante diversas necesidades y circunstancias del momento.

En 1861 don Domingo Pérez, como alcalde del pueblo, presenta una cuenta donde informa sobre recursos de la iglesia. Destacan los 13 pesos y dos reales del diezmo pío, cuales no pudieron ser entregados a la colecturía por circunstancias de la guerra.¹⁶ La relevancia, en esta ocasión, no fue de los gastos cubiertos, sino la dinámica de entrega de los sobrantes, ya que el alcalde devolvió los recursos al fiscal y posteriormente quien recibió los recursos fue el alcalde del pueblo.

13 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 27r, 29r-32r, 33r-37r.

14 AHSJT, Fondo: Ayuntamiento, sección: gobierno, serie: Cuentas, fol. 21-27r.

15 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 45r-47. En la data también fue asentado el pago del albañil por tapar las goteras de la iglesia.

16 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 79r-82r.



No obstante, no fueron las únicas adaptaciones. Para el año de 1862 el alcalde de Tecaltzingo, Ascensión Alvarado, entregó una cuenta de cargo y data. El documento abarca del 16 de septiembre de 1862 hasta junio de 1863. El rasgo distintivo de la cuenta radica en señalar que, el mencionado alcalde, se refiere como “bienes de la comunidad” a aquellos ingresos de diferentes actividades y cargueros de la iglesia. De esta forma, el señor Alvarado se auto entrega el sobrante del *mixatomin* y el diezmo como fiscal, que fue de 1861, así como 54 pesos, un real, cinco octavos. Además del dinero que dio el mayordomo de la comunidad, y de otros 45 pesos que recibió del mayordomo don Jacinto Montes por once cargas de maíz de la comunidad que se comercializó en el mismo pueblo, y por seis pesos, dos reales, que recibió de una carga y media de frijol que se vendió. De todos los recursos mencionados, y con relación a fondos de la iglesia, el único gasto que se hizo fue cubrir aquellos causados por la función del Sagrado Corpus, celebrada en la iglesia del pueblo.¹⁷ Los datos anteriores muestran un conflicto entre las autoridades civiles y religiosas por el hecho de no entregar el señor Alvarado, como fiscal, los recursos, debido a que el alcalde buscó continuar administrando.

No obstante la diferencias entre fiscales y alcaldes terminaron pronto, ya que el trabajo conjunto en los años siguientes muestra colaboración. En el año de 1871 el alcalde Domingo García fue el encargado de recaudar las cooperaciones para el *huilpitomin*, *ceratomin*, y *xolaltomin* aportadas por los vecinos de San Juan Tuxco. Cabe mencionar que, como sucedió en años anteriores, una vez cubiertos los objetivos de las cooperaciones, también eran satisfechas otras necesidades de la iglesia. En esta ocasión se pagaron los gastos por la compra de material y pago al albañil por los trabajos en la pared del cementerio, por la limosna para San Miguel y por la compra de: un guajolote, carne de res, manteca, sal, pan, cuatro codillos, tomates, olores (especias), carbón, café y azúcar. Estos ingredientes, es probable, que hayan dado como resultado la elaboración de mole y la bebida para acompañarlo.¹⁸ En resumen, la suma de gastos totales fue de 305 pesos 25 centavos, dejando un saldo a favor de 3 pesos 5 centavos.¹⁹ Dichas cantidades permiten crear una idea de la cuantía de los recursos que manejaban las autoridades religiosas y el fiscal hacia finales del siglo XIX.

La evidencia que hasta ahora se ha encontrado en las fuentes de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco, proyecta a la fiscalía como una institución con una estructura lo suficientemente sólida. También las diversas fuentes muestran la habilidad para desarrollar una serie de mecanismos, como fue el alquiler de ornamentos sacros a otros sitios y de aprovechar los recursos por la

17 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 84r-87r.

18 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, fol. 49v.

19 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, fol. 45r-49r.



venta de granos producidos en terrenos de la comunidad. Por lo tanto, las fiscalías de Tecaltzingo y Tuxco, al asumir la organización del pecunio revelan una continuidad en la posesión de propiedad comunal a pesar de la emisión de la Ley Lerdo y de la promulgación de la Constitución de 1857.

1.4. El apoyo de las autoridades civiles en la rendición de cuentas

Los últimos ejemplos del apartado anterior han señalado un conflicto de intereses entre las autoridades que ocuparon los cargos de fiscal y de alcalde en San Buenaventura Tecaltzingo. Sin embargo, en la década de 1850 su aparición conjunta proyecta la participación de las autoridades civiles como un acto para dar veracidad y legalidad a los documentos.

No obstante, en la mayoría de las cuentas que presentaron, en conjunto autoridades civiles y religiosas destacan los registros eventuales. Para 1856 el fiscal Antonio Montes y el juez de paz, Pascual Manuel Alvarado, recaudaron la contribución *mixatomin*. Del pecunio reunido, se hizo el pago al presbítero Hilario Antonio Yáñez por una plática que dio el día de la comunión.²⁰ Como podemos notar, el uso y la administración del *mixatomin* cubrió otras necesidades que seguramente no se tenían contempladas.

De igual manera los registros que llaman nuestra atención fueron aquellos de ingresos novedosos. Para el año de 1858 el fiscal Juan Francisco Alvarado y el juez primero de paz Miguel García, reportaron la entrada de otros ingresos que en este caso fue por la venta de un pedazo de tierra de la comunidad a don Pedro José y de otro terreno a don Tiburcio Flores, con el consentimiento de los principales, a un precio de cinco y tres pesos, respectivamente.²¹

Ahora bien, ya se ha presentado una serie de cuentas donde aparecen como encargados el fiscal, alcalde o juez de paz, pero en los recibos sólo firma el fiscal, entonces podemos inferir que la participación de la autoridad civil fue para dar un carácter legal y oficial al acto. Aunque en otras ocasiones su participación sería impulsada por su idea de servicio al pueblo.

1.5. Los enseres religiosos y el arreglo del templo

En cuanto a sus deberes como encargados del templo, los fiscales tuvieron la tarea del arreglo, ornato y en su caso el disponer la hechura de nuevas imágenes religiosas. Si bien en el siguiente ejemplo no se especificó qué funcionario estuvo a cargo de una petición de esta naturaleza, sí se menciona la participación de varios individuos, además de mostrar la inversión de todo el proceso. De esta

20 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol.66r-67r.

21 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 68r.



manera, en el mes de enero de 1839 fueron asentados una serie de pagos para la manufactura de una virgen de la Purísima Concepción y el arreglo de otra. Una vez que reunieron el dinero suficiente, el 24 de enero fueron cubiertos 13 pesos por concepto de pago al escultor por pintar, encarnar y montarle manos a la imagen de la Purísima existente en la iglesia del pueblo, y otros 20 pesos por la confección de una nueva virgen. Pero debido a la solemnidad de la imagen, fueron adquiridos también un par de aretes de plata con piedras blancas francesas de tres pendientes, los cuales no podrían ir solos. Para ello se pagaron seis pesos a don Ignacio Escalona por una aureola formada por estrellas de plata que sería acompañada por un capelo de otate y papel de un costo de seis reales, adorno que fue entregado en mayo. Debido a la desbordante devoción que el pueblo profesaba a la madre de dios, los habitantes de Tecaltzingo, decidieron el 28 de abril de 1839 cubrir 10 pesos de cuenta del vestido de la Santísima Virgen.²²

Cabe mencionar que para manufactura de la imagen se recibieron considerables aportaciones monetarias por el señor don Francisco Teyssier. Aunque también los recibos dejan en claro las aportaciones del pueblo, no solo para los gastos de la Virgen, sino también para renovar el santo patrón, que comenzó a recogerse el 18 de abril de 1848.²³ En otro orden de ideas, los ejemplos de los apartados anteriores han señalado a los mayordomos como parte de la estructura de la fiscalía, donde su tarea principal era la recaudación de limosna de las imágenes existentes en la iglesia. No obstante, los documentos anteriores refuerzan nuestro argumento, por ser el fiscal el encargado de mandar fabricar nuevas vírgenes o santos, y no el mayordomo, como sucedió en otros sitios.

En este contexto, la elaboración de la imagen del patrón de Tecaltzingo en 1848 estuvo a cargo del tesorero Tiburcio Nicolás y del alcalde Casimiro Ramírez, quienes para cubrir los gastos vendieron el maíz y trigo que se cosecharon de los terrenos de la iglesia, a 25 pesos, dos reales y 64 pesos, un real, respectivamente. Con el dinero reunido los encargados pagaron los honorarios del maestro escultor, y como la intención era tenerlo listo para su función titular, pagaron al sastre por el bordado de un bonete, por la elaboración de un vestido de tafetán azul con su manto encarnado, además de un roquete de muselina con encaje fino, el forro para el hábito y un capelo para el santo patrón. Una vez hechos todos los aditamentos para cumplir con la solemnidad necesaria, los encargados pagaron por la compra de cohetes, por la misa y por la procesión del Santo Patrón por las principales calles del pueblo el 14 de julio, día de la fiesta patronal.²⁴ De esta manera, se cubrieron todos los aspectos y gastos de una celebración litúrgica.

22 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: pagos, fol. 1r-1v.

23 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: pegar, fol. 2r.

24 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 56r-57v.



Los datos anteriores muestran que el ornato de los santos debió tener la misma atención para el fiscal que la elaboración de sus imágenes. Entonces, mecanismos para la recaudación de los ingresos dependieron del encargado, que en algunas ocasiones trabajó de forma conjunta con las autoridades civiles. Así se hizo en 1848 cuando el responsable de cobrar y vigilar la obra del colateral de la iglesia de Tecaltzingo fue el tesorero don Pascual Manuel Alvarado. Para conseguir los ingresos, el mencionado funcionario emprendió el cobro de la promesa que hicieron al “Padre señor San Buenaventura”, por algunos vecinos del pueblo. Sin embargo, al parecer los altos costos de la obra llevaron a la extensión del tiempo previsto, ya que otra lista registró el mismo hecho pero ahora a cargo de Tiburcio Nicolás Pérez como tesorero.²⁵ Sin embargo, el medio más eficaz para conseguir recursos fueron las cooperaciones hechas por los hombres de la comunidad. Un caso singular se presentó en 1857 cuando los vecinos de Tecaltzingo aportaron un real cada uno para las campanas de la iglesia que comenzaron a pagar el 18 de diciembre.²⁶

Cabe resaltar que la elaboración de campanas formó parte de un proyecto de larga duración, que dio inicio en 1846 bajo el mando del fiscal Luis Alvarado, quien así lo refiere en la cuenta que rinde a los hijos del pueblo. En ella señaló que uno de los gastos fue el pago de ocho arrobas de metal para la campana con su badajo. Al siguiente año de 1847, el fiscal Ventura Escobar, aparte de pagar al sacerdote por oficiar las misas, continuó con la obra de las campanas, ya que cubrió el sueldo del maestro herrero por su trabajo y por la manufactura de dos argollas y del badajo de la campana, donde para sostenerlo el alguacil de doctrina compró una cadena de dos varas de largo.²⁷ En el mismo año, el alcalde Bernardino Pérez emitió una cuenta que manifestó sobre la entrada de bienes del común; en ella quedó asentada la compra de alfalfa para el caballo del maestro campanero, el pago al mismo por la fundición de dos badajos, uno de ellos para la campana mayor.²⁸ La evidencia anterior muestra el trabajo y gastos compartidos entre las autoridades civiles y religiosas de Tecaltzingo, lo que subraya una estrecha colaboración entre autoridades, más que subordinación.

Como podemos observar, el sistema de cargos en San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco, rebasó los ámbitos civil y religioso para superponerse al bienestar de los pueblos. Así, la ayuda que se manifestó en la administración de los fondos de la Fiscalía, por el acalde y juez de paz, reflejan la vastedad y connotación que el concepto “servir” tenía en los pueblos del siglo XIX. De

25 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: donaciones, fol. 1r-2r.

26 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: pagos fol. 10r.

27 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 48r-49, 50r-51r... En dicha cuenta también fueron asentados el pago del carpintero, el pago de tres canales de cantera, sueldo del albañil como parte de las mejoras en la iglesia.

28 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 52r-54r.



acuerdo con Frank Cancian (1996), este fenómeno se desarrolló porque el sistema de cargos es el núcleo de la estructura social y por ende se convierte en el soporte de las relaciones que en ese contexto surgen. Como ejemplo en este artículo, se destaca el trabajo conjunto del fiscal con las autoridades civiles ya que, de acuerdo con el autor, en los niveles superiores fue que la integración de las funciones políticas y religiosas fue muy estrecha. Misma que se refleja en la administración de los fondos de la iglesia.

Una muestra más de esta dinámica es una cuenta de 1849, que se hizo por la fabricación del retablo de la iglesia. En ella se asentó la entrega de unos pesos por don Simón Santos, mayordomo de la venta de trigo. No obstante, debido a la magnitud del encargo, el tiempo de fabricación duro más de un año. El 10 de febrero de 1850, don Miguel García entregó 17 cargas de maíz de la comunidad, las cuales fueron vendidas y el importe fue destinado para el mismo fin.²⁹

Por otro lado, en la cuenta de cargo y data de 1854, aparece el comisionado Francisco García acompañado de Marcelo Escobar, vecino encargado de recaudar la cooperación de dos reales para la reposición del templo. Ahora bien, es importante puntualizar que los acaldes don Miguel García y don Domingo Flores trabajaron de forma conjunta en la obra. La ayuda en especie provino del primer alcalde y del Fiscal Mariano Escobar por la cantidad de 25 pesos, siete y $\frac{1}{2}$ reales, por la renta de ornamentos sacros; además de los 30 pesos con siete reales que dieron los mayordomos Felipe Escobar y Antonio Luis, también efectuaron una aportación de dos pesos un real los faroleros. Aparece de nueva cuenta el alcalde Miguel García, quien hizo entrega de 12 pesos, cinco reales, por la venta del maíz de la comunidad; de nueve pesos, seis reales, por dos cargas de trigo helado y, también, de 26 pesos que dio el fiscal Hipólito Pérez por donación del cura.³⁰

Como podemos observar el dinero que se recaudó asciende a los 100 pesos, lo suficiente para comprar diversos materiales de construcción dentro de los que destacan la adquisición de ocre, acero, una libra de oro, entre otros; pero también se cubrieron los sueldos del albañil, del oficial y del tlacualero.³¹ Y como los recursos fueron suficientes se dio comienzo a los arreglos del atrio de la iglesia. En esta ocasión las personas que laboraron lo hicieron en cuadrillas, cuales se rolaron de forma semanal del 13 de febrero al 2 de mayo de 1854. Los grupos fueron dirigidos por dos albañiles, uno de ellos con el nombre de oficial, siendo los únicos que trabajaron todas las semanas, ya que los peones fueron rolados entre los vecinos del mismo pueblo. Entonces, la delegación anterior de arreglos del templo por parte del fiscal de Tecaltzingo nos lleva a pensar que para la

29 AHFT, Fondo: Ayuntamiento, sección: Hacienda, serie: cuentas de cargo y data, fol. 12r.

30 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 10r.

31 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: cuentas de ingresos y egresos, fol. 10v.



segunda mitad del siglo XIX, la fiscalía recibe apoyo de otros funcionarios, ya sean civiles o religiosos, para cumplir con su obligación de encargarse del arreglo de la iglesia, incluida la participación del resto de los habitantes.³²

Así como los arreglos de la iglesia, su ornamentación y la manufactura de imágenes, los enseres para los rituales religiosos también fueron importantes. Los medios para adquirir todo lo necesario fue otra de las tareas del fiscal; una de ellas fue conseguir la cera. Para ello en 1869 el fiscal Francisco Morales de la iglesia de San Juan Tuxco, entregó la cera parafina del señor San José al maestro cerero, junto con una arroba de tres libras, media arroba de cera y media libra de pabilo que se compró para la manufactura de velas nuevas, las cuales serían utilizadas en la festividad del señor San José del día 19 de marzo.³³

En San Juan Tuxco las obras de gran interés para la comunidad, respecto a asuntos de la iglesia, eran expuestas en juntas generales, ya fuera para informar o para decidir sobre la viabilidad de alguna obra. Así sucedió cuando las autoridades del pueblo comunicaron a sus vecinos el costo de siete reales para la fundición de una campana nueva. Si bien la fuente no refiere una fecha, se ubican una serie de recibos de 1873 emitidos a diversos vecinos como los que se entregaron a Florentino Reyes, Rafael Remigio, Guadalupe Vázquez, entre otros, por su cooperación. En tales documentos se haya la firma de don Miguel Escobar como posible encargado, además del número de abonos que hizo cada uno de los habitantes del pueblo.³⁴ Por otro lado en el año de 1873, el señor Escobar aparece como juez de paz, evidencia que en San Juan Tuxco también hubo una activa participación de autoridades civiles en asuntos religiosos.

Con el ejemplo anterior, podemos observar que las decisiones comunales continuaron a pesar de las legislaciones estatales y federales, las cuales fueron encaminadas a eliminar esas prácticas las formas de antiguo régimen. Así el 18 de agosto de 1895, reunidos la mayor parte del pueblo en el atrio de la Iglesia después de escuchar misa, Pedro Romero como fiscal y algunos vecinos de Tuxco, hicieron la propuesta de la pavimentación del atrio o la construcción de dos capillas que formaría el crucero en el templo. Después de dialogarlo, la decisión fue realizar la obra del crucero. Una vez elegido el proyecto los vecinos no sólo dieron su aportación monetaria, también su participación fue encaminada al trabajo personal y acarreo de material, bajo pena de multa por incumplimiento. Y

32 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: servicio a la comunidad, serie: trabajos, fol. 6r-9r. Si bien el documento anterior no menciona a cargo de quien se emitió, William Taylor señala que estas eran funciones propias del fiscal y que precisamente vigilar a los trabajadores que semanalmente presentan sus servicios a la iglesia era una de sus tareas. Véase *Ministros de lo Sagrado*, vol. II, de William Taylor.

33 AHSJT, Fondo: Fiscalía, sección: justicia, serie: correspondencia, fol. 4r.

34 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: Justicia, serie: correspondencia, fol. 1r-3.



para dar legalidad a la asamblea, el acta fue firmada por el fiscal Pedro Romero y los demás moradores del pueblo.³⁵ Como podemos notar, las legislaciones de 1894 y la Ley del Gobierno político no impidieron la reunión de los vecinos de Tuxco y el que deliberaran sobre dos acciones que llevaron beneficios al pueblo.

Ahora bien, una vez expuestos los ejemplos anteriores, debemos considerar que la entrada de los personajes políticos en asuntos religiosos también se entiende por su religiosidad y por el sentido de pertenencia e identidad que otorga el santo patrón, debido a que este elemento sociocultural se presenta como un cohesionador. Así, el argumento de Pedro Carrasco (1990) al señalar que en las comunidades del siglo XIX la unión de los dos ámbitos se generaba con participación de las autoridades civiles en funciones religiosas, sobre todo en el financiamiento de dichas festividades con los bienes comunitarios, provocando de esta manera vinculación de los dirigentes de la comunidad con ambas instituciones. Por lo tanto, las fuentes de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco proyectan a la fiscalía como una institución con una estructura sólida, que le permite absorber y cubrir sus necesidades como la celebración del calendario litúrgico, pero siempre manifestando un apoyo de las autoridades civiles.

1.6. Festividades religiosas

Las celebraciones del calendario litúrgico siempre han representado un aspecto fundamental en la vida de los pueblos, por ello analizar su desarrollo durante el siglo XIX es relevante debido al clima de inestabilidad. Y para lograr una indagación lo más completa posible deben considerarse las actividades previas a las fiestas religiosas. Así, el mantenimiento o restauración las imágenes, comprar tela, adquirir adornos y procurar el lucimiento adecuado de la iglesia, eran tareas complejas en las se esmeraban los fiscales. El objetivo de cumplir con estos deberes radicó, sobre todo, en dar la debida solemnidad a las celebraciones religiosas y al santoral local. Por lo que respecta a las fiscalías de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco, sus fuentes revelan un esfuerzo para llevar a cabo las celebraciones, tal y como presenta a continuación.

De esta manera, en primer lugar podemos citar los preparativos para las celebraciones. En el año de 1848 Pascual Manuel Alvarado, elaboró una lista a fin de recabar las obvenciones que se comprometieron y entregaron los vecinos para el adorno de la iglesia. Pero en 1849 no todos los vecinos de San Juan Tuxco dieron su aportación para la festividad de Nuestra Señora de la Concepción del día 8 de diciembre; no obstante, en días posteriores se efectuó el cobro a los faltantes, para probablemente cubrir los costos de la comilona, deducción a la que se llega debido a una lista donde se asentó la compra de frijol, arroz, chile, canela y

35 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: iglesia, serie: asuntos religiosos, fol. 1r-2r.



azafrán, todos ingredientes para elaborar mole.³⁶ Por otro lado en el año de 1864, el alcalde don Agustín Ramírez pagó a José Isabel Saloma 28 pesos por las misas y demás actividades celebradas en la festividad del Santo Patrón San Buenaventura³⁷; pecunio que se reunió por aportaciones de los vecinos, por cargueros de la fiscalía y por donaciones de particulares.

Como podemos notar, en Tecaltzingo, para estos años, el fiscal no cubrió las comilonas de su patrimonio, sino sufragaba los costos con recursos recaudados, aunque en ocasiones recibió apoyo de otros funcionarios. Entonces, podemos decir que el fiscal, en comparación con el mayordomo, continuó administrando durante el siglo XIX los fondos comunes que estaban a su cargo, situación que le permitió cubrir gastos complementarios para las festividades, como fue el pago de danzantes, músicos y cohetes.

El objetivo de cubrir los costos de enseres y actividades era para dar la mayor solemnidad de la función patronal de Tecaltzingo. El día 16 de julio de 1864 se celebró una misa rezada y por la tarde se llevaron a cabo las vísperas. Al día siguiente las celebraciones continuaron con una misa de tres padres para después participar en la procesión y culminar la jornada con un rosario y otro rezo de las vísperas. Para el día 18 la misa fue cantada, de un solo padre y después una procesión, culminando las celebraciones del pueblo el día 19 con una misa de consumación.³⁸ El total de gastos de los tres días de festividades alcanzó la cantidad de 26 pesos, cifra considerable para un pueblo no mayor a 250 habitantes que, sin embargo, celebraban rituales litúrgicos con tal magnitud.³⁹

En San Juan Tuxco, los costos de la festividad de la Virgen de Guadalupe alcanzaron la cantidad de 11 pesos, un real y medio, dinero que cubrió una misa cantada que ofició Fray Buenaventura Gazca, Don José María Barreda, y don Carlos Muñoz, además del rezo de las tercias y una procesión, en 1880.⁴⁰ Las erogaciones anteriores nos muestran cómo los fiscales tenían como prioridad cubrir los actos litúrgicos, empero la función del señor San Juan, señaló también la participación de comisionados, quienes cubrían los gastos por la música de viento, por derechos parroquiales y los costos por fuegos pirotécnicos,⁴¹ pero quienes administraron esos recursos fueron los fiscales.

36 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: lista de contribución y padrones, fol. 91r.

37 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Pecunio, serie: fiestas religiosas, fol. 1r, 3r-4r.

38 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: pecunio, serie: fiestas religiosas, fol. 4v.

39 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: listas de contribución y padrones, fol. 103r.

40 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: iglesia, serie: asuntos religiosos, fol. 6r.

41 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, fol. 25r-28r.



En 1875 el padrón que se elaboró para el cobro de las dominicas a cargo de los fiscales Hermenegildo Pérez y Santiago Reyes, también registró la recaudación de dos reales por individuo para la cera del Castísimo Patriarca San José, en el mes de marzo con un costo de dos reales. Dentro de los gastos que se cubrieron destacan la compra de la cera en arrobas, la manufactura de la misma en velas, el costo de una misa especial, el pago de otra misa para la fiesta titular, así como cubrir el recaudo para la comida.⁴² El último costo mencionado subraya que la fiscalía cubrió necesidades que no eran propiamente espirituales como las comidas, pero de igual manera fortalecían la relación entre fiscal y feligreses ya que, en nuestra opinión, la convivencia misma se observó como un acto de retribución y a su vez un aumento de prestigio para el fiscal.

La diversidad de rituales litúrgicos realizados tanto en San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco confirman la propuesta de Taylor y Chance (1987) cuando argumentan que, después de la Independencia, los pueblos reconstruyeron la organización de las ceremonias, al otorgar un peso importante a los rituales católicos como elementos que reforzaron al interior factores de un conjunto de identidades locales. Los datos sobresalientes se hallan en un incremento cada vez más notable de las autoridades civiles en asuntos de la iglesia, como modalidades de apoyo a los fiscales. Pero no sólo para hacer recaudaciones, sino también para la venta de algunos productos. Una actividad que se aborda en el siguiente apartado

1.7.- La Fiscalía. Una institución con visión mercantil en provecho de la religión

En el apartado anterior ya han sido señalados algunos mecanismos que fueron utilizados por los fiscales para generar mayores recursos monetarios, donde el alquiler de ornamentos sacros fue uno de ellos, sin embargo, no fue el único medio. En este apartado la venta de semillas aparece como una actividad que en los pueblos de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco, generó un ingreso adicional para cumplir con las obligaciones espirituales del pueblo.

La actividad más común fue la venta de granos provenientes de los terrenos de comunidad. Ya desde 1842 se haya este tipo de actividad mercantil entre las autoridades de la fiscalía y los habitantes de San Buenaventura Tecaltzingo. En dicho año se elaboró una lista donde se asentó el cobro de cinco reales a los habitantes del pueblo que recibieron maíz, y que lo comenzaron a pagar el 23 de octubre. Lo que nos indica que todos recibieron la misma fracción de maíz, pero no siempre fue así. En 1848, Basilio Aniceto repartió el maíz el 18 de junio, sólo que en esta ocasión los vecinos recibieron medidas diferentes. Por ejemplo,

42 AHSJT, Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data. Fol.25r-30r.



Manuel Trinidad y Encarnación Pérez recibieron una media por la que pagaron siete reales; Pedro Coras adquirió un tercio a un costo de un peso, siete reales, y Mariano Santos una cuartilla de maíz por la cual pago tres reales y un cuarto.⁴³ Ahora bien, de acuerdo con las fechas de entrega se podría sugerir que los habitantes de Tecaltzingo realizaban dos cosechas al año de maíz.

Por otro lado, en la misma fecha el mayordomo Basilio Aniceto vendió una gran cantidad de maíz al señor don José María Miranda a un precio de 50 pesos, un real; debido a la magnitud de la transacción estuvieron presentes el alcalde don Antonio Montes y el tesorero Tiburcio Nicolás Pérez, así como el resto de los vecinos del pueblo.⁴⁴ La cantidad del grano no se registró, pero el dinero pagado denota, en primer lugar, una alta producción de maíz en el pueblo y, en segundo lugar, proyecta relaciones comerciales lo suficientemente sólidas como para crear ventas con personas con alto nivel económico. Por otro lado, la venta del ancestral alimento en Tecaltzingo resulta controversial por el hecho de que en el curato de Texmelucan se hallaban haciendas y ranchos, sin embargo, esta es una cuestión para otro proyecto de investigación.

Cabe mencionar que la venta no fue la única modalidad para la adquisición de granos, ya que en algunas ocasiones fueron “fiados” como ya se ha citado párrafos arriba. En otras palabras, los granos eran entregados y el pago lo hacían posteriormente, como lo evidencia la lista de ciudadanos que debían el maíz que se obtuvo del terreno de la iglesia en el año de 1858, a razón de cinco pesos carga; salvo que de los compradores, sólo tres adquirieron una cuartilla y el resto un tercio.⁴⁵ Por otro lado las fuentes señalan que el fiado y compra fueron prácticas mercantiles comunes.

Un caso significativo ocurrió en 1859, cuando el mayordomo Santos Roldan registró de forma conjunta la venta y fiado de semillas. En el mismo documento fueron consignados por separado el tipo de semilla y los nombres de vecinos de Tecaltzingo que las adquirieron. El caso del maíz es relevante porque se especificó que era propiedad del Santo Patrón, y por lo mismo fue entregado por conducto de los principales del pueblo, así como del mayordomo. Con respecto al frijol, esta semilla tuvo una venta menor, ya que sólo cuatro personas lo compraron. Por último, el trigo fue fiado, empero, por una extraña razón tuvo una mayor demanda que el frijol, ya que la entrega de este grano generó ingresos por 12 pesos, 6 reales, 2/8.⁴⁶

43 AHFT, Fondo: fiscalía, sección: Servicio a la comunidad, serie: prestamos, fol. 1r-2r. Respecto a la venta que hace Basilio Aniceto en 1848 solo registro de una cuartilla de frijol a un precio de 4 reales.

44 AHFT, Fondo: Fiscalía, sección: Servicio a la comunidad, serie: prestamos, fol. 2v.

45 AHFT. Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, fol. 50r.

46 AHFT. Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, sin fol.



De esta manera debe entenderse que la venta de granos se debió por diversos factores; pero el más sobresaliente es que eran parte de la base alimenticia de los pueblos, mas cabe destacar que, sólo el maíz producía lo suficiente para un comercio con mayor dinamismo. Sin embargo, el año de 1860, el mayordomo Martín Juárez vendió trigo –que pertenecía a la iglesia– a los vecinos del pueblo, a razón de cinco pesos carga, pero al interior de la lista la mayoría solo pagó dos reales $4/8$, cinco reales y José de los Santos invirtió la cantidad de dos pesos, seis reales $4/8$.⁴⁷ Si bien no fue asentada la medida que adquirieron las personas, podemos notar basándonos en el total de ventas, que el consumo de trigo era muy inferior al del maíz. Ya que por el primero se pagó 13 pesos 2 reales y por el segundo 59 pesos, seis reales.⁴⁸ Durante el mismo año, los habitantes del Tecaltzingo compraron frijol de la comunidad a cargo de mayordomo Martín Juárez, por lo que erogaron cuatro pesos, un real, por la venta total del mismo.⁴⁹

Como podemos notar, ya sea por las cantidades pagadas o por las medidas que se vendieron, la producción de los granos como el maíz y frijol, inclusive el trigo, fue de consideración. Desafortunadamente las fuentes no confirman el uso o destino del trigo, pero suponemos que se destinaba a la producción local de pan. La única evidencia que pudiese tener relación con este arriesgado señalamiento es la venta de una carga y una arroba del cereal a un precio de ocho pesos, cinco reales $2/8$ al Molino de San Simón.⁵⁰

Los datos anteriores de nueva cuenta subrayan las dotes mercantiles de fiscales, por las ventas que realizaron no sólo al interior del pueblo sino al exterior, lo que convirtió al expendio de semillas en la actividad más redituable a fin de generar ingresos para la iglesia.

Con los tres últimos ejemplos mencionados podemos inferir que otra de las funciones que llegaron a realizar los mayordomos fue colocar y vender las cosechas procedentes de los terrenos del Santo Patrón, con la única intención de cubrir los gastos de las celebraciones del calendario litúrgico. Por lo tanto los fiscales de Tecaltzingo y Tuxco, como máxima autoridad encargada de la iglesia, y por ende de las festividades religiosas, se posicionan no solo como administradores de recursos, sino que colocan a la fiscalía con una fuerte presencia en la economía local y un eje articulador socio-cultural que ayudó a mantener sus usos y costumbres.

47 AHFT, Fondo: fiscalía, sección: Servicio a la comunidad, serie: Prestamos, fol. 7r.

48 AHFT, Fondo: fiscalía, sección: Servicio a la comunidad, serie: Prestamos, fol. 8r.

49 AHFT, Fondo: fiscalía, sección: Servicio a la comunidad, serie: Prestamos, fol. 8v.

50 AHFT. Fondo: ayuntamiento, sección: hacienda, serie: cuentas de cargo y data, sin fol.



A manera de conclusión

Después de una revisión y análisis de fuentes de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco del siglo XIX, se puede concluir que la Fiscalía como institución encargada de la fe y las iglesias locales, mantiene una estructura definida donde el fiscal es la máxima autoridad; desde esta posición conserva a lo largo de la centuria decimonónica la administración de los recursos y bienes de la iglesia. No obstante, los oficiales de doctrina tuvieron que adaptar la organización y recaudación los impuestos eclesiásticos ante los conflictos políticos de la nación. Sin embargo, el ambiente de inestabilidad política e intervenciones extranjeras no evitó que los fiscales cumplieran sus obligaciones de proporcionar lustre y mejoras del templo, así como todas aquellas necesidades que emanaron indirectamente de tales deberes. Ahora bien, como parte de los cambios se puede señalar la participación de autoridades civiles en las tareas de los fiscales, pero no como una manifestación de irrupción de los ámbitos de poder, sino más bien como figuras de apoyo mutuo entre autoridades para conservar y administrar los bienes de comunidad. Por lo tanto, subrayamos la adaptación de las obligaciones de los fiscales al contexto socio-político, lo que les permitió continuar con sus antiguas prácticas. Donde la idea de servicio entre los habitantes de Tecaltzingo y Tuxco no distinguió entre lo civil y lo religioso. ☸



Referencias

Archivo Histórico de la Fiscalía de Tecaltzingo

Archivo Histórico de San Juan Tuxco

CANCIAN, FRANK (1996). “Organizaciones políticas y religiosas”. En: Lief Korsback (coord.). *Introducción al sistema de cargos*. (s/p). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

CARRASCO, PEDRO (1979). “La jerarquía cívico-religiosa en las comunidades de Mesoamérica: Antecedentes precolombinos y desarrollo colonial”. En: José R. Llobera (coord.). *Antropología Política*. (s/p). España: Editorial Anagrama.

CARRASCO, PEDRO (1990). “Sobre el origen histórico de la jerarquía político-ceremonial de las comunidades indígenas”. En: Modesto Suárez (coord.), Universidad Iberoamericana (comp.). *Historia Antropología y Política, Homenaje a Ángel Palerm*. (s/p). México: Alianza Editorial.

CHANCE, JOHN y WILLIAM TAYLOR (1987). “Cofradías y Cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”. En: *Antropología, Boletín oficial del instituto Nacional de Antropología e Historia*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

CONTRERAS HERNÁNDEZ, JESÚS (1995). *Monografía Histórica de San Juan Tuxco. Presidencia Auxiliar de San Juan Tuxco, Municipio de Texmelucan 1993-1996*. México.

CONTRERAS HERNÁNDEZ, JESÚS (1996). *Historia general de la Parroquia de San Martín Obispo*. México: Gráficos ODIN.

GÓMEZ GARCÍA, LIDIA (2010). “Las fiscalías en la Ciudad de los Ángeles, siglo XVII”. En: Felipe Castro Gutiérrez (coord.). *Los indios y las ciudades de Nueva España*. (s/p). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

GUARISCO, CLAUDIA (2003). *Los indios del valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política 1770-1835*. México: Colegio Mexiquense.

PALOMO INFANTE, MARÍA DOLORES (2000). “Cofradías y sistemas de cargos: algunas hipótesis sobre el origen y conformación histórica de las jerarquías cívico-religiosas entre los Tzotziles Tzeltales de Chiapas”, *Cuiculco*, Vol. VII, Núm. 19, s/p.



REYES GARCÍA, LUIS (2009). “Anales tlaxcaltecas: Manuscritos históricos tlaxcaltecas escritos en náhuatl durante la época colonial”. *Tlahcuilo*, Vol. 2, Núm. 8-9, s/p.

TOPETE LARA, HILARIO (2005). “Cargos y otras yerbas”, en *Dimensión Antropológica*, Vol. 33, pp. 91-115. Recuperado de: <http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1116>

WILLIAM, TAYLOR (s/f). *Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII*.





La Ciudad de los Muertos: la transformación socialista del Cementerio General de Mérida, Yucatán, 1918-1919

City of the Dead: the socialist transformation of the General Cemetery in Mérida Yucatán, 1918-1919

Marco Aurelio Díaz Güemez

Escuela Superior de Artes de Yucatán (México)

<https://orcid.org/0000-0002-6448-6500>

trbyuc@gmail.com

Recibido: 7 de enero de 2019.

Aprobado: 7 de junio de 2019.

Resumen

La transformación del Cementerio General de Mérida en La Ciudad de los Muertos entre 1918 y 1919 –realizado por el primer gobernador posrevolucionario de Yucatán, Carlos Castro Morales– fue el punto de partida del arte monumental que desarrolló el socialismo posrevolucionario de Yucatán, tuvo el fin de acompañar al cambio social que proponía con un cambio cultural visible en el espacio público. En este trabajo se pretende comprender la necesidad de iniciar esta operación político-cultural con la remodelación de este cementerio, en atención al proyecto socialista que se fue delineando durante aquellos años. Para ello, se explicará dos procesos que generaron una obra pública de este tipo: el propio proyecto socialista posrevolucionario discutido entre 1916 y 1924, y la vanguardia vernácula, que apostó por la reivindicación del arte maya prehispánico, discutido entre 1911 y 1924. Y asimismo, comprender esta remodelación como una transformación socialista que consiguió crear un santuario laico en el que se logró representar los cambios sociales operados por el régimen posrevolucionario y generó dentro, mediante el mausoleo de la Rotonda de los Socialistas Ilustres, una muestra de la sociedad que se fue corporativizando durante el tiempo que gobernó este régimen.

Palabras clave: arte monumental, arte neomaya, posrevolución, socialismo yucateco.

Abstract

The transformation of the General Cemetery of Mérida in the City of the Dead between 1918 and 1919 - carried out by the first post-revolutionary governor of Yucatan, Carlos Castro Morales - was the starting point of the monumental art that developed the post-revolutionary socialism of Yucatan, had the end to accompany the social change that he proposed with a visible cultural change in the public space. This paper aims to understand the need to start this political-cultural operation with the remodeling of this cemetery, in response to the socialist project that was outlined during those years. For this, two processes that generated a public work of this type will be explained: the post-revolutionary socialist project itself discussed between 1916 and 1924, and the vernacular avant-garde, which opted for the claim of pre-Hispanic Mayan art, discussed between 1911 and 1924. And also, understand this remodeling as a socialist transformation that managed to create a secular sanctuary in which it was possible to represent the social changes operated by the post-revolutionary regime and generated inside, through the mausoleum of the Rotonda of the Illustrious Socialists, a sample of the society that He was corporatizing during the time he ruled this regime.

Keywords: monumental art, Neomaya art, post-revolution, Yucatecan socialism.

1. El socialismo posrevolucionario de Yucatán

El Partido Socialista del Sureste fue el principal protagonista político de la posrevolución en Yucatán. Fue fundado en 1916 como Partido Socialista Obrero, con el visto bueno del gobernador provisional Salvador Alvarado. Luego de promulgada la constitución de 1917, cambió su nombre a Partido Socialista de Yucatán, y en 1921, en su segundo congreso en Izamal, tomó el nombre definitivo de Partido Socialista del Sureste. A partir de 1918 y hasta 1937, todos los gobernadores electos y la mayor parte de los gobernadores interinos provinieron directamente de esta organización. El impacto de este alineamiento político se plasmó directamente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, que del 8 de marzo de 1922 al 11 de abril de 1939 se llamó Diario Oficial del Gobierno Socialista del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

La primera labor del Partido fue articular y concentrar, para la lucha electoral, todas las asociaciones: sindicatos y agrupaciones de jornaleros, de profesionistas y de vecinos que el Gobierno Provisional de Salvador Alvarado fomentó y ayudó a crear entre 1915 y 1917, incluyendo las organizaciones de este tipo que se habían creado antes de 1915. A partir de 1917 –cuando Felipe Carrillo Puerto se hizo cargo del Partido– todas estas asociaciones se fueron transformando en ligas de resistencia, ampliando la participación de los jornaleros y trabajadores rurales, para dar cuerpo a una Liga Central de Resistencia como órgano rector del Partido. Mediante esta labor se consiguió una masa electoral que permitió, continuamente, ganar en las elecciones tanto los ayuntamientos como la gubernatura. El Partido logró alcanzar esta preeminencia política y electoral gracias al apoyo conseguido por parte de sus líderes, de importantes figuras y movimientos nacionales provenientes de la Revolución Mexicana. Primeramente el Plan de Guadalupe y el Ejército Constitucionalista que permitió su fundación; segundo, del Plan de Agua Prieta y los tres grandes generales sonorenses, a partir de 1919, le permitió liquidar a su más difícil contrincante electoral, el Partido Liberal Yucateco del coronel revolucionario Bernardino Mena Brito; y tercero, el apoyo a la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles –desde 1923– le permitió sobreponerse de la pérdida de su líder Felipe Carrillo Puerto durante la rebelión delahuertista entre 1923 y 1924. En 1929, el Partido participó en la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y mantuvo su autonomía, presentándose electoralmente como “adscrito a”, en honor a la memoria de Felipe Carrillo Puerto. A partir del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, el Partido fue ubicado como un sector dentro del comité local del PRM: Confederación de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos de Yucatán Partido Socialista del Sureste, nombre con el que se mantuvo hasta principios de la década de 1950.

La ideología del Partido Socialista del Sureste fue la del nacionalismo revolucionario. Su socialismo fue un perfil ético que le permitió distinguirse y



diferenciarse no sólo con respecto a los políticos y hacendados relacionados con el viejo régimen porfirista, sino también con respecto a sus pares revolucionarios tanto en Yucatán como en México. El socialismo, como fuente bibliográfica y periodística, le proveyó al Partido los argumentos que requería para operar la transformación social a partir de la organización y corporativización de los trabajadores. El gran “problema social” que pretendió atacar el socialismo yucateco fue el mismo que se venía discutiendo desde finales de la época colonial: el problema de la integración del indio maya. Según Eligio Ancona, el Padre Velásquez, líder del movimiento sanjuanista, ya hablaba abiertamente de la devolución de la tierra a sus “antiguos dueños”, en los tiempos de la constitución de Cádiz. Para Justo Sierra O’Relly, el indio maya era el sujeto protagonista de la historia local, tal como lo develó en su libro “Los indios de Yucatán”. Los liberales de la segunda mitad del siglo XIX creyeron que, tras la Guerra de Castas, la desaparición del sistema de autoridad indígena permitiría la liberación del indio y su incorporación a la sociedad que los propios liberales estaban creando. El obispo de Yucatán Crescencio Carrillo y Ancona, en una carta pastoral de 1891, diagnosticó la misma problemática, para lo cual proponía mayor doctrina y evangelización católica:

Hay un elemento que es peculiar á nuestro país, de muy graves trascendencias y muy grandes peligros (...) Hablamos de la diferencia de razas que constituye nuestro pueblo y que hace á los amos estimarse superiores y con sangre diversa de la de sus humildes criados, como descendientes los unos de los conquistadores, y como hijos de los otros de los aborígenes conquistados, de que ha resultado la guerra social o de castas. (Carrillo y Ancona, 1891)

El Partido Socialista del Sureste, de la mano de Felipe Carrillo Puerto, también llegó una determinación similar. Tanto en el Congreso Obrero de Motul de 1918 como el Congreso Obrero de Izamal de 1921, se entendió el socialismo como fórmula o metodología para alcanzar una sociedad sin explotación de algún tipo (PSS, 1922). Esto implicaba la introducción del trabajo colectivo o comunista, y la necesidad de apropiarse de los medios de producción existentes, así como de la socialización de los servicios públicos indispensables, como la salud, las comunicaciones, etc. Esta apuesta política no fue diferente a lo que se discutía en aquel tiempo –recién concluida la I Guerra Mundial– caracterizado por el ascenso de movimientos obreros. La diferencia del socialismo yucateco inicia con la decisión de no adherirse a la Tercera Internacional de Moscú, convencido que estaban los miembros del Partido de tener una fórmula propia y local, un socialismo vernáculo, para llevar a cabo el socialismo o el fin de la explotación del hombre por el hombre. Esa fórmula pasaba por reafirmar al indio maya como el sujeto a “integrar” a la sociedad, tal cual se venía discutiendo en los corrillos políticos desde finales de la época colonial. El Partido Socialista del Sureste proyectó una sociedad culturalmente homogénea en la que el indio maya recobraría el protagonismo, por ser el dueño original y ancestral de la tierra. El punto final



era su redención. Es decir, el proyecto del socialismo posrevolucionario de Yucatán fue “la redención del indio maya”¹.

Evidentemente, para poder llevar a cabo este proyecto revolucionario, el socialismo yucateco se vio obligado a buscar la creación de nuevos cultos civiles que le permitiera ir asentando o configurando las transformaciones que buscaba llevar a cabo. Esta tarea la hubo de realizar de inmediato, antes que la discusión y el debate sobre el proyecto posrevolucionario acabara dentro del partido, el primer gobernador socialista Carlos Castro Morales, quien asumió el cargo el 1 de febrero de 1918. La prensa oficial lo bautizó como el “primer gobernador obrero”; de hecho, en el día de su ascensión publicó un díptico fotográfico, en la que en una foto aparece vestido de “obrero” mecánico de bicicletas, y en la otra, vestido de “gobernador”². En efecto, Castro Morales empezó trabajando como mecánico de bicicletas, luego entró a los talleres de reparación de los ferrocarriles, posteriormente ascendió a maquinista y, finalmente, fomentó el sindicalismo entre sus compañeros para llegar a ser el administrador de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán durante el Gobierno Provisional de Salvador Alvarado. Por lo tanto, fue uno de los fundadores protagonistas, el 23 de abril de 1911, de la poderosa Unión de Obreros Ferrocarrileros que organizó la primera huelga en el Estado ese año y que luego fue parte importante en la fundación del Partido Obrero Socialista en 1916³. En este sentido, Castro Morales fue el único gobernador “ferrocarrilero” dentro del socialismo yucateco. Durante su administración, el Partido pasó de ser un enclave dentro del movimiento obrero-ferrocarrilero (y en el corazón mismo de la empresa Ferrocarriles Unidos de Yucatán) a ser un movimiento agrarista, con miras a obtener una mayor incidencia y protagonismo en la economía estatal, la cual dependía casi por completo de la industria de la fibra de henequén producida en las haciendas.

Una de las grandes problemáticas que Castro Morales tuvo que enfrentar como gobernador fue un agrio distanciamiento con el gobierno carrancista. En 1919, el Gobierno Federal intentó adquirir la empresa Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que operaba hasta entonces como el principal músculo social, financiero y electoral del Partido Socialista. El cabildeo de los diputados socialistas yucatecos logró la negativa por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el debate parlamentario, el Secretario de Hacienda Luis Cabrera Lobato dejó entrever porqué la empresa no estaba resultando factible económicamente: porque había una “parte verdaderamente escabrosa” que consistía en el control de

1 Esta frase fue dicha varias veces a la prensa por Felipe Carrillo Puerto durante su campaña electoral de 1921. En 1923, ya como gobernador, instaló en el Parque Socialista de Kanasín una estatua llamada precisamente “A la redención del indio maya”.

2 *La voz de la revolución*, 1 de febrero de 1918.

3 *Ibídem*.



la empresa por parte del partido; “escabrosa”, insistió, porque el partido gozaba de todas las simpatías en el país por ser, hasta ese entonces, “el único partido socialista organizado en México”. A su juicio, el gobierno socialista de Yucatán se había perdido “por un momento en el concepto de las funciones de gobierno”⁴.

Hablaré un poco menos técnico en política: cuando un partido triunfa y no tiene control sobre sí mismo, cree que el llegar al Gobierno significa que no hay vida civil, ni puede haber otro género, otra manera de vivir políticamente que la que él dicta. (Por tanto) es natural que el Partido Socialista considere esos ferrocarriles como algo suyo en el buen sentido de la palabra, como algo que significa su poder, su fuerza, y el día que no los tenga en sus manos, naturalmente se debilitará. (Lo cierto es) que los ferrocarriles de Yucatán tienen un considerable exceso de personal debido a que son, aparte de ser ferrocarriles, un centro político, y un centro político socialista, el núcleo del socialismo en Yucatán, con las simpatías generales de muchos revolucionarios en el resto del país.⁵

Castro Morales nombró como Secretario General al doctor Álvaro Torre Díaz⁶, quien lo había sido en la parte final de la administración de Salvador Alvarado. En el Diario Oficial se alabó la persona de Torre Díaz por su “tacto y buen criterio” con que había desempeñado dicho cargo durante el último año de Alvarado.⁷ Castro Morales y Torre Díaz, de manera conjunta, comprendieron de inmediato la importancia de llevar a cabo el “credo” socialista acorde a los ideales plasmados en la Constitución de 1917. Les tocó, en principio, reconocer que la labor de organizar el Partido iba a recaer en manos de Felipe Carrillo Puerto, y que por ello iba a cambiar el perfil obrerista del socialismo yucateco por un perfil más agrarista. Ambos, inspirados por la transformación del palacio arzobispal en el edificio del Ateneo Peninsular (asociación fundada por Torre Díaz) y el Pasaje de la Revolución, (que mandó a construir Salvador Alvarado entre 1915 y 1918) concibieron que las nuevas leyes revolucionarias podrían crear nuevos cultos para reafirmar la relación entre la nueva clase dirigente, agrupados alrededor del Partido Socialista y las masas proletarias que decían representar y luchar por su “redención”. De tal modo, apenas comenzó su administración gubernamental, concibieron la transformación del Cementerio General de Mérida no solo como punto de partida de la transformación social sino también de la transformación cultural.

4 CONGRESO DE LA UNIÓN, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Año I, Periodo Extraordinario, XXVIII LEGISLATURA, Tomo II, Número 64, 12 de julio de 1919.

5 CONGRESO DE LA UNIÓN, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Año I, Periodo Extraordinario, XXVIII LEGISLATURA, Tomo II, Número 64, 12 de julio de 1919.

6 Torre Díaz fue gobernador socialista de Yucatán también en el cuatrienio 1926-1930.

7 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, 7 de febrero de 1918.



2. El arte monumental como estrategia cultural socialista

En 1922, el arquitecto Manuel Amábilis, director y fundador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sureste, fundada por Felipe Carrillo Puerto y José Vasconcelos, señaló en el plan de estudios que en Yucatán “todo está por construirse”. Es decir, que desde su convicción revolucionaria la arquitectura iba a ser la protagonista de la transformación socialista del Estado. O en términos más actuales, el equipamiento urbano iba a ser el protagonista cultural de la posrevolución. Para llevar a cabo esto, fue necesario toda una discusión previa, un movimiento artístico revolucionario que propusiera un nuevo protagonismo para la identidad maya de Yucatán; es decir, fue necesario una vanguardia artística. El vanguardismo artístico fue el fenómeno característico de las artes durante la primera mitad del siglo XX, el cual generó un modelo de combate político y artístico. En Yucatán existió un grupo de artistas intelectuales desde 1911 que pretendió la reivindicación del arte prehispánico maya y de la arquitectura de la época colonial, buscando así resolver la identidad que la nación y la región merecía acorde con el momento. A diferencia de las vanguardias europeas más conocidas que fueron internacionalistas, el vanguardismo local fue nacionalista y de inspiración regional. En teatro, el movimiento fue conocido justamente como “teatro regional” desde sus inicios; su principal exponente fue el dramaturgo y novelista Ermilo Abreu Gómez. En las artes plásticas y la arquitectura (artes visuales) no se impuso de manera visible un nombre o denominación para identificarse en su momento. Pero tal esfuerzo vanguardístico bien podría ser designado de acuerdo a su orientación nacionalista e inspiración regional como “vanguardia vernácula”. Una nota de la revista *Tierra*, del 22 de julio de 1923, ofrece la denominación: el secretario general de la Universidad Nacional del Sureste, David Vivas Romero, había invitado el 16 de julio a la dirección y redacción de esta revista a participar “en las sesiones que celebrarán los profesores de Bellas Artes, de Música, Dibujo, Modelado y Artes aplicadas, en el anfiteatro de la Escuela de Ingeniería”. La respuesta fue afirmativa e inmediata:

Agradecemos la fineza anterior y nos proponemos asistir y seguir el curso de esas sesiones que redundarán sin duda en ingente beneficio del arte nacionalista, del arte vernáculo que se trata de crear en nuestro medio, contrarrestando el academicista que hasta ahora ha privado por obra y gracia de nuestra señora la rutina.⁸

Como representante de la revista a tales sesiones fue designado el artista plástico Víctor Montalvo. En el remate de la nota se agregó:

Siempre pensaremos –aunque haya quien opine lo contrario– que auscultando el alma de la raza india y oyendo su voz ancestral llegará la patria chica, y con ella la grande, a poseer un arte propio y característico, alimentando en sus propias entrañas, confortado con su propia sustancia.⁹

8 TIERRA, Órgano del Partido Socialista del Sureste, No. 13, 22 de julio de 1923, p. 21.

9 *Ibíd.*



Es por eso que en Yucatán podemos hablar de la existencia de una vanguardia vernácula. En este sentido, es importante la figura del escritor Antonio Mediz Bolio, cuya obra cumbre fue el libro *La Tierra del Faisán y el Venado*, publicado en Buenos Aires en 1922. Este libro recopila antiguas leyendas mayas que aún se contaban en los pueblos, y se puede considerar como la síntesis literaria de la búsqueda de la vanguardia vernácula “que se trata de crear en nuestro medio”. En el prólogo, Alfonso Reyes recordaba los días en Madrid, cuando ambos trabajaban en la embajada mexicana y pretendían crear obras literarias nacionalistas (Mediz Bolio, 1922: II-VI). Reyes mencionó su obra *La Visión de Anáhuac*, en la que “yo procuraría interpretar y extraer la moraleja de nuestra terrible fábula histórica”. Mediz Bolio, según recuerda Reyes, le dijo que también le interesaba abordar el mismo tema, porque “se habla de la redención política del indio, pero no de su redención espiritual”; por ello, la primera tarea de ambos como literatos preocupados por la construcción de la nación, agregó, “consiste en recoger las tradiciones indígenas, tales como realmente han llegado a nosotros”. Por eso, en esta obra que recoge con grandilocuencia literaria las leyendas mayas, el objetivo de Mediz Bolio fue “hacer una «estilización» del espíritu maya, del concepto que todavía tienen los indios de sus orígenes, de su grandeza pasada (...) todo dicho con la mayor aproximación al genio de su idioma, y al estado de su ánimo en el presente” (Mediz Bolio, 1922:II-VI). De modo que puede considerarse a Mediz Bolio como el “padre espiritual” de la vanguardia vernácula, el cual se manifestó no sólo en la literatura, sino también en el teatro, en el cine, la danza, la música (óperas, sinfonías, trova) y las artes visuales. Fue también la figura que procuró interrelacionar a los artistas de distintas disciplinas desde sus variados e importantes cargos políticos que tuvo durante su larga carrera como diplomático y político. Uno de los que conoció, trató y apoyó fue al arquitecto Manuel Amábilis Domínguez¹⁰, un personaje central en la producción de arte monumental del socialismo yucateco.

Amábilis fue el líder de un grupo arquitectos, ingenieros y artistas de su época y ejerció la reflexión teórica constantemente. Fue al autor del plan de estudios de la Facultad de Ingeniería (en 1922) en el que se selló la alianza entre la vanguardia vernácula y el gobierno socialista a favor de la erección de monumentos y obra pública. Amábilis era un joven y ya conocido arquitecto cuando

10 Manuel Amábilis nació en Tekax, Yucatán, en 1889, y murió en la Ciudad de México en 1966. Estudió arquitectura en París entre 1908 y 1911. Fue el fundador de la tendencia neomaya. Escribió los siguientes libros: *La arquitectura precolombina en México* (premiada en 1929 en el concurso *La Fiesta de la Raza* convocada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España, y publicado en México en 1956 con prólogo de Antonio Mediz Bolio); *El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana en Sevilla* (1929, con textos del escultor Leopoldo Tomassi y el pintor Víctor Reyes); *Donde* (1931, y reeditada póstumamente en 1968 con prólogo de Abel Ramos Cervantes); *La mística de la Revolución Mexicana* (1937); y *Los Atlantes en Yucatán* (1963), que resumen sus peculiares ideas acerca de las civilizaciones mesoamericanas, influenciado por la masonería y la teosofía.



inició el gobierno de Salvador Alvarado. Su primera gran obra fue la renovación del Palacio Arzobispal, concebida finalmente como sede de la sociedad Ateneo Peninsular. También estuvo presente en la creación del Ateneo desde sus primeras reuniones en 1915 y formó parte de la Sección de Artes Plásticas junto con José del Pozo, Fernando Gómez Rul, Enrique Cervera Pérez, Gregorio G. Cantón y Ariosto Evia Cervera.

Amábilis formó parte del equipo fundador de la Universidad Nacional del Sureste. Es importante anotar que la apertura de una universidad fue planteada por primera vez por el gobernador Carlos Castro Morales en 1918. Pero no fue hasta noviembre de 1921, durante la visita de José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, que Felipe Carrillo Puerto y los suyos aceptaron la idea de Vasconcelos de crear una universidad regional. Así surgió la Universidad Nacional del Sureste en febrero de 1922. Amábilis fue el encargado de la creación de la Facultad de Ingeniería. El 31 de julio del mismo año, dio a conocer la Exposición de motivos de dicha Facultad¹¹. En el documento, presentado ante el Consejo Universitario, aclaró que ya había recibido la “correspondiente sanción del señor Ministro Vasconcelos, a quien fue necesario presentarlo para que ratificara o rectificara las modificaciones implantadas de acuerdo a sus instrucciones”. Fue en esta exposición de motivos en el que dejó asentado lo siguiente: “porque en esta región, tanto en las ciudades y pueblos existentes, como en los que más tarde se levanten, está todo por construir; notablemente los edificios del servicio público, caminos, puertos, etc.”. De igual forma, enfatizó el estudio de la “Historia Comparativa de los diversos estilos con relación al Colonial, Tolteca y Maya”. Desde su punto de vista, los motivos sobran:

Siendo nuestro urgente deber crear nuestro Arte Nacional en todas sus manifestaciones, bebiendo en las fuentes de nuestros portentosos ancestros, esta Escuela de Arquitectura se dedicará a inculcar a sus alumnos un intenso amor hacia a las tres manifestaciones del Arte Arquitectónico Mexicano y en sus Cátedras de Dibujo y Composición se estudiará, compondrá y proyectará de preferencia, motivos y conjuntos de estilo Colonial, Tolteca y Maya; esperando así, iniciar el florecimiento de la Arquitectura Mexicana.¹²

“Todo está por construir”, insistimos, es la frase de Amábilis que concretó la obligación del gobierno socialista de erigir la obra pública como monumento y que selló, desde 1918 por lo menos, el uso continuo de la estética revolucionaria propuesta por la vanguardia vernácula. Cada nuevo hospital, cada nueva carretera, cada nueva estatua, cada nueva rotonda, contribuiría a la conformación del régimen y al fortalecimiento de una identidad basada en la reivindicación del

11 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 31 de julio de 1922.

12 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 31 de julio de 1922.



pasado. No en balde el gobernador Felipe Carrillo Puerto, en 1923, llegó al atrevimiento de recomendar mediante un comunicado el uso de “estilizaciones mayas” en los edificios públicos que estaban por construirse a todas las dependencias y ayuntamientos.

Aunque como ya hemos visto, tanto el proyecto socialista como la vanguardia vernácula no dejaron de discutirse y en cierto modo concretar o clarificar su proyecto, hasta 1924, cuando Felipe Carrillo Puerto fue ejecutado por la rebelión delahuertista, queda patente que el primer gobernador socialista, Carlos Castro Morales, debió asumir la necesidad del gobierno posrevolucionario de conformarse como un régimen estable y continuo: para ello, apostó como primer gran proyecto la creación de un nuevo culto político y cultural a través de la transformación del Cementerio General de Mérida en un monumento cívico neomaya.

3. La transformación del Cementerio General de Mérida

Por ser la primera obra pública de trascendencia para el gobierno socialista, la transformación del Cementerio General de Mérida se instrumentó en tres partes para lograr el impacto social que se buscaba. En primer lugar, la instrumentación legal a través de la publicación de un decreto gubernamental sobre templos y ministros de culto que implicaba un apartado sobre cementerios. Segundo, la creación de una campaña de prensa desde el periódico oficial *La Voz de la Revolución*, para dar a conocer, antes que nada, el “atraso” del Cementerio, ante lo cual respondería de inmediato el propio gobernador Castro Morales. Tercero, la difusión y explicación del proyecto ejecutivo de remodelación y transformación. Y por último, la muestra de la conclusión de las obras a modo de festividad y logro del socialismo gobernante.

Es importante anotar que el Cementerio General de Mérida fue abierto en 1821, justo al final de la época colonial. Según Gutiérrez y Rivero (2012), su apertura fue consecuencia de unas disposiciones de las Cortes de Cádiz, de 1813, que prohibía entierros dentro de las poblaciones. Se refrendaba así una orden real de 1787 que generó en Mérida la apertura del primer cementerio en el atrio de la iglesia de Santa Lucía, al norte de la ciudad. El nuevo Cementerio General abrió el 3 de noviembre de 1821 en los terrenos de la hacienda ganadera San Antonio X-Coholté, a la vera del Camino Real a Campeche; tres días después recibió su primer entierro. Se aprovechó, según el diseño de Santiago Servián, las antiguas instalaciones de la hacienda, a la cual se le agregó una larga calzada de acceso. El Obispado de Yucatán administró el Cementerio hasta 1859 que pasó a manos del Gobierno del Estado.



a) Un decreto anticlerical

El Gobierno de Castro Morales comenzó su propósito de modernizar el Cementerio durante la primera semana de su gobierno cuando publicó de nuevo el decreto No. 11 de Salvador Alvarado: “Ley que establece las base de Policía y Buen Gobierno a que deben sujetarse los TEMPLOS y MINISTROS de los CULTOS en el Estado” (sic). En el Capítulo V de las Disposiciones Generales se establecía lo siguiente:

Artículo 21.—Queda prohibido a las personas de uno u otro sexo, sean o nó Ministros de Cultos, usar fuera de los Templos, cualquier traje o prenda de vestir especial que constituya un distintivo de la Orden o Congregación a que pertenezcan.

Artículo 22.—En ningún Cementerio podrán verificarse honras fúnebres de carácter religioso.

Artículo 23.—No se podrán sepultar en los Templos, cadáveres ni tampoco restos áridos.

Artículo 24.— Ningún acto religioso podrá verificarse fuera de los Templos. Por tanto, queda prohibido transportar imágenes por las calles de las poblaciones en forma procesional, es decir, seguidas por algún cortejo religioso.

Artículo 25.—Nunca podrá verificarse matrimonio religioso, ni tampoco bautismo, sin acreditar con la correspondiente boleta, que el nacimiento o matrimonio de que se trate, ha sido inscrito en el Registro Civil.

Artículo 26.—Queda prohibido en toda Encíclica Pastoral, sermón o cualquier otro documento religioso, comentar las leyes civiles del Estado o de la Federación, debiendo limitarse a la propaganda, explicación y comentario de los principios religiosos.¹³

Como se puede ver, se pretendía expulsar definitivamente del espacio público toda manifestación religiosa. Ello impactaba directamente en los cementerios, siendo espacios públicos donde no correspondía que se llevaran o mostraran actos o cultos religiosos, en consecuencia, debían quedarse dentro de los templos; es decir, ya no podría llevarse a cabo ninguna honra fúnebre de tipo religioso en cualquier camposanto público. Asimismo, se reafirmaba las viejas prohibiciones de sepultar o resguardar restos áridos dentro de edificios religiosos. Y por último, también impactó en los cortejos fúnebres que se realizaban en las calles que conducían al Cementerio, y que con frecuencia eran acompañados de elementos religiosos. El decreto era claro y lacónico: todo culto religioso debía desaparecer del cementerio civil administrado por el nuevo gobierno socialista. En este sentido fue importante la obra que a través de la prensa oficial anunciaría el gobernador Castro Morales.

13 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, 8 de febrero de 1918. El decreto fue expedido originalmente por el Congreso del Estado el 17 de enero de 1916 y fue mandado a publicar por Alvarado el 22 de enero; se comenzó a aplicar a partir del día 25 del mismo mes y año.



b) Una campaña de prensa

Un 19 de febrero de 1918, el periódico La Voz de la Revolución, fundado por Salvador Alvarado tres años antes, dio a conocer el proyecto de la transformación del Cementerio. En una nota extensa, el reportero comenzó describiendo su día domingo en la Plaza Grande de Mérida como parsimonioso y aburrido, hasta que se le ocurrió visitar el Cementerio. Según parece, se dirigió utilizando el tranvía. Al llegar, de acuerdo su crónica, consideró un “escándalo” todo lo que vio:

A paso lento y cabizbajo (voy) por entre tumbas agrietadas y cipreses melancólicos. Todo es silencio, tristeza y ruina. Poeta melenudo y geremiaco ven a llorar sobre estas agrias soledades. Parece que la mano del hombre ha olvidado este lugar sagrado que viste aún el ropaje de la época colonial. Todavía los pinos milenarios gimen sobre duros y gastados bancos de piedra; todavía se alzan los panteones vetustos, todavía las bóvedas se amontonan sin un pasillo para el visitante. Allá al frente, el edificio de la Administración se alegra con algunos maceteros, pero aún se conserva la arquitectura tosca de las casa rurales; no hay un mal jardín con flores perfumadas; no hay un árbol que preste sombra grata, que clame esta caligie quemante. En la fosa común no hay campánulas ni musgo para adornar las cruces. Allí los cardos y los juncos se tejen como un erial. Un tufillo enloquecedor se despidió del depósito de cadáveres, que es un simple salón propio para bodega, y se esparce por todas parte. La tierra está seca, reseca. No hay agua para regarla sino una pileta carcomida que parece abrevadero de bestias. ¿Y la estética? Ni siquiera el buen gusto se advierte allí. Extranjero que vienes a nuestro camposanto en busca de monumentos artísticos o históricos; extranjeros que vienes a observar como veneramos las cenizas de nuestros deudos, detente en el pórtico. No penetres, que al lado de dos o tres lujosos y bellos panteones contemplarás osarios ridículos, rótulos ayunos hasta de sentido común y la yerba silvestre y la maleza al pie de estos monumentos cursis.¹⁴

De regreso a su casa, según continúa su larga narración, se topó con el gobernador Castro Morales, a quien de inmediato le externó su queja. El gobernador, entusiasmado, le anunció que tenía precisamente unproyecto de transformación, con dos planos a la mano, para el Cementerio: la descripción que le hizo al reportero comenzó con la acción de reemplazar la flora, en especial los pinos “llorones”, eliminar los bancos de piedra, modernizar el edificio de la Administración, crear jardines, “tierra húmedas” y sombra para el público visitante. Mencionó también la instalación de un estanque de concreto armado, de 25 mil galones de capacidad y 20 pies de profundidad, alimentado por cuatro veletas de extracción para garantizar el servicio constante de agua. Aquellos pinos iban a ser sustituidos con laureles y otros árboles de mayor sombra y frescura que “mejorarán el aspecto del cementerio con su verdor”. Asimismo, mencionó la radical transformación del “galerón” que servía como depósito de cuerpos para convertirla en una sala “bien ventilada” donde se podría hacer velaciones, con una “capilla de cristal” para depositar los cadáveres y un anfiteatro para la realización de las autopsias, todo bajo una “forma elegante y moderna”. Por último, le presentó los dos

14 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 19 de febrero de 1918, “Nuestra necrópolis se transformará en un moderno e higiénico camposanto”.



planos: uno de la planta de la sala de velaciones y otro sobre el modelo de manzanas y pasillos para la disposición ordenada de las tumbas, con lo que, según preveía, “ya no se caminará sobre sepulcros” y eso permitirá que se “adornen”.

Otro importante cambio que anunció fue el adoquinamiento o pavimentación de la calzada que va de la entrada principal al edificio de la administración, de más de 500 metros de largo, pues “esto animará a los propietarios de osarios y mausoleos y es de esperarse que desaparecerán los adefesios ridículos”. Para terminar, explicó que la primera parte de las obras se centrarían en imponer el nuevo modelo de ordenamiento de tumbas acorde al plano; más adelante, “habrá un horno crematorio para quienes quieran utilizarlo”. La última promesa hecha al reportero fue que ya no habría “malos olores porque se construirán jardines de flores perfumadas y todos estará limpiecito”. De esta manera, agregó Castro Morales, “mi gobierno quiere dejar a Mérida en las condiciones que reclama su cultura, (por ello) hemos formado los planes para modernizar nuestra Necrópolis. Muy pronto estará a la altura de la época”.¹⁵

c) El proyecto de La Ciudad de los Muertos

Como se puede notar en el primer anuncio hecho por Castro Morales al reportero de *La Voz de la Revolución*, el proyecto de transformación del Cementerio se limitó en un principio a un cambio cosmético que era urgente según relataba aquel reportero. En realidad, el proyecto fue tomando forma mediante las obras avanzaban. Es probable que en ese mismo mes de febrero de 1918 iniciaran los trabajos de remodelación.

El mote de “La Ciudad de los Muertos” a la transformación del Cementerio le fue impuesto por el periódico *La Voz de la Revolución*, a finales de mayo de 1918, cuando la obra estaba en marcha. Según informó, el encargado directo de la remodelación era el director del Registro Civil, Saúl Andrade, que aprovechó la ocasión para anunciar cambios en la clasificación del tipo de bóvedas:

Tengo el proyecto de sujetar a la aprobación del Ejecutivo una modificación arancelaria nivelando todas las sepulturas y clasificándolas únicamente con las designaciones de “Bóvedas” y “Fosas Comunes”, desterrando de esta manera la enojosa distinción de bóvedas de primera clase, de segunda y de tercera, que obliga a veces a los deudos de los difuntos a hacer grandes esfuerzos económicos. Estimo que a las bóvedas se aplique un derecho determinado y las fosas comunes se impartan gratis.¹⁶

15 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 19 de febrero de 1918, “Nuestra necrópolis se transformará en un moderno e higiénico camposanto”.

16 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 26 de mayo de 1918, “Nuestra vieja Necrópolis está siendo objeto de una vasta reparación que de dejarla convertida en un lugar grato al alma y a los ojos”



Asimismo, comentó los recientes cambios que introducía la nueva Ley Civil, el cual permitiría el reconocimiento de los hijos ilegítimos, el divorcio voluntario, etc. De igual manera, habló de su plan: que las colonias de extranjeros imitaran el ejemplo de la Colonia Española, el cual había adquirido una parcela donde iba a construir su mausoleo. Por último, mencionó que “también se ha ordenado cerrar el perímetro del Cementerio con una verja, pues toda la parte final se encontraba sin una separación que determinara donde termina el Cementerio”.

En junio de 1918, se anunció que a la obra se le agregaría la Rotonda de los Hombres Ilustres, “donde se levantarán las estatuas de grandes hombres”. Se anunció también que el pavimento de la calzada principal sería de concreto y que tendría “un embanquetado ancho, bien ancho, semejante al del Paseo Montejo”. Sobre la obra de la Rotonda, se aseguró que era una “meritísima idea del señor Gobernador, a donde se trasladarían los resto áridos de los personajes ilustres de la historia local que han dado gloria al Estado”.¹⁷

Los proyectos finales del pórtico de entrada y el de la Rotonda de los Hombres Ilustres se dieron a conocer en la prensa en octubre de 1918. Realizados por el Departamento de Obras Públicas del Estado, bajo el “estilo de arquitectura maya”, no se dio a conocer el nombre del diseñador, pero se reconoció que,

Al esfuerzo de algunos arquitectos yucatecos se debe el renacimiento del estilo de arquitectura maya, (por lo que) ya se pueden admirar en algunos puntos de la ciudad, edificios que tienen fachadas de este género.¹⁸

El diseño de la Rotonda de los Hombres Ilustres implicaba la construcción de una pirámide compuesta de cuatro basamentos. En la cima, una habitación como la de Chichén Itzá, con arcos falsos mayas como puertas y sobre esta un personaje ataviado de sacerdote maya. Los basamentos y la habitación aparecían profusamente ornamentadas con remates de macetones en las esquinas. En cambio, el diseño del pórtico, que sí se construyó, presentaba forma de hemiciclo, muy parecido al frontispicio de entrada del Sanatorio Rendón Peniche, obra de fachada del arquitecto Manuel Amábilis que estaba construyendo en aquel entonces y que se concluyó en abril de 1919. El pórtico de entrada del Cementerio estaba compuesto por una reja central que tenía el mismo ancho de la calzada principal, unos 10 metros, que es de donde partía. A izquierda y derecha de la reja central, estaban dos gruesas columnas por cada lado, de un metro por un metro cada una y una altura aproximada de tres metros. Complementaban el pórtico, 4 columnas de menor tamaño a ambos extremos. En total, este hemiciclo, compuesto de 12 columnas más la cerca y la reja principal, sumaban casi 36 metros de largo. Todas

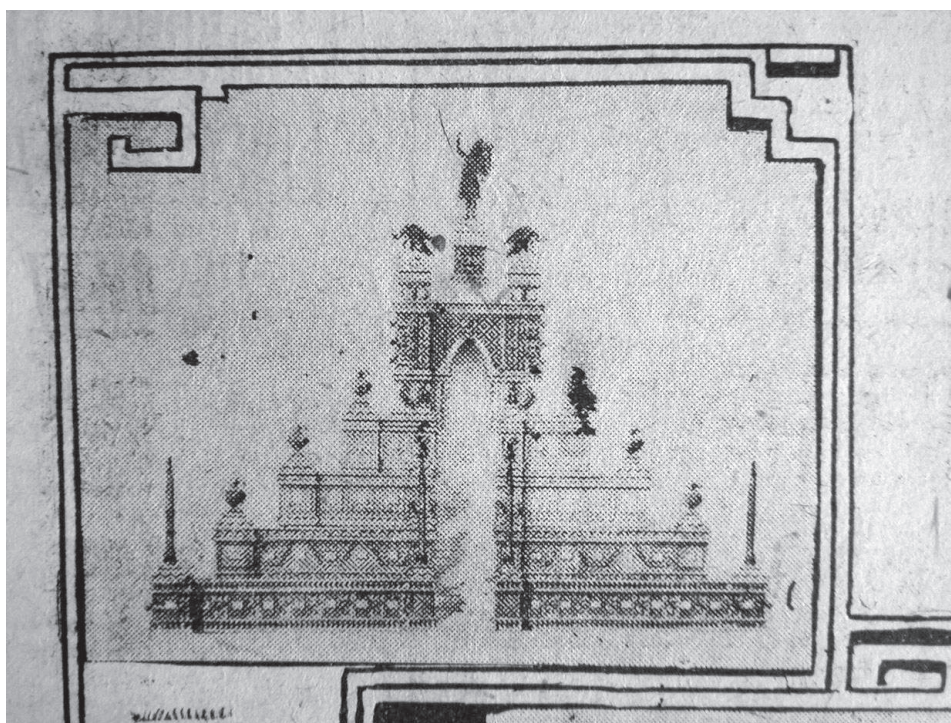
17 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 30 de junio de 1918, “Nuestro viejo cementerio se convertirá en una moderna y pintoresca Ciudad de los Muertos”.

18 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 23 de octubre de 1918, “Mejoras en el Cementerio”.



las columnas estaban ornamentadas con líneas entrecruzadas que asemejarían a la representación de la serpiente de cascabel en la arquitectura prehispánica maya.

En suma, el proyecto de transformación del Cementerio tomó forma en el momento en que se comenzó a ser denominado como La Ciudad de los Muertos. Una ciudad donde se rendiría culto, en primer lugar, a la arquitectura maya prehispánica y en cuyo centro se erigiría un monumento también neomaya a los “Hombres Ilustres de Yucatán”. El pórtico, la calzada principal, la rotonda y la sala de velaciones constituyeron el alma de esta nueva ciudad que pretendió representar los cambios que en la ley había introducido la revolución y el gobierno socialista, no sólo para modernizar materialmente el cementerio, sino para buscar la igualdad y hasta la corporativización en el mundo de los muertos.



d) Una transformación concluida en 1924

Como ya se ha mencionado, el gobierno de Castro Morales se enfrentó a diversas situaciones y complicaciones. Aunque sus licencias y renunciaciones durante su periodo fueron frecuentes, si se le compara con los gobernadores de la época porfirista, estableció lo que sería la tónica de los gobernadores posrevolucionarios hasta Humberto Canto Echeverría (1938-1942): que, ante diversas situaciones complejas, solían pedir licencia para ir a la Ciudad de México a tratar de resolver las cuitas del momento. Castro Morales se vio obligado a dejar definitivamente el poder en mayo de 1920, durante los acontecimientos ocurridos por el Plan de Agua Prieta, proclamado un mes antes y que concluyó con el asesinato de



Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920. Previamente, en diciembre de 1919, nada pudo hacer contra el ataque a las instalaciones del Partido Socialista por parte del coronel carrancista Isaías Zamarripa, acto que provocó el exilio de Felipe Carrillo Puerto (Moreno Acevedo, 2005), quien no retornó hasta después del triunfo del Plan de Agua Prieta y sus socios sonorenses.

Empero, esto no obstó para que se avanzara en las obras. De hecho, en mayo de 1919, *La Voz de la Revolución* presentó los avances finales de la obra de transformación del Cementerio General, especialmente los de la Calzada Principal y el edificio de la sala de velaciones, con lo que se dio por concluida su remodelación y modernización por parte del gobierno de Castro Morales.¹⁹

Por otra parte, la Rotonda de los Hombres Ilustres no se construyó, dejando como inconcluso el proyecto de transformación. Esta obra sería retomada en 1924, luego del fusilamiento del gobernador Felipe Carrillo Puerto el 3 de enero de ese mismo año, junto con alguno de sus hermanos y colaboradores más cercanos. El gobernador interino, el también socialista José Iturralde Traconis, dispuso que se construyera, en vez de la rotonda propuesta por Castro Morales, la Rotonda de los Socialistas Ilustres. Esta fue diseñada y construida por el escultor Leopoldo Tommasi, tuvo su inauguración, con toda solemnidad, el 3 de enero de 1926 con el traslado de los restos áridos de Carrillo Puerto, hermanos y colaboradores. Esta rotonda fue entregada –para su cuidado y resguardo– al Partido Socialista del Sureste. Contenía crujiás para el depósito de restos áridos de miembros distinguidos del Partido, que se fueron agregando hasta los años 70 y 80 del siglo pasado.



19 LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN, 1 de mayo de 1919, “Las reformas en el cementerio”.





4. La Ciudad de los Muertos como modelo de transformación cultural

El socialismo gobernante yucateco se definió políticamente, con sus directrices, formatos y proyecto, entre 1916 –año de su fundación– y 1924 –año de la ejecución de Felipe Carrillo Puerto. Gobernó efectivamente, como grupo y como régimen entre 1918 y 1951, cuando el gobierno federal le arrebató el control de la economía henequenera. Confiados en la trascendencia de su proyecto, que según Felipe Carrillo Puerto, fue la “redención del indio maya”, pronto se percataron que la transformación que emprendía no solo iba a ser política sino también cultural.

En este sentido, el primer gobernador socialista Carlos Castro Morales encontró en la obra pública una forma de hacer ver y notar, ocupando el espacio público, los propósitos del proyecto del socialismo posrevolucionario de Yucatán. Además, también vio la oportunidad de transformar la cultura religiosa que aún prevalecía en el contexto social. Por ello, su propuesta de transformación del Cementerio General de Mérida en La Ciudad de los Muertos logró convertirse en el modelo que sería replicado por los siguientes gobernadores socialistas. Es el modelo que aquí llamamos arte monumental.

Este modelo no estuvo basado en la mera construcción de obra pública o monumentos cívicos, sino en la utilización de estos para la transformación cultural del espacio público en correspondencia con la transformación política de la sociedad. De ahí, que Castro Morales junto con su secretario general, Álvaro Torre Díaz, apostaran como primera gran obra la remodelación del Cementerio General de Mérida. De ahí que hayan concebido el cronograma político para



cada obra de este tipo: primero, un decreto, una circular o un cambio en la ley para sustentar legalmente el cambio correspondiente a ocurrir en el espacio público. Segundo, una campaña en prensa que defendiera o diera relevancia a una obra “urgente”, que creara en la opinión pública la necesidad de la misma y que contara con la participación, en la narrativa propuesta, no solo de las autoridades sino hasta la de los ciudadanos. Tercero, la utilización de alguno de los estilos artísticos propuestos por la vanguardia vernácula, en especial el arte neomaya, para completar el discurso de apoyo y “redención” de la población indígena. Y por último, la construcción de la obra y la ceremonia de su conclusión como muestra del logro alcanzado.

Este fue el camino o modelo que impuso la transformación socialista del Cementerio General de Mérida. Así lo llevaría a cabo el siguiente gobernador Felipe Carrillo Puerto (1922-1924) a través de las carreteras a Kanasín, que remató con un parque socialista; con la carretera a Chichén Itzá, pretendió llevar esta transformación fuera de la ciudad de Mérida, para tratar de hacer ver los avances que promovió en materia de reforma agraria. El gobernador interino José María Iturralde Traconis (1924-1926) haría lo propio al reforzar el culto al líder ejecutado Carrillo Puerto con la erección de tres monumentos a su memoria, uno en Motul, otro sobre Paseo de Montejo y la Rotonda de los Socialistas Ilustres, con todas las obras referidas y concebidas desde las páginas del diario oficial del Gobierno del Estado.

El gobernador Álvaro Torre Díaz (1926-1930), que fuera secretario general de Castro Morales, hizo lo mismo al desarrollar la primera prolongación del Paseo Montejo, apoyando la creación de la Escuela Modelo, para lo cual publicó un decreto sobre educación y escuelas particulares. El siguiente gobernador, Bartolomé García Correa (1930-1934), también pretendió lo mismo, al intentar levantar en la plaza de la colonia García Ginerés de Mérida: una pirámide de 70 metros de altura a la memoria de Felipe Carrillo Puerto, en correspondencia con su proyecto de cooperativismo; esta obra nunca se concluyó. Ya para 1938, el gobernador Humberto Canto Echeverría (1938-1942), ingeniero de profesión, levantó el Estadio Salvador Alvarado como parte de su plan de implementarla educación física entre la población, así como la remodelación del edificio central de la Universidad de Yucatán y, así, cambiarle el nombre de Universidad Nacional del Sureste. El gobernador Ernesto Novelo Torres (1942-1946), aprovechando la prosperidad henequera a causa de la Segunda Guerra Mundial, se permitió levantar grandes obras como el Parque de las Américas, el Centro Educacional Felipe Carrillo Puerto y la propuesta de un Monumento a la Bandera. El último gobernador relacionado directamente con el proyecto socialista, José González Beytia (1946-1951), se encargó de concluir el Monumento a la Bandera que terminó por llamarse Monumento a la Patria; debido a su salida intempestiva de su



cargo en 1951, esta obra se concluyó e inauguró hasta 1956. Con ello se cerró este modelo de arte monumental, el cual se generó, precisamente, a partir de la transformación del Cementerio General de Mérida ala Ciudad de los Muertos.

5. Conclusión

La transformación del Cementerio General de Mérida a La Ciudad de los Muertos queda inscrito dentro de las estrategias y discusiones que dieron cuerpo al ideario político y cultural del socialismo yucateco entre 1916 y 1924, y se fue aplicando o realizando como parte de la posrevolución hasta principios de la década de 1950.

Esta obra se convirtió en el modelo de arte monumental que sería practicado en ese espacio de tiempo. Por un lado, la necesidad de equipamiento urbano; por otro, la necesidad de crear nuevos cultos civiles, y sobre todo, la exigencia del propio socialismo yucateco de “redimir” a los mayas contemporáneos con la apropiación estilística de la arquitectura maya prehispánica. Para este propósito cultural fue necesario la presencia de una vanguardia artística –una vanguardia vernácula– que logró poner sobre la palestra la reivindicación de este antiguo arte, entre 1911 y 1924, en principio entre los masones revolucionarios y luego en el interior del Partido Socialista.

El término de *La Ciudad de los Muertos* formó parte del discurso socialista y dejó en claro su propósito en convertir el Cementerio en una especie de “santuario” laico, en el que desterrados las costumbres religiosas de antes pasara a ser el punto de partida de la transformación cultural de la sociedad. En cierto modo, la propia historia del Cementerio General, que apareció como signo de adelanto higiénico a finales de la época colonial, se reforzó con esta transformación, llevando hasta su seno los ideales más preciados de la Revolución Mexicana en términos de igualdad y derechos.

Sin embargo, el logro más importante de La Ciudad de los Muertos, como propuesta socialista y en correspondencia con el régimen que se fue consolidando en el transcurso de las siguientes décadas, fue la corporativización misma de los entierros. Evidentemente, la Rotonda de los Socialistas Ilustres de 1926 reafirmó la transformación socialista del camposanto. Pero entre las décadas de 1930 y 1960, la zona norte del Cementerio (entre la Rotonda y la entrada oriente) se fue llenando por mausoleos de logias masónicas, sindicatos, asociaciones de profesionistas, comunidades de migrantes, etc. Uno de los mausoleos más significativo es el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, abierto en 1960 por la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, y que fue ubicado justo detrás de la Rotonda de los Socialistas Ilustres. Esto revela que el propósito que animó al gobierno de Castro Morales para transformar el Cementerio hacia una nueva



sacralidad civil; sí se logró en la medida que la sociedad fue corporativizada alrededor del régimen socialista.

En conclusión, el Cementerio General de Mérida puede considerarse actualmente como un monumento, no solo por su historia de casi 200 años, sino también por la transformación socialista que se le imprimió hace ya 100 años, entre 1918 y 1926, y que fue reflejando el cambio social mediante la nueva práctica cultural que se le asignó. 



Referencias

- AMÁBILIS DOMÍNGUEZ, MANUEL (1937). *La mística de la Revolución Mexicana*. México: edición del autor.
- ANCONA, ELIGIO (1951). *Historia de Yucatán: desde la época más remota hasta nuestros días*. Mérida, México: Editorial Yucatanense.
- BALAM RAMOS, YURI HULKIN (1996). *Masonería en Yucatán: el caso de la Gran Logia Unida "La Oriental Peninsular"*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, México.
- BARCELÓ QUINTAL, RAQUEL OFELIA (2011). "Los ferrocarriles en Yucatán y el henequén en el siglo XIX. El camino hacia el progreso". *Mirada Ferroviaria Revista digital*, 3era época, Núm. 15, pp. 5-16.
- BOLIO ONTIVEROS, EDMUNDO (compilador). (1930). *El Partido Socialista del Sureste y el futuro gobierno del Prof. Bartolomé García Correa: Memoria documentada de la campaña electoral cuyo resultado fue elevar a la Primera Magistratura del Estado al compañero Prof. Bartolomé García Correa*. Mérida: Partido Socialista del Sureste.
- CARRILLO Y ANCONA, CRESCENCIO. (1891) Décima carta pastoral del ilustrísimo señor Dr. Don Crescencio Carrillo y Ancona dignísimo obispo de Yucatán: publicando la encíclica del soberano pontífice señor León XIII acerca de la condición de los obreros.
- CONGRESO DE LA UNIÓN (1919) *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos*. Año I, Periodo Extraordinario, XXVIII Legislatura, Tomo II, Número 64. Recuperado de <http://cronica.diputados.gob.mx/>
- DUARTE, JOSÉ A. (1924). *¿Fatalismo...? Primera y segunda parte de "La salida del Gobernador"*. Mérida: Obras del Chato Duarte.
- ESPADAS MEDINA, AERCEL (1993). "El Neobarroco del Palacio Socialista o Casa del Pueblo". *Cuadernos de Arquitectura de Yucatán*, Núm. 6, pp. 2-24
- ESPADAS MEDINA, AERCEL (1999). "El Ateneo Peninsular. La catedral yucatanense de la Revolución". *Unicornio, Suplemento Cultural de Por Esto!*, números 434-437.
- GÓMEZ CHACÓN, GASPAR (2008). "La poderosa mano del centro. Entrevista con Leopoldo Peniche Vallado". *Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán*, Segundo y Tercer Trimestres, Núm. 245-246, pp. 41-48.



- GONZÁLEZ MARTÍN, LEOPOLDO MANUEL (2007). “Un certamen olvidado”. En: Marco Tulio Peraza Guzmán. *La memoria inmediata, patrimonio siglo XX*. (pp.102-109). Mérida: UADY.
- GUTIÉRREZ RUIZ, NICTE-HÁ, Y RIVERO CANTO, RAÚL ENRIQUE (2012). “Las manifestaciones artísticas de la Ciudad de los Muertos: el Cementerio General de Mérida, Yucatán, México”. *ASRI Arte y sociedad, revista de investigación*, No. 1.[Publicación electrónica]. Recuperado de <http://asri.eumed.net/1/grrc.html>
- HUMPHREYS, RICHARD (2000). *Futurismo: Movimientos en el Arte Moderno*. Londres: Tate Gallery.
- MEDIZ BOLIO. ANTONIO (1922). *La Tierra del Faisán y el Venado*. Buenos Aires: Editorial Contreras y Sanz.
- MORENO ACEVEDO, ELDA DE JESÚS (2005). “Redescubriendo a Felipe Carrillo Puerto ¿Apóstol de los mayas, ideólogo del socialismo yucateco, intelectual no reconocido?” *Revista de la UADY*, Núm. 233, pp. 10-25. Recuperado de <http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/233/ru2333.pdf>
- MORRIS, WILLIAM (2005). “Arte y Socialismo” Trad. de Juan Ignacio Guijarro González. En: William Morris, *Escritos sobre Arte, Diseño y Política*. (pp.121-143). Sevilla: Doble J.
- PSS PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE (1922). *Compendio de los postulados del Partido Socialista del S. de México: aprobados en los congresos obreros de las ciudades de Motul e Izamal, 1918 -1921*. Mérida: Talleres Fotográficos.
- QUIROZ TREJO, JOSÉ OTHÓN (2006). “La Exposición de 1910 y la Huelga de 1911 en La Academia de San Carlos: ¿Vanguardias Artísticas o Políticas?”. *Revista electrónica Tiempo y Escritura*, Núm. 11, s/p. Recuperado de http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_06.html
- RIEGL, ALÏOS (1999). *El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen*. Madrid: Visor.
- SOSA FERREYRO, ROQUE ARMANDO (1969). *El Crimen del miedo*. México: B. Costa-Amic.
- URÍAS HORCASITAS, BEATRIZ (2008). “El poder de los símbolos / Los símbolos en el Poder: teosofía y ‘mayanismo’ en Yucatán (1922-1923)”. *Relaciones. Estudio de historia y sociedad*, Vol. XXIX, Núm. 115, pp.179-212.



URZÁIZ LARES, ENRIQUE (1997). *Arquitectura en tránsito: patrimonio arquitectónico de la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Mérida, Yucatán*. Mérida, México: Universidad Autónoma de Yucatán.

VELA SOSA, RAÚL (2011). “A sesenta años del ‘Marentazo’ en Yucatán. Mérida”. *Por Esto!* Recuperado de: http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=24&idTitulo=147474

Referencias hemerográficas

A) Periódicos

REVISTA DE MÉRIDA

Dirigido por Carlos R. Menéndez e incautado en 1914 por el Ejército Constitucionalista
1910-1915

LA VOZ DE LA REVOLUCIÓN

Gobierno del Estado de Yucatán
1915-1920

REVISTA DE YUCATÁN

Dirigido por Carlos R. Menéndez
1918-1924

EL POPULAR

Dirigido por Miguel Cantón
1919-1922

DIARIO DE YUCATÁN

Dirigido por Carlos R. Menéndez
Desde 1925

DIARIO DEL SURESTE

Gobierno del Estado de Yucatán
1931-2002



B) Diario Oficial

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN

Hasta 1922 y desde 1939

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN

Entre 1922 y 1939

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO (época delahuerista)

De diciembre de 1923 a abril de 1924

C) Revistas

REVISTA TIERRA. Órgano del Partido Socialista del Sureste
Desde 1922, en distintas épocas

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SURESTE
Década de 1920

Informes de Gobierno consultados

ALVARADO, SALVADOR, Informe que el Gral. Salvador Alvarado, Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán rinde al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación C. Venustiano Carranza, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1917.

ALVARADO, SALVADOR, Informe que de su gestión como Gobernador Provisional del Estado de Yucatán rinde ante el H. Congreso del mismo el ciudadano General Salvador Alvarado, Imprenta Constitucionalista, 1918.

CARRILLO PUERTO, FELIPE, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Yucatán, C. Felipe Carrillo Puerto, ante la H. XXVII Legislatura del Estado, el 1o de enero de 1923, Imprenta y Litografía Gamboa Guzmán, Mérida, 1923.

ITURRALDE TRACONIS, JOSÉ MARÍA, Informe rendido por el Gobernador Interino de Yucatán, José M. Iturralde, ante la H. XXVIII Legislatura del Estado, el 1o de enero de 1925, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Mérida, 1925.



ITURRALDE TRACONIS, JOSÉ MARÍA, Informe rendido por el Gobernador Constitucional Interino de Yucatán, José M. Iturralde Traconis, ante la H. XXIX Legislatura del Estado, el 1o de enero de 1926, La Revista de Yucatán, Mérida, 1926.

TORRE DÍAZ, ÁLVARO, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Yucatán, C. Dr. Álvaro Torre Díaz, ante la XXIX Legislatura del Estado el 1o de enero de 1927, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Mérida, 1927.

TORRE DÍAZ, ÁLVARO, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Yucatán, C. Dr. Álvaro Torre Díaz, ante la XXX Legislatura del Estado el 1o de enero de 1928, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Mérida, 1928.

TORRE DÍAZ, ÁLVARO, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Yucatán, C. Dr. Álvaro Torre Díaz, ante la XXX Legislatura del Estado el 1o de enero de 1929, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Mérida, 1929.

TORRE DÍAZ, ÁLVARO, Cuatro años en el Gobierno de Yucatán, 1926-1930, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1929.

GARCÍA CORREA, BARTOLOMÉ, Cuarto Informe del Prof.. Bartolomé García Correa, correspondiente al año de 1933, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1934.

CANTO ECHEVERRÍA, HUMBERTO, Informe del Sr. Ingeniero Humberto Canto E., Gobernador Constitucional de Yucatán, ante la XXXIV Legislatura del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1939.

CANTO ECHEVERRÍA, HUMBERTO, Tercer Informe de Gobierno correspondiente al año de 1940, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1940.

CANTO ECHEVERRÍA, HUMBERTO, Informe de Gobierno, Canto Echeverría, 1941, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1941.

NOVELO TORRES, ERNESTO, Informe del Ciudadano Ernesto Novelo Torres, Gobernador Constitucional de Yucatán, a la XXXV Legislatura del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1942.

NOVELO TORRES, ERNESTO, Informe del Ciudadano Ernesto Novelo Torres, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXVI Legislatura de Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1943.



NOVELO TORRES, ERNESTO, Informe del Señor Ernesto Novelo Torres, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXVI Legislatura del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1944.

NOVELO TORRES, ERNESTO, Informe del Ciudadano Ernesto Novelo Torres, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXVI Legislatura del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1945.

GONZÁLEZ BEYTIA, JOSÉ, Informe leído ante la XXXVII Legislatura de Yucatán el 1o de enero de 1947, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1947.

GONZÁLEZ BEYTIA, JOSÉ, Labor Oficial en 1948. Informe del Ciudadano Profesor José González Beytia, Gobernador Constitucional del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1948.

GONZÁLEZ BEYTIA, JOSÉ, Informe del Ciudadano Profesor José González Beytia, Gobernador Constitucional del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1949.

GONZÁLEZ BEYTIA, JOSÉ, Informe del Ciudadano Profesor José González Beytia, Gobernador Constitucional del Estado, Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, 1950.





La Guerra de Castas y su impacto agrario en los pueblos del oriente de Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX

The Caste War and its agrarian impact on the eastern villages of Yucatán in the second half of the Nineteenth century

Julio Cesar Hoil Gutiérrez

Universidad de Oriente (México)

<https://orcid.org/0000-0003-3012-5851>

julio_hoil13@hotmail.com

Recibido: 7 de enero de 2019.

Aprobado: 17 de junio de 2019.

Resumen

El paisaje agrario de una zona o región en una determinada época puede ser resultado de un proceso agrario local o su amalgama con procesos políticos, económicos, sociales y agrarios. También puede ser consecuencia del condicionamiento de hechos históricos coyunturales. Teniendo como marco esta premisa, el objetivo de este artículo es mostrar el paisaje agrario que la guerra de castas forjó en el oriente de Yucatán entre 1847 y 1870. Con el análisis de las secuelas demográficas y la devastación material que causó la guerra de castas, basado en fuentes publicadas y primarias, se pudo identificar los rasgos que definieron el paisaje agrario del oriente yucateco. Estos rasgos consistieron en los excedentes de tierras que poseían los pueblos y el control que tuvieron sobre ellas, los asentamientos deshabitados al igual que sus tierras, el predominio de la milpa como el único medio de subsistencia y el estado decadente de las fincas, que sólo se dedicaron al cultivo de maíz para la subsistencia de sus propietarios. Así, el movimiento armado de los mayas yucatecos fue responsable de dibujar el paisaje agrario del oriente de Yucatán en ese período. Se trató, pues, de un paisaje agrario con identidad propia y que contrastó con el que se configuró en el noroeste yucateco.

Palabras clave: guerra de castas, paisaje agrario, oriente de Yucatán, tierras, milpa

Abstract

The agrarian landscape of an area or region at a given time can be the result of a local agrarian process or its amalgam with political, economic, social and agrarian processes. It can also be a consequence of the conditioning of short-term historical events. Based on this premise, the objective of this article is to show the agrarian landscape that the caste war forged in eastern Yucatán between 1847 and 1870. With the analysis of the demographic sequels and the material devastation caused by the caste war, Based on published and primary sources, it was possible to identify the features that defined the agrarian landscape of the Yucatecan East. These features consisted of the surpluses of land that the peoples possessed and the control they had over them, uninhabited settlements as well as their lands, the predominance of the milpa as the only means of subsistence and the decadent state of the farms, which only they dedicated themselves to the cultivation of corn for the subsistence of their owners. Thus, the armed movement of the Yucatecan Maya was responsible for drawing the agrarian landscape of eastern Yucatan in that period. It was, therefore, an agrarian landscape with its own identity and which contrasted with the one that was configured in the Yucatecan northwest.

Keywords: caste war, agrarian landscape, eastern Yucatan, lands, milpa

Introducción

Una de las coyunturas que marcó el devenir histórico de Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX fue la denominada guerra de castas que detonó en julio de 1847. Durante medio siglo, los mayas insurrectos ocuparon como bastión el sureste de la península de Yucatán (actualmente la parte sur del estado de Quintana Roo) y desde ahí desarrollaron su propia forma de vida y emprendieron sus actividades bélicas hacia otras partes de la península, principalmente contra las zonas limítrofes a su territorio. Tal fue el caso del conjunto de pueblos asentados en los alrededores de Valladolid, el oriente de Yucatán, los cuales se convirtieron en el blanco de constantes ataques insurrectos entre 1847 y 1870. Durante este período, la guerra condicionó los procesos económicos, sociales y agrarios que se gestaron en ese escenario, lo que le imprimió un rostro histórico que divergió de otras zonas de Yucatán.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el paisaje agrario que la guerra de castas forjó en el oriente de Yucatán. De manera particular se analiza cómo las secuelas sociales y demográficas de dicha guerra fraguaron el paisaje agrario del conjunto de pueblos aledaños a Valladolid. El período de estudio obedece al tiempo que los insurrectos mantuvieron bajo fuego el oriente yucateco, esto es, desde 1847 hasta 1870. Con esto, tratamos de argumentar que el movimiento armado de los mayas tuvo repercusiones en las zonas periféricas a su territorio, pues en la zona que nos ocupa dejó una onda marca en el ámbito agrario. Clarificar los efectos agrarios de la insurrección maya es importante, y por demás interesante, si tomamos en cuenta que entre sus causas destaca un problema agrario. De ahí que tratemos de comprender cómo la insurrección maya dibujó el paisaje agrario del oriente de Yucatán.

Este estudio atiende uno de los problemas que padece la historiografía yucateca interesada en los procesos agrarios de la segunda mitad del siglo XIX: existe un vacío historiográfico en las zonas periféricas al territorio rebelde y al noroeste henequenero. Los fenómenos históricos que se desarrollaron en ambos espacios relativamente han llamado poderosamente la atención de los historiadores. De ahí que la historiografía yucateca haya centrado su atención en la guerra de castas y la agroindustria henequenera. Como resultado, son numerosos los estudios publicados sobre ambos temas, incluso, en el caso del henequén, ha forjado la idea de que dominó en todo Yucatán. Mientras tanto la historia de los pueblos del oriente de yucateco ha sido marginada por los estudiosos, pese a que esa zona fue flagelada por los mayas insurrectos. En tal sentido, resulta poco claro hasta qué punto este fenómeno bélico condicionó el devenir histórico de los pueblos aledaños a Valladolid, sobre todo cuando buena parte de su población maya se sumó a las filas rebeldes. De manera precisa nos cuestionamos qué paisaje agrario dibujó la guerra de castas en el oriente de Yucatán entre 1847 y 1870.



Proponemos que el movimiento armado de los mayas rebeldes configuró el paisaje agrario de los pueblos del oriente de Yucatán entre 1847 y 1870. Durante el tiempo que duraron los ataques rebeldes, los pueblos aledaños a Valladolid sufrieron un drástico descenso de población y estuvieron sumidos en una severa crisis económica. Lo mismo sucedió con las fincas dedicadas al cultivo de caña de azúcar y, en menor medida, a la cría de ganado mayor, todas ellas quedaron devastadas y en ruinas. Esto dio pie a la formación de vastos excedentes de montes que dichos pueblos mantuvieron bajo su dominio, incluso varias hectáreas quedaron sin duelos con el despoblamiento de numerosos asentamientos. Asimismo, la milpa se convirtió en la principal forma de subsistencia. De este modo, la guerra de castas dibujó en el oriente de Yucatán un paisaje agrario donde los pueblos llegaron a poseer excedentes de tierras, experimentaron poca amenaza y despojo de las fincas y tuvieron como principal medio de subsistencia la milpa. En tal sentido, el paisaje agrario del oriente de Yucatán durante la guerra de castas nos muestra la heterogeneidad de los procesos agrarios en Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX.

Revisión bibliográfica

Un paisaje agrario puede estar integrado por una determinada forma de tenencia de la tierra, ya sea comunal o privada, las relaciones sociales y las prácticas culturales que esta produce y un particular medio de subsistencia o actividad productiva. En este sentido, un pueblo, conjunto de pueblos, zona o región está constituido por un paisaje agrario. Cada proceso agrario combina elementos locales y factores económicos, políticos y sociales externos, y que derivan en determinados paisajes agrarios. En otras palabras, los paisajes agrarios derivan de la articulación de procesos agrarios locales con procesos económicos, sociales y políticos externos, pero se cristalizan en espacios sociales específicos y se sintetizan en configuración agrarias específicas. Esto nos conduce a tomar en cuenta los casos locales y regionales, ya que ambos funcionan como una estrategia epistemológica central en la comprensión de los procesos sociales, los cuales dan lugar a procesos y configuraciones agrarias históricamente específicos (Nuñez, 2005: 30-39).

Este enfoque requiere ser acompañado por una metodología que nos guíe a zanjar el problema de la generalización de los paisajes agrarios, como ha sucedido con la agroindustria henequenera. El método consiste en escribir la historia de los procesos agrarios (continuidad, amalgama y transformación de estructura agraria de los pueblos indígenas) con detalle, a fondo, mediante estudios de caso en regiones, zonas y espacios micros, incluso pueblos, el cual pondría a prueba, corroboraría y refinaría el postulado paradigmático (predominancia de modelos y la generalización) que ha dominado por muchos años la interpretación agraria de la segunda mitad del XIX (Kouri, 2009: 263-264). Antes, por ejemplo, el tema



de la desamortización (privatización) de las tierras comunales de los pueblos aún no había sido estudiado a detalle porque se consideraba que “ya hay –aparentemente– una explicación general bastante sólida de cómo, por qué y cuándo los pueblos perdieron sus tierras, y de las repercusiones sociales que ésta tuvo” (*ibid*: 261). Poco a poco este problema se ha superado en la medida en que las investigaciones acerca del problema agrario en México (e Hispanoamérica en general) se han enfocado en los estudios de caso y regionales, que replantean la complejidad de la desamortización de las tierras comunales y de la relación interna de los pueblos en el momento de enfrentar las leyes agrarias liberales.

Analizar con profundidad histórica cómo las coyunturas políticas, económicas y sociales (leyes agrarias, desarrollo agroindustrial y movimientos armados) influye en la formación de los paisajes agrarios a nivel local y regional, nos da la pauta para nuevas interpretaciones que contribuyan a la historiografía mexicana y a la historia agraria regional. Al mismo tiempo, brinda la oportunidad de reconstruir la historia de los pueblos y la manera en que reivindicaron sus derechos. Esto es de singular importancia, pues muchos de ellos han visto que su historia ha sido excluida, ocultada y hasta negada por la historia oficial. Como ha señalado Guillermo Bonfil Batalla, es imperativo escribir la historia de los pueblos indios, en razón de que “es sustento de reivindicaciones”, pues en ella se basa la “afirmación de su legitimidad histórica” (Bonfil, 2012: 234-244).

Uno de los temas pendientes en la agenda de la historiografía yucateca es esclarecer las implicaciones agrarias de la guerra de castas en el oriente de Yucatán. La historia agraria de los pueblos asentados en esta zona ha sido marginada por la mayor parte de los investigadores enfocados al tema agrario de Yucatán. Por tanto, este trabajo trata de aportar su grano de arena para sacar a la luz parte de la historia de los pueblos del oriente de Yucatán.

Los primeros estudios históricos sobre la guerra de castas dan cuenta de los factores que originaron su estallido en 1847. Entre estos destaca el de Howard Cline a mediados del siglo pasado. En términos generales, Cline propuso que el levantamiento armado de los mayas del oriente y sur de Yucatán sirvió para frenarla los efectos de la ley de enajenación de terrenos baldíos del 5 de abril de 1841, que impulsaba la privatización de las tierras poseídas por los pueblos (Cline, 1978: 3-15). Poco tiempo después, con un argumento similar, aunque matiza y clarifica la tesis de Cline, Robert Pach analizó el impacto de la ley de enajenación de 1841 con documentos notariales de los años 1843-1847, que contienen los registros de las denuncias de los baldíos. Concluyó que la insurrección maya tuvo como causa la implementación de políticas agrarias privatizadoras entre la posindependencia y la ley de enajenación de terrenos baldíos. En este proceso, las tierras más afectadas eran las poseídas por los pueblos de los partidos de Valladolid, Tekax, Hopelchén, Sotuta y Tekax, el primero situado al oriente y los



tres últimos al sur de Yucatán, justo en los partidos donde se inició la insurrección (Patch, 1990: 67-79). Así pues, los primeros estudios sobre la guerra de castas se preocuparon por entender sus orígenes o sus causas, llegando a la conclusión de que fue motivado por un problema agrario.

Los estudios subsecuentes se mantuvieron en la misma frecuencia, pero plantearon que la guerra de castas tuvo otras causas. También fueron detonantes las pesadas cargas fiscales y eclesiásticas, así como los trabajos personales. Documentaron que los mayas sufrían de fuertes castigos impuestos por los religiosos (azotes y prisión) y de excesivos cobros de obvenciones que dañaba más su ya lastimada economía. Pese a su abolición a principios de la década de 1840, los mayas yucatecos siguieron pagando sus contribuciones personales, que había aumentado de 12 a 24 reales anuales. Y por su participación en los conflictos bélicos entre Campeche y Mérida en 1846, esperaban que el gobierno yucateco redujera las contribuciones a la mitad, sin embargo, nada de eso sucedió, teniendo así una razón más para levantarse en armas (Bracamonte, 1994: 109-114; Lapointe, 1995: 150-161; Rugeley, 1996, 1997:83). Gracias a estas investigaciones, hemos comprendido de manera profunda y amplia que la guerra de castas tuvo diversas causas.

Ya pisando suelo firme, los estudiosos centraron su interés en la dinámica bélica, económica, social y política emprendida por los mayas insurrectos tanto en su territorio como fuera de ella. Se preocuparon por la dinámica socioeconómica y comercial de la costa oriental durante el porfiriato y el primer decenio del siglo XX, así como el papel de los mayas insurrectos en esa dinámica (Macias, 2002). Otros trabajos importantes y sustanciosos han documentado la organización bélica, social y económica de los sublevados, al igual que las relaciones comerciales que entablaron con grupos locales y extranjeros (Rugeley, 2009; Dumond, 2005). Si bien estos trabajos han profundizado en la historia de la guerra de castas, no obstante, han minimizado sus efectos económicos, sociales y agrarios en las zonas periféricas, pese a que buena parte de los mayas que engrosaron las filas rebeldes eran originarios de los pueblos aledaños a Valladolid.

Si bien algunas investigaciones han analizado los efectos de la guerra de castas en el oriente de Yucatán con una visión novedosa, no escapa de la postura historiográfica que se interesa en las acciones emprendidas por los sublevados y la historia de los personajes más importantes del movimiento armado maya. Dan cuenta de lugares y personajes íntimamente vinculados con el movimiento rebelde y su tiempo. También abordan las acciones de los líderes de la insurrección y la importancia Valladolid y de algunos pueblos del territorio rebelde durante la guerra (Canto y Rugeley, 2013). Empero, reflejan el desinterés de los efectos sociales, económicos y agrarios de la insurrección maya en los pueblos aledaños a Valladolid. En otras palabras, las recientes investigaciones han desatendido las



implicaciones agrarias de la guerra de castas en el oriente de Yucatán. De ahí que este artículo intente sacar a luz el paisaje agrario que dibujó el movimiento armado maya en una zona marginal a su epicentro.

El oriente de Yucatán previo al estallido de la guerra de castas

En este apartado haremos un recuento del paisaje agrario que caracterizaba al oriente de Yucatán antes del estallido de la guerra de castas en 1847, es decir, sus rasgos demográficos, agrarios y productivos. La mayoría de los pueblos del oriente formaban parte del partido de Valladolid. Hasta antes de la guerra, este partido contaba con aproximadamente 50 mil habitantes (en su mayoría mayas) y estaba conformado por casi tres decenas de pueblos que aún controlaban buena parte de sus tierras. Además, lo integraban más de 200 fincas dedicadas al cultivo de caña. Reconstruimos el paisaje agrario del oriente yucateco antes de 1847 para después mostrar cómo la guerra de castas forjó otra configuración agraria.

Hasta antes de la guerra, el partido de Valladolid, que ocupaba la mayor parte del oriente de Yucatán, contaba con un alto índice de población maya, distribuidos principalmente en los pueblos aledaños a Valladolid. Las cifras indican que por cada 100 vecinos había 497.7 mayas. En relación a otros partidos, el de Valladolid tenía la población maya más numerosa. Por ejemplo, de cada 100 vecinos el partido de Tizimín contaba con 241.3 mayas, mientras que el de Espita con 244.6. (Bracamonte, 1993:38). Estos números nos indican que el abrumador dominio de la población maya sobre la no maya en el partido de Valladolid.

La mayor parte de los habitantes del partido de Valladolid se distribuía en los casi 30 pueblos y en las más de 200 fincas que los conformaban, sólo una mínima parte radicaba en Valladolid, sobre todo los vecinos. Desde luego, variaba la cantidad de habitantes mayas por cada pueblo. En 1846 el partido de Valladolid contaba con 51 605 habitantes. De este total, 27 556 se distribuían en 27 pueblos cabecera y 10 000 en Valladolid (Rodríguez, 1989: 190-191, t. 2). En las fincas (en 117 haciendas y 115 ranchos) radicaban 14 049 personas.¹ El partido de Valladolid también superaba en cantidad de población a los partidos vecinos. Contaba con 27 556 habitantes, sin contar a los radicados en las fincas; mientras que los pueblos de los partidos de Tizimín sumaban 15 674 habitantes y Espita 9 825 (Rodríguez, *op. cit.*:191-192, t. 2). En efecto, el partido de Valladolid no sólo concentraba con una fuerte población maya, sino que también era el más habitado de la región.

Los pueblos del partido de Valladolid, como de los otros partidos del oriente, basaban subsistencia en el cultivo de maíz y, por lo mismo, padecían

1 Biblioteca Yucatanense, Memoria de los Gobernadores, documento número 7, 1846.



constantes carencias económicas. Este problema económico se reflejaba en la falta de escuelas y maestros para enseñar a los niños. Por ejemplo, los pueblos de Tikuch, Tesoco y Tahmuy, todos de la municipalidad de Valladolid y relativamente próximos a la ciudad, contaban con “20 familias que no eran indígenas, y los que de estos componen el resto de la población, viven únicamente de sus pequeñas sementeras y de la caza con que abastecen esta ciudad [Valladolid]”. Sólo tenían como infraestructura importante iglesias ruinosas. Lo mismo puede decirse de los pobladores de Pixoy, Popolá, Yalcón y Temozón, que tampoco contaban con los recursos económicos para sostener a un instructor, pues “sólo viven de sus cortas sementeras unidos al corto producto del henequén que corchan y talan” (Quezada, 2010: f. 81).

Los habitantes de Kanxoc, Tixhualahtun, Chichimilá, Xocen, Ebtun, Uayma, Tinúm, Cuncunul, Kaua y Piste, todos del partido de Valladolid, vivían en las mismas circunstancias que los anteriores, pues carecían de suficientes ingresos para “sufragar los gastos de enseres, libros y demás cosas necesarias para establecer con fruto una escuela”. Aún más, Nabalám y Chemax también estaban privados de escuelas y maestros por no “tener más industria que la labranza y ningún comercio para arbitrar alguna suma auxiliar de sus gastos”. La excepción fue el pueblo de Tixcacalcupul, donde había una escuela, “aunque sin mayor adelanto, por la suma pobreza de los alumnos a quienes suele faltar lo necesario” (*Ibid.*)² La milpa apenas alcanzaba para subsistir, mas no para generar suficientes ganancias para sostener una escuela. En definitiva, los pueblos del partido de Valladolid tenían como principal medio de subsistencia la milpa y se hallaban en precarias condiciones económicas, lo que les impedía contar con escuelas.

Los pueblos del oriente y sur de Yucatán poseían tierras suficientes para sus milpas. Un caso concreto fue el pueblo de Tihosuco, situado a poco más de 50 km al sur de Valladolid y perteneciente al partido de Beneficios Altos. Poseía en su lado sur vastas tierras que los pobladores podían usar para sus milpas. Esto explica la escasez de registros que den cuenta de las disputas y problemas de despojo, y si los hubo, poco importó dada la existencia de extensos terrenos para las labranzas (Rugeley, 1997:20-40). De manera general, los distritos de Valladolid, al cual pertenecía el partido del mismo nombre, Tekax y Campeche disponían de más recursos naturales, más humedad, tierras fértiles y montes más extensos (Bracamonte, 1993: 96).

Pues bien, los pueblos del partido de Valladolid mantenían bajo su dominio buena parte de sus tierras. Estas no habían sido afectadas seriamente por las denuncias y las adjudicaciones de los particulares. Por ejemplo, se ha documen-

2 Memoria leída ante el Augusto Congreso Extraordinario de Yucatán, por el Secretario General de Gobierno, el día 18 de septiembre de 1846. Mérida, Imprenta de Castillo y Compañía, 1846, f. 81.



tado que entre 1843 y 1847 las adjudicaciones apenas fueron de 21 900 ha, que equivale al 2.6 % del total estatal. De esto da constancia el número de denuncias registradas en el libro de protocolos notariales que cubren el período que va 1843 a 1846. En el primer libro, de 1844 a 1845, sólo se registró una adjudicación.³ En el libro que cubre los años de 1845 a 1846 se autorizó únicamente la adjudicación y la certificación de un mismo terreno baldío situado al sur del pueblo de Xocen —ubicado a pocos kilómetros al sureste de Valladolid— a nombre de Juan Andrade Pelayo.⁴ Por último, en el de 1846 a 1847 también documentamos una adjudicación de terrenos baldíos en la comprensión del pueblo de Chemax.⁵ Incluso, la cantidad de terrenos adjudicados a los particulares en el partido de Valladolid fue mucho menor en relación a sus partidos vecinos: en el de Tizimín fue de 87 426 ha y en el de Espita 66 976 ha (Patch, 1990: 73). No dudamos de que se dieron casos de despojo de tierras poseídas por los pueblos que no quedaron registrados. Con todo, las denuncias y las adjudicaciones de tierras en el partido de Valladolid entre 1843 y 1847 aún no causaba estragos a los pueblos. Sin embargo, ya avizoraban el peligro que representaba la ley de enajenación de terrenos baldíos.

Fueron los pueblos contiguos a Valladolid los que padecieron más tensión agraria por colindar con las fincas dedicadas al cultivo de caña. Podemos usar como botón de muestra los pueblos de Temozón y Muchucux, el primero localizado a 5 km al norte y el segundo a 25 km al sureste de Valladolid. En 1880 un grupo de milperos de Temozón envió un ocurso al gobernador para pedirle que impidiera el despojo de una parte montes, pues los denunciante lo catalogaban como ejidos de dicho pueblo. En la misiva expusieron que los terrenos en disputa no formaban parte del ejido ni del fundo legal, ya que “desde antes de la emigración que tuvo en el año de 1848 [debido a la guerra], y desde entonces nunca le hemos conocido fundo legal o ejidos: el pueblo está rodeado de propiedades particulares y los terrenos que cuestionamos ninguna colinda con los límites de la población”.⁶ Así, desde antes de la guerra de castas, Temozón no sólo se hallaba rodeado de fincas, sino que también no contaban con las tierras necesarias para sus labranzas. En cuanto a Muchucux, poco antes del levantamiento armado maya, el cura Eusebio Rejón denunció una parte de montes que poseía el pueblo “para anexarla a su establecimiento” (Baquero, 1994: 44, t. 2). Estos casos,

3 AGEY, Archivo Notarial, caja 41, volumen 159, cd. 159, f. 302 v. “Que don Pedro Castillo, tesorero general de las rentas de este departamento hace favor de don Felipe Leal, vecino del pueblo de Pixoy, de un terreno baldíos para aumento de su paraje Dzubtó, en la comprensión de Pixoy, partido de Valladolid”.

4 AGEY, Archivo Notarial, caja 42, volumen 162, cd. 162, ff. 175v-177. La adjudicación señala que Juan Andrade Pelayo, vecino de Valladolid, denunció al superior gobierno las tierras baldías, que cuenta con cenote llamado Xunil, ubicadas a seis leguas al sur del pueblo de Xocen en la jurisdicción de Chichimilá, cuyo propósito era aumentar los pastos del ganado y labores de su paraje.

5 *Ibid.*: f 256 v.

6 AGEY, Gobernación, caja 243, f. 1. 7 de marzo de 1880.



sobre todo el de Temozón, nos muestran los problemas agrarios que atravesaban los pueblos cercanos a Valladolid por la presencia de las fincas y la carencia de tierras.

Por otra parte, la economía yucateca se sustentaba en la ganadería y el cultivo de caña, actividades productivas que se desarrollaron en distintos partidos. Hasta 1846 los distritos de Mérida e Izamal se dedicaban a cría ganado vacuno y caballar y al cultivo de maíz. Ambos distritos concentraban aproximadamente 884 fincas, que representaba el 63 % del total que se ha calculado para Yucatán en ese año (Bracamonte, 1993: 40-60). En cambio, en los distritos de Tekax y Valladolid dominó la producción de caña, aunque se cultivó más mecates en el primero que en el segundo. Por ejemplo, del distrito de Tekax se registró 72 081 mecates de caña para 1844, cifra que representa el 71.4 % del total de mecates sembrados en la península. Las haciendas y los ranchos dedicados a esta actividad productiva se distribuían en los tres partidos que constituían el distrito, Tekax, Peto y Sotuta, que en total sumaban 185 haciendas y 678 ranchos (Gómez, 2005: 180-187).

En ese mismo año se registró para el distrito de Valladolid, integrado por los partidos de Valladolid, Tizimín y Espita, 21 984 mecates de caña, que representa el 21.5 % del total cultivado en la península, cifra muy por debajo del cultivado en el distrito de Tekax (*Ibid.*). Algunos cálculos indican que el partido de Valladolid contaba con 117 haciendas y 115 ranchos, donde se producía caña de azúcar. El algodón fue otro cultivo que se hacía en las fincas para abastecer a la “Aurora Yucateca”, una fábrica de hilados y tejidos de Valladolid que funcionó entre 1833 y 1847 (Cline, 1978: 5-8).

En suma, hasta 1847 Yucatán navegaba en medio de la prosperidad económica y la estabilidad social. Si bien se manifestaban variaciones en las actividades productivas, las cifras de población y el impacto que ya causaba en los pueblos la ley de enajenación de terrenos baldíos, Yucatán parecía dirigirse hacia un mismo rumbo, es decir, se iba escribiendo una historia relativamente uniforme. Sin embargo, poco antes de julio de 1847 se rumoraba que los mayas del oriente yucateco, donde era la población dominante, planeaban levantarse en armas como respuesta a las amenazas de enajenación de tierras y a las excesivas cargas fiscales. Rumor que se hizo verdad a fines de julio de 1847. Desde entonces, el devenir histórico de Yucatán se bifurcó y el oriente siguió otro rumbo para escribir su propia historia.



Las secuelas demográficas de la guerra de castas en el oriente de Yucatán, 1847-1870

Como todo movimiento armado o guerra, la insurrección maya que detonó en 1847 causó devastación y estragos en los espacios que tuvo como escenario, principalmente en los pueblos periféricos al territorio de los mayas insurrectos. Le imprimió otro rostro demográfico, económico, social y agrario a dichos pueblos. En este apartado analizaremos las secuelas demográficas y económicas de la guerra en el oriente de Yucatán entre 1847 y 1870. Para que en el siguiente apartado se exponga cómo estas secuelas incidieron en la formación del paisaje agrario de los pueblos aledaños a Valladolid.

A fines de julio de 1847 un grupo de mayas liderados por Cecilio Chí irrumpió de manera violenta en el pueblo de Tepich, al sur de Valladolid, para quemar viviendas, saquear y cegar la vida de sus habitantes (murieron cerca de 25 vecinos con sus familias). La noticia llegó hasta Mérida y causó consternación, sobre todo en el círculo de los intelectuales radicados en la apacible ciudad. Uno de ellos, Serapio Vaqueiro, calificó la acometida contra Tepich como el “día, mes y año funestamente memorable en los anales de Yucatán, porque marca el principio y el origen de todas sus desventuras” (Baqueiro, 1990: 237). El ataque perpetrado por el aguerrido Chí abrió el telón de la guerra de castas, como se le denomina tradicionalmente por la historiografía yucateca, cuyo fuego se mantendría encendido hasta principios del siglo XX.

Desde la destrucción de Tepich hasta el decenio de 1870, los mayas insurrectos perpetraron constantes ataques contra los pueblos del oriente. Durante el primer año de la guerra, devastaron pueblos y fincas. En sus asaltos contra los pueblos, incendiaron casas, destruyeron edificios públicos, mataron y tomaron prisioneros a sus habitantes y se apropiaron de víveres (animales y maíz). Por ejemplo, en noviembre de 1847 Jacinto Pat atacó al pueblo de Tixcacalcupul, situado a 25 km al sur de Valladolid, para reducirlo a cenizas y aniquilar a los vecinos. En ese mismo mes, Cecilio Chí y sus hombres destruyeron el pueblo de Tihosuco (Rugeley, 2009:63). Para abril de 1848 todo el oriente y sur de Yucatán estaba bajo dominio de los rebeldes. Poco podía hacer el gobierno yucateco para contrarrestar la fuerza bélica de los sublevados, pues había dejado de tener hegemonía política y militar sobre los partidos de Tizimín, Valladolid, Peto, Sierra Alta, Bolonchenticul, Sotuta y Ticul. Los pueblos del oriente y sur de Yucatán se habían convertido “en un montón de ruinas”.⁷

En su informe al supremo gobierno de la nación en 1848, Miguel Barbachano, que llegó a la gobernatura del estado en marzo de este año, manifestó con

⁷ AGN, Folletería, número 593, 1861, p. 11.



suma preocupación, y quizá con algo de exageración, que “más de la mitad de los pueblos se hallan en poder de los indios, de los que un gran número de ellos han sido asolados, otros tantos, los que han logrado escapar de “su brutal ferocidad gimen en la miseria”.⁸ Además, más de 200 pueblos habían sido incendiados, lo doble ocurrió con las haciendas y los ranchos. Aún peor, debido a la falta de brazos para la milpa, el maíz ya escaseaba y comenzaba a propagarse el hambre.⁹ Por si fuera poco, surgió un brote de cólera en ese mismo año. Barbachano describió las funestas circunstancias que atravesaban los pueblos del sur y oriente de Yucatán con suma desesperación. Expresó que “los lugares, ahora desiertos y sombríos, en que antes existieron Valladolid, Izamal, Ticul, ciudades florecientes, convertidas en escombros y cenizas, como tantos otros pueblos arruinados por el indio bárbaro”.¹⁰ En definitiva, los pueblos del oriente y sur de Yucatán quedaron devastados durante el primer año del levantamiento armado de los mayas, por lo que se hallaban inmersos en un ambiente de desolación y destrucción. Desde mediados de 1848 los insurrectos cesaron sus ataques al replegarse a su territorio por el comienzo del ciclo agrícola. Con esta tregua, que duraría hasta 1853, los pueblos descansaron del miedo a los repentinos ataques y el Estado yucateco reorganizó sus tropas para iniciar una campaña bélica contra los rebeldes en su propio territorio. Fue en ese lapso cuando los rebeldes del sur firmaron los tratados de paz con el gobierno yucateco. Estos dos sucesos pusieron en jaque la lucha armada de los mayas del oriente (Reed, 2010: 104-106; Villalobos, 2006: 52, 61-65). Con todo, el movimiento armado de los mayas se reavivó en 1853 gracias al impulso que les dio la aparición de la cruz parlante, quien les ordenó que siguieran su lucha, mandato que no dudaron en acatarlo. También el favoreció el retiro obligado de las tropas gubernamentales del territorio rebelde para atender los problemas políticos entre liberales y conservadores (Reed, *op. cit.*: 140; Dumond, *op. cit.*; Villalobos, *op. cit.*: 71). La tregua no fue tiempo suficiente para que la vida cotidiana en los pueblos del partido de Valladolid regresara a la normalidad y se recuperaran de la devastación.

Pues bien, en 1853 los mayas rebeldes iniciaron una oleada de ataques que perduraría hasta principios del decenio de 1870. En este período su influencia se limitó a los partidos de Valladolid, Espita, Tizimín, Tekax y Peto, todos ellos periféricos a su territorio. En el caso del partido de Valladolid se ha documentado que los rebeldes ejecutaron 52 ataques contra los pueblos (Villalobos, *op. cit.*: 80, 281-284). En ese tiempo, como lo hicieron al principio, invadieron a los pueblos para quemar sus viviendas, posesionarse de víveres y apresar a sus habitantes. Además, siguieron saqueando lo poco que seguían produciendo las haciendas y los ranchos (sólo hacían milpa para la subsistencia de sus propietarios). Ante

8 AGN, Gobernación, caja 356, expediente 5, 1848, ff. 5v, 12v.

9 *Ibid.*: ff. 25-30.

10 *Ibid.*: f. 35.



semejante escenario que vivían los pueblos del partido de Valladolid, ¿Cuál fue el impacto demográfico de la guerra en estos pueblos?

La baja de población en el partido de Valladolid fue uno de los efectos inmediatos de la guerra de castas. Hasta 1846, como vimos, tenía más habitantes que los partidos de Tizimín y Espita, además de que su población era predominantemente maya. Al iniciarse la guerra, miles de ellos se enlistaron en las filas rebeldes para defender sus tierras de la ley de enajenación de terrenos baldíos y deshacerse de las pesadas cargas fiscales. Este fue el inicio de la merma de población en el partido de Valladolid, pero que se agudizó con las emigraciones y las muertes que provocaron los constantes ataques contra los pueblos.

Algunos censos de la época dan cuenta del drástico descenso de población en el distrito de Valladolid, constituido por los partidos de Valladolid, Tizimín y Espita. Uno de ellos lo publicó José María Regil y Alonso Manuel Peón en el boletín de la *Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística* en 1853, donde se registró el número de habitantes de cada uno de los cinco distritos que conformaban Yucatán. Para ese año, el distrito de Valladolid (integrado por los partidos de Valladolid, Tizimín y espita) contaba con 23 066 habitantes, cuando en 1846 era de 97 468. Sufrió una merma de 74 402 habitantes. Tekax fue otro distrito que sufrió la disminución de su población. Su población se redujo de 134 000 habitantes a 35 5050, esto representó una mera de 98 485 personas (Rodríguez, *op. cit.*: 197-198, t. 2). Si bien el registro puede ser engañoso o incompleto, su valor radica en que nos da una idea general de los efectos demográficos de la guerra en sus primeros años.

Para conocer con más precisión el impacto demográfico de la insurrección maya en los pueblos del oriente yucateco es necesario observarlo por partido político, incluso por pueblo. El censo de 1854 nos indica que el partido de Valladolid fue la más afectada demográficamente de los tres partidos que conformaban el distrito del mismo nombre. Su población se redujo a 10 928 habitantes de 50 760 que tenía 1846. Los partidos de Tizimín y Espita perdieron menos población. En el caso del primero se redujo de 15 674 a 10 770 habitantes. En cambio, el segundo mantuvo sin alteraciones su número de habitantes, incluso experimentó un ligero incremento: de 9 825 habitantes en 1846 aumentó a 9 905 en 1854. (*Ibid.*:200, t. 2). Los escasos y esporádicos ataques rebeldes contra los pueblos del partido de Espita explican la nula pérdida de población. La merma de habitantes del partido de Valladolid fue de 39 832 habitantes y el Tizimín de 4 906. ¿Por qué disminuyó drásticamente la población del partido de Valladolid? Por su colindancia con el territorio de los mayas insurrectos, esto causó que los pueblos que los conformaban fueran blanco de constantes ataques.



Hasta el decenio de 1860 los pueblos del partido de Valladolid seguían sin recuperarse demográficamente. Por supuesto, los ataques que aún se presentaban truncaba el crecimiento de la población. Incluso, varios pueblos continuaban deshabitados. Vimos antes que en 1846 el partido de Valladolid estaba constituido por 27 pueblos, y en ellos vivían 27 556 personas, mientras que Valladolid tenía 10 000 habitantes. Para 1862 el número de habitantes apenas ascendía a 12 939, distribuidos en 18 pueblos. Los asentamientos restantes permanecían deshabitados. La población de Valladolid era de 4 741 habitantes (Rodríguez, *op. cit.*: 206-207, t. 2). Como puede observarse en el cuadro 1, a principios del decenio de 1860 el número de habitantes de cada uno de los pueblos del partido de Valladolid se mantenía reducido a menos de la mitad del total que tenían en 1846. En el caso de los pueblos, cerca de una docena de ellos seguían deshabitados.

Cuadro 1. Número de habitantes de los pueblos del partido de Valladolid en 1846 y 1862.

Censo de 1846		Censo de 1862	
Pueblo	Núm. de hab.	Pueblo	Núm. de hab.
Cuncunul	1 158	Cuncunul	438
Chemax	2 773	Chemax	947
Chichimilá	2 341	Chichimilá	1 089
Dzitnup	350	Dzitnup	267
Ebtun	680	Ebtún	440
Hunukú	568	Hunuku	Despoblado
Kanxoc	1 099	Kanxoc	362
Kaua	1 608	Kaua	220
Muchucux	845	Muchucux	Despoblado
Nabalam	775	Nabalam	Despoblado
Pisté	1 172	Pisté	308
Pixoy	741	Pixoy	204
Popolá	875	Popolá	203
Sisbichén	220	Sisbichen	Despoblado
Sisal	389	Sisal	Despoblado
Tahmuy	307	Tahmuy	Despoblado
Tekom	1 143	Tekom	440
Temozon	843	Temozón	177
Tesoco	305	Tesoco	Despoblado
Tikuch	628	Tikuch	298
Tinúm	1 600	Tinúm	326
Tixcacalcupul	2 179	Tixcacalcupul	518
Tixhualahtún	1 870	Tixhulantun	724
Uayma	775	Uayma	372



Valladolid	10 000	Valladolid	4 741
Xocen	1 500	Xocen	864
Yalcobá	513	Yalcobá	Despoblado
Yalcón	299	Yalcón	Despoblado
Total	37 556	Total	12 939

Poco antes de que cesaran los ataques, en los primeros años del decenio de 1870, el número de habitantes de los pueblos del partido de Valladolid seguía muy debajo del que tenía antes de la guerra. Sin embargo, hay indicios de que comenzaba un ligero incremento. De 12 939 habitantes que tenía el partido en 1862, aumentó a 18 370 para 1869 (*Ibid.*: 213). Esto significa que tuvo un crecimiento de 5 000 personas en casi una década, pero apenas rebasaba la mitad de la cantidad que había en 1846. Los ataques rebeldes contra los pueblos menguaron a fines del decenio de 1860, lo que dio pie a la paulatina recuperación demográfica del partido de Valladolid.

En resumen, por su posición periférica al territorio rebelde, los pueblos del oriente de Yucatán resultaron ser los más afectados demográficamente por los ataques rebeldes. Por lo que seguían teniendo un reducido número de habitantes al cesar los ataques en 1870. Numerosos informes que el jefe político de Valladolid envió al gobernador en 1875 dan cuenta del fin de los ataques insurrectos contra los pueblos del partido de Valladolid. Por ejemplo, durante todo abril dirigió varios comunicados al gobernador para informarle que en los pueblos del partido se conservaba la paz y la tranquilidad.¹¹ El jefe político continuó con esta labor hasta el ocaso del decenio de 1870, y en todos sus comunicados dio cuenta del ambiente de normalidad que se vivía tanto en la cabecera como en los pueblos del partido.¹² Finalmente, la guerra había llegado a fin, los ataques rebeldes cesaron totalmente en los pueblos aledaños a Valladolid. Aunque los mayas insurrectos se mantuvieron replegados en su territorio, en las selvas del sureste de la península, desde donde mantuvieron encendido el fuego de su lucha armada, hasta que ese fuego fue extinguido por el gobierno porfirista en 1901. Ahora bien, ¿Cómo las secuelas demográficas de la guerra repercutieron en el paisaje agrario que formó en el oriente entre 1847 y 1870? Será el tema del último apartado de este trabajo

El paisaje agrario del oriente de Yucatán durante la guerra de castas

El descenso de población en el oriente de Yucatán dibujó un paisaje agrario que se caracterizó en la formación de excedentes de tierras en los pueblos que aún eran habitados, la abundancia de tierras libres o “sin dueño” que poseían los

11 AGEY, Correspondencia Oficial, caja 315, volumen 265, expediente 91; los informes corresponden a las fechas del 3, 6, 10, 13 y 28 de abril de 1875.

12 AGEY, Correspondencia oficial, caja 338, volumen 288, expediente 49; 8 de abril de 1879.



asentamientos abandonados, una subsistencia basada en la milpa, que por cierto llegó a escasear durante la guerra, y la decadencia productiva de las haciendas y los ranchos que se dedicaban al cultivo de caña. Con la disminución de los milperos también se redujo la cantidad de hectáreas usadas para sembrar maíz. Esto dio pie para que las milpas abandonadas comenzaran su etapa de barbecho y que, junto con las que estaban en ese proceso, la selva recuperara su espacios y altura original, formando así vastos excedentes de montes en desuso. En cuanto a las haciendas y los ranchos, buena parte de ellos quedaron destruidos y abandonados, y los que se mantuvieron en pie se dedicaron a sembrar maíz para la subsistencia de sus propietarios. En pocas palabras, reflejaban un panorama desolador y quedaron en un estado improductivo. Adelantándonos un poco a las conclusiones, el oriente yucateco pareció replicar el mismo panorama agrario que prevaleció durante casi toda la Colonia, excepto por las estancias que en aquel entonces estaban de pie y se dedicaban a la cría de ganado mayor.

Un primer rasgo del paisaje agrario del oriente de Yucatán fue el excedente de tierras que lograron poseer pueblos aledaños a Valladolid. Parte de los excedentes que dejaron de usarse para la milpa fueron arrendados o vendidos por sus poseedores para cubrir las necesidades del pueblo. Por ejemplo, en un informe de 1864, el jefe político de Valladolid, Francisco Cantón, manifestó al prefecto superior político del Departamento que varios pueblos arrendaban sus tierras a algunos particulares, tal como lo había hecho Uayma. Éste pueblo dividió las ganancias obtenidas de las rentas, aunque desproporcionadamente, entre los varones y las viudas, ya que éstas recibían una menor cantidad que aquellos; otra parte les sirvió “para gastos muy precisos de las audiencias” y para la educación, pues destinaron “seis pesos mensuales al preceptor”.¹³ Así, el arrendamiento de tierras refleja con claridad que los pueblos contaban con excedentes por la disminución de sus habitantes.

La venta de porciones de tierras es otra muestra de los excedentes que poseían los pueblos. En el mismo informe, Cantón describió que el pueblo de Temozón vendió a “Don Feliciano Padilla una legua de tierra de comunidad por trecientos pesos. Y por haberse reducido a la tercera, cuarta o quinta parte el número de habitantes del pueblo, la parte que en comunidad correspondía a los muertos sin parientes, la han heredado sin duda los supervivientes”.¹⁴ Uayma y Temozón se situaban en las cercanías de Valladolid, al oeste y sur respectivamente, lo que hizo que sus excedentes fueran atractivos para los particulares, dado que no tenían la necesidad de alejarse y poner en riesgo sus vidas por un ataque repentino de los sublevados.

13 AGEY, Tierras, caja 29, volumen 179, expediente 5, f. 1; 18 de noviembre de 1864

14 AGEY, Tierras, caja 29, volumen 179, expediente 5, f. 1; 18 de noviembre de 1864.



Otros pueblos que disponían de tierras libres, aunque relativamente distantes de Valladolid, sólo fue aprovechado por sus poseedores o a veces ni eso debido a la presencia de los rebeldes. Un caso concreto fue el pueblo de Pisté, localizado a más de 40 km al oeste de Valladolid. En 1857 los vecinos de Pisté talaban los montes situados al norte de su asentamiento, mientras que los que se localizaban al sur, que también eran de su posesión, los usaban poco para sus milpas. Acudir hasta ahí les representaba un peligro. Además, hacia el norte disponían de suficientes tierras porque colindaban con los antiguos terrenos de Xocempich, que se encontraba deshabitado. Para no correr riesgos, los vecinos de Pisté usufructuaban dichos terrenos para sembrar maíz. Esta acción molestó al juez de paz de Dzitas por considerar que pertenecían a Dzitas, ya que era cabecera de Xocempich cuando aún estaba habitado. Para impedir o controlar su usufructo, envió un oficio al juez de Pisté para que notificara a los vecinos de Pisté la obligación de pagar arrendamiento. Nada de eso sucedió.¹⁵ Los milperos de Pisté siguieron aprovechando tanto sus tierras situadas al norte como las del despoblado Xocempich. En cambio, los que poseían al sur tuvieron poco uso por el miedo a toparse con los sublevados. A nadie le interesó arrendar o comprar tanto las tierras de Pisté como las de Xocempich.

Las tierras de los pueblos abandonados fueron otro rasgo del paisaje agrario del oriente yucateco durante la guerra. Como vimos en el cuadro 1, cerca de una docena de pueblos quedaron deshabitados, y esto incluye sus terrenos. Además de Xocempich, Muchucux es otro caso que hemos documentado de un asentamiento abandonado con tierras libres o sin dueños. El jefe político de Valladolid, José María Traconis, elaboró un informe en 1888 en el que dio cuenta del estado de las escuelas del partido de Valladolid y describió que, después de visitar algunos pueblos, se “remontó al desolado Muchucux, último de este partido por recuperar, que a mi juicio según mi reconocimiento es ya tiempo de habitarlo”. Durante la visita de Traconis Muchucux seguía despoblado y sus tierras en abandono. Y por lo mismo, a decir de Traconis, “gentes de otros pueblos a cuyas inmediaciones tienen sus labranzas”. Al igual que con Xocempich, En otras palabras, los habitantes de otros pueblos comenzaban a talar los montes de Muchucux para sus milpas, de ahí que el jefe político se preocupara de su repoblamiento.¹⁶ Ya dijimos que cerca de una docena de pueblos del partido de Valladolid fueron abandonados durante la guerra y que contribuyó en la formación de abundantes tierras sin dueños o vacantes. Este fue uno de los rasgos del paisaje agrario de los pueblos aledaños a Valladolid que forjó el movimiento armado de los mayas.

Por otro lado, la guerra de castas detuvo casi todas las actividades productivas que sustentaban la economía de los pueblos de oriente yucateco. Las artes,

¹⁵ AGEY, Correspondencia Oficial, caja 89, volumen 39, expediente 8; 8 de febrero de 1857.

¹⁶ AGEY, Gobernación, caja 248; 17 de enero de 1888.



el comercio, la industria y la agricultura casi desaparecieron en su totalidad, lo que obligó al gobierno yucateco a importar “del extranjero para no padecer hambre, hasta aquellos artículos de primera necesidad que antes producía el país [Yucatán] en cantidades bastantes para su consumo y exportación”.¹⁷ Entre ellos se incluía el maíz. Así, el oriente de Yucatán quedó sumergido en una severa crisis económica y productiva.

Apenas logró mantenerse la milpa como principal medio de subsistencia de los agricultores mayas y sus familias, aunque con mucho trabajo y esfuerzo por las afectaciones causadas por los rebeldes. Una fuente de 1852 describió que era tal el “estado de pobreza y necesidad en que se hayan los pueblos [del partido de Valladolid] que la mayoría de sus habitantes no han podido ni reponer sus casas”. Lo peor de todo era la falta de granos para alimentar a la población, pues “todo está paralizado y no hay una sola persona que emprenda negocio alguno por falta confianza”. La inseguridad en los montes por la presencia de los sublevados impedía a muchos campesinos cultivar maíz.¹⁸

Este panorama comenzó a cambiar de manera paulatina con el cese de los ataques rebeldes en el decenio de 1870, para entonces los pueblos seguían sumergidos en una severa crisis económica y basando su subsistencia en el cultivo de maíz. En 1875 el jefe político de Valladolid, Carlos Moreno Navarrete, informó al gobernador sobre la riqueza y prosperidad de los pueblos del partido de Valladolid, y expuso que la decadencia de la riqueza pública de dichos pueblos era por “causa de la guerra contra los indios”. Además, denunció que la miseria se debía en parte a que “pudiendo dedicarse sus habitantes a alguna industria”, se ocupaban en el servicio de las armas para defender sus propios hogares, sin recibir salario alguno del erario, y sólo se ocupaban en hacer pequeñas sementeras para mantenerse en unión con sus familias”. En cuanto a los comercios, los pueblos no tenían ni “una tienda de lencería o abarrotes”.¹⁹ Podemos afirmar que al finalizar la guerra en el oriente de Yucatán los pueblos se mantenían sumidos en una severa crisis económica que se reflejó en la pobreza de los pueblos, la subsistencia basada sólo en la milpa y la falta de actividades productivas que dinamizara la economía de la zona.

La última característica del paisaje agrario que definió el oriente fue el colapso de las haciendas y ranchos dedicados al cultivo de caña. La guerra de castas echó por los suelos los logros económicos que se había obtenido en el oriente yucateco hasta 1847 (Cline, *op. cit.*:5). Una lista elaborada en 1855 sobre el

17 AGEY, Gobernación, caja 248; 17 de enero de 1888, ff. 5-6.

18 AGEY, Correspondencia oficial, caja 81, volumen 31, expediente 16; Valladolid, 8 de octubre de 1852.

19 AGEY, Gobernación, caja 317, volumen 267, expediente 55, 7 de agosto de 1875.



número de fincas del partido de Valladolid y el número de varones de 16 a 60 años que vivían en ellas, nos muestra la magnitud de la destrucción que sufrieron las haciendas y los ranchos del partido de Valladolid. En ella se registró 22 haciendas y 80 ranchos, con una población de 549 personas de entre 16 a 60 años.²⁰ Estas cifras contrastan con las de 1846: 117 haciendas y 115 ranchos, donde radicaban 14 049 personas. Al comparar las cifras notamos que las haciendas resultaron ser más afectadas por la guerra. En cambio, más de la mitad de los ranchos lograron mantenerse en pie. Esto lo atribuimos a la orientación productiva de los ranchos, que se habían dedicado al cultivo de maíz para la subsistencia de sus propietarios y sus familias.

El registro de 1855 nos indica que más de la mitad de ranchos se dedicaba al cultivo de maíz, pero no alcanzaba cubrir las demandas de la población, por tanto, fue necesario importar el grano y otros productos agrícolas para satisfacer las necesidades alimentarias de los habitantes del partido. En el mismo informe, el jefe político de Valladolid dio cuenta de la decadencia productiva del partido. En el ramo del comercio, Valladolid contaba con “siete tiendas insignificantes de lencería y abarrotes”. Sus propietarios importaban desde Mérida la mayoría de los productos que comercializaban. En contraste, la exportación de maíz y carne de ganado mayor era inexistente, lo que mantenía “muerto los principales ramos de industria” en el partido.²¹ En definitiva, el colapso de las actividades productivas en el oriente de Yucatán no sólo produjo una crisis económica, sino también la escasez de productos agrícolas y carne para cubrir la demanda del mercado local. Los constantes ataques de los mayas insurrectos contra las haciendas y los ranchos, aunado al miedo de sus propietarios a invertir en ellas, los mantuvo en un estado improductivo, mientras que los que se mantuvieron en pie se orientaron a cultivar maíz para la subsistencia de sus propietarios y sus familias.

Conclusiones

Este artículo ha tratado de argumentar que la formación de los paisajes agrarios en determinadas zonas y épocas son resultado del condicionamiento de hechos históricos coyunturales, combinado con los elementos locales. En una zona o región pueden presentarse uno o más hechos históricos coyunturales, de modo que producen paisajes agrarios heterogéneos. Pero los hechos históricos coyunturales no sólo influyen en los espacios donde se gestaron, también pueden hacerlo en zonas periféricas, de ahí que merezcan ser atendidas para analizar sus efectos agrarios. Con este marco, el presente artículo ha tratado de mostrar las implicaciones agrarias de la guerra de castas en una zona marginal a su escenario principal.

20 AGEY, Hacienda, caja 316, volumen 86, expediente 51; 11 de octubre de 1855.

21 AGEY, Gobernación, caja 317, volumen 267, expediente 55, 7 de agosto de 1875, f. 2.



Además, ha tratado de cubrir un vacío historiográfico que había en el estudio de los procesos agrarios en Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, estudiar el paisaje agrario que se forjó en una zona periférica al territorio de los mayas insurrectos nos permite entender los alcances de la guerra. Pero también nos revela la heterogeneidad de los paisajes agrarios que se formaron en Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX y la participación de los mayas en la configuración de los mismos. En tal sentido, la lucha armada de los mayas fue el catalizador del paisaje agrario que se configuró en el oriente de Yucatán entre 1847 y 1870.

Si bien el oriente de Yucatán se caracterizó por su alta concentración de población maya y el dominio de los pueblos sobre sus tierras, su historia agraria era similar al resto de Yucatán durante casi toda la primera mitad del siglo XIX. Pero se bifurcó con el levantamiento armado de los mayas en 1847. A partir de entonces, el oriente yucateco construyó su propia historia. Parte de ella consistió en la devastación material y la pérdida de población que experimentaron los pueblos, la abundancia de montes para las milpas y el colapso productivo de las fincas productoras de caña. Sin duda, se trata de una historia de devastación y crisis económica, pero también de la autonomía agraria de los mayas yucatecos.

Por su posición periférica al territorio rebelde, los pueblos aledaños a Valladolid resultaron ser los más flagelados por los ataques. La población maya se redujo de manera drástica y los pueblos quedaron en ruinas, lo que pareció replicar parte de lo vivido por los mayas de la Colonia, cuando las epidemias diezmaron a gran parte de la población de Yucatán. En consecuencia, vastos excedentes de tierras quedaron a disposición de los pueblos, lo que les permitió arrendar o vender parte de ellas. Este mismo efecto produjo la guerra de casta en los pueblos aledaños a Valladolid. En medio de la devastación, la milpa se mantuvo como el único medio de subsistencia de los pueblos. Se convirtió en la principal producción de las fincas que se mantuvieron en pie, pero sólo para el consumo de sus propietarios. Este fue el paisaje agrario que dibujó la guerra de castas en el oriente de Yucatán entre 1847 y 1870.

Finamente, el movimiento armado de los mayas no sólo logro frenar el impacto de la ley de enajenación de terrenos baldíos que ya amenazaba sus tierras, también permitió que los pueblos tuvieran un dominio absoluto sobre ellas y, al mismo tiempo, que dispusieran de excedentes de tierras para sus milpas. Durante y después de la guerra, los mayas del oriente gozaron de un amplio margen de libertad agraria gracias al dominio que tenían sobre sus montes. En tal sentido, los mayas insurrectos cumplieron con su objetivo de conservar sus tierras y mantener su autonomía social y agraria. Por consiguiente, la milpa siguió definiendo el paisaje agrario del oriente de Yucatán durante toda la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, un escenario que contrastó con el noroeste yucateco. ☸



Referencias

- BAQUEIRO, SERAPIO (1990). *Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864*, 3 tomos, Salvador Rodríguez Losa (ed.). Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- BONFIL BATALLA, GUILLERMO (2012). “Historias que no son todavía historias”, en *Historia ¿para qué?* (229-245). México: Siglo Veintiuno Editores, (vigésima tercera reimpresión).
- BRACAMONTE, PEDRO (1993). *Amos y sirvientes. Las haciendas de Yucatán, 1789-1860*. México: Universidad Autónoma de Yucatán.
- ____ (1994). *La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750-1915*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Instituto Nacional Indigenista (INI).
- CANTO ALCOCER, JORGE y TERRY RUGELEY (coords.) (2013). *Ventana de Zaci: otras miradas de la Guerra de Castas*. Valladolid, Yucatán: Universidad de Oriente.
- CLINE, HOWARD (1978). “El episodio azucarero en Yucatán (1825-1850)”, en *Yucatán: Historia y Economía*. Revista de análisis socioeconómico regional, núm. 5, enero-febrero, pp. 3-15.
- DUMOND, DON E. (2005). *El machete y la cruz: la sublevación de campesinos en Yucatán*. México: UNAM, Plumsock Mesoamerican Studies.
- GÜEMEZ P., ARTURO (2005). *Mayas. Gobierno y tierras frente a la acometida liberal en Yucatán, 1812-1847*. México: El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Yucatán.
- KOURI, EMILIO (2009). “Los pueblos y sus tierras en el México porfiriano: un legado inexplorado de Andrés Molina Enríquez”, en Emilio Kouri (coord.), *En busca de Molina Enríquez. Cien años de los grandes problemas nacionales* (pp. 253-330). México: El Colegio de México, Centro Katz, The University of Chicago.
- LAPOINTE, MARIE (1995), “Los orígenes de la guerra de castas de 1847 en Yucatán”, en Othon Baños Ramírez (comp.), *Liberalismo, actores y política en Yucatán*, (pp. 127-161). Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- MACIAS ZAPATA, GABRIEL A. (2002). *La península fracturada. Conformación marítima, social y forestal del Territorio Federal de Quintana Roo. 1884-1902*. México: CIESAS, Universidad de Quintana Roo, Miguel Ángel Porrúa.



- PATCH, ROBERT, (1990) “Descolonización, el problema agrario y los orígenes de la Guerra de Castas, 1812-1847”, en Othón Baños Ramírez (ed.), *Sociedad, estructura agraria y estado en Yucatán* (pp. 45-95). Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- QUEZADA, SERGIO, (coord.) (2010). *Campeche a través de las memorias de los gobernadores. Evolución política y administrativa, 1826-1862*. México: Gobierno del Estado de Campeche.
- REED, NELSON (2010). *La guerra de castas de Yucatán*. México: Editorial Era, 5ª edición en español.
- RODRIGUEZ LOSA, SALVADOR (1989). *Geografía política de Yucatán II. División territorial, gobierno de los pueblos y población 1821- 1900*. México: Universidad Autónoma de Yucatán.
- RUGELEY, TERRY (1996). *Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War*. Texas: University of Texas Press.
- _____ (1997). “Tihosuco, 1800-1847. La sociedad municipal y la génesis de la Guerra de Castas, en *Revista Saastun*. México: núm. 1, abril.
- _____ (2009). *Rebellion Now and Forever, Hispanics, and Caste War Violence in Yucatan, 1800-1880*. California: Stanford University Press.
- VILLALOBOS G., MARTHA (2006). *El bosque sitiado. Asaltos armados, concesiones forestales y estrategias de resistencia durante la Guerra de Castas*. México: CIESAS, INAH, Miguel Ángel Porrúa.





El Cerro y Monte de Tepotzotlán. Los pueblos frente a la desamortización, 1856-1901

El Cerro y Monte de Tepotzotlán. Villages facing expropriation, 1865-1900

Porfirio Neri Guarneros

Universidad Autónoma del Estado de México (México)

<https://orcid.org/0000-0002-6753-4221>

ce_nery@yahoo.com.mx

Recibido: 7 de enero de 2019.

Aprobado: 13 de junio de 2019.

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la resistencia pasiva mostrada por el pueblo de Tepotzotlán ante la desamortización del cerro y monte de Tepotzotlán, de 1856 a 1901. Se busca establecer que los vecinos de Tepotzotlán lograron evadir la desamortización y conservar el uso común del cerro y monte mediante la omisión y la formación de una sociedad agrícola. Fueron estos mecanismos de resistencia, sustentados en las prácticas comunitarias y los intereses económicos, los que permitieron que la ley del 25 de junio de 1856 no tuviera impacto en la desamortización del cerro y monte de Tepotzotlán, también conocido como “cerro y monte del ocote”.

Palabras clave: Tepotzotlán, desamortización, sociedad agrícola, pueblos, prácticas comunitarias.

Abstract

The objective of this work is to analyze the passive resistance shown by the people of Tepotzotlán before the confiscation of the hill and mount of Tepotzotlán, from 1856 to 1901. It is sought to establish that the neighbors of Tepotzotlán managed to evade the confiscation and conserve the common use of the hill and mount through omission and the formation of an agricultural society. It was these resistance mechanisms, based on community practices and economic interests, that allowed the law of June 25, 1856 to have no impact on the confiscation of the hill and mount of Tepotzotlán, also known as “cerro y monte del ocote”.

Keywords: Tepotzotlán, confiscation, agricultural society, villages, community practices.

Introducción

La Revolución de Ayutla en México permitió la llegada al poder de hombres liberales como Ignacio Comonfort, Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, entre otros. Los liberales de esta época consideraban que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y el engrandecimiento de la nación eran la falta de libre movimiento y circulación de la propiedad raíz. Por ello, había que privatizar las propiedades que las corporaciones acumulaban y mantenían ociosas, pues esta condición impedía hacerlas asequibles a mayor número de individuos.

En este sentido, el 25 de junio de 1856 el gobierno federal decretó la desamortización de los bienes en manos de las corporaciones civiles y religiosas, pero el artículo 8 de esta ley exceptuó de la privatización los ejidos y terrenos destinados al servicio público de las poblaciones a las cuales pertenecían (Labastida, 1893: 4-5). De esta forma, las primeras tierras en ser desamortizadas fueron las tierras de común repartimiento y los propios de los ayuntamientos (Knowlton, 1998: 78-79; Menegus, 1995: 144-189).¹

La historiografía, generalmente, considera que la desamortización de los ejidos (pastos, montes y aguas) inició en la década de 1890 como resultado de las circulares federales de 1889 y 1890, las cuales ratificaron que los ejidos no habían quedado protegidos por la constitución federal de 1857; por lo tanto, debían desamortizarse (Fraser, 1972: 617; Powell, 1972: 658; Knowlton, 1998: 87). En este sentido, se ha dado por hecho que las tierras de uso común quedaron exceptuadas de la desamortización, sin detenernos a analizar los conflictos que se suscitaron en torno a la explotación y desamortización de los montes antes de 1890.

Autores como Gloria Camacho, Marco Aurelio Almazán, César Fernando Escudero, Porfirio Neri, entre otros, han abordado la desamortización de los montes para la última década del siglo XIX y la primera del XX. Por ejemplo, Neri (2011) y Camacho (2015) manifiestan que algunos pueblos del Estado de México solicitaron la desamortización de sus montes para impedir la injerencia de las autoridades estatales y municipales. Los montes, en algunos casos, se dividieron y adjudicaron en propiedad particular; pero en aquellos en los que la desamortización no se llevó a cabo, los vecinos formaron sociedades agrícolas para proteger y conservar el disfrute común de los montes. Por otra parte, Escudero (2010) y Almazán (2011) manifiestan que algunos vecinos del sur del valle de Toluca no pudieron desamortizar sus montes debido al interés económico que las autoridades estatales y locales tenían en la explotación de los mismos. Además, los cuatro autores muestran la existencia de una lucha constante entre pueblos

¹ Sobre desamortización de tierras de común repartimiento y propios del ayuntamiento véanse los trabajos de Fraser (1972), Knowlton (1978), Menegus (1995), Escobar (2001), Mendoza (2016), Camacho (2015) y Neri (2017).



y autoridades por el control de los recursos que, incluso, llegó a los tribunales federales; lo cual veremos que no sucedió en el caso del pueblo de Tepotzotlán.

Sin duda, la desamortización de los montes y los conflictos en torno a ella se dieron con mayor fuerza en la última década del siglo XIX y la primera del XX. No obstante, este trabajo establece que antes de 1890 también hubo conflictos por la desamortización de los ejidos, los cuales no han sido suficientemente abordados. Un ejemplo de ello es la desamortización del cerro y monte de Tepotzotlán, pues el 18 de diciembre de 1856 el secretario de hacienda, Miguel Ledo de Tejada, emitió una circular manifestando que el cerro y monte de Tepotzotlán debía desamortizarse; ya que el artículo octavo de la ley del 25 de junio de 1856 era contrario a la propia ley (Labastida, 1893: 21, 28-29). No obstante, los vecinos lograron conservar la administración y el uso común del mismo hasta principios del siglo XX sin hacer la desamortización; lo cual me llevó a plantearme la interrogante que guía este trabajo: ¿cómo logró el pueblo de Tepotzotlán mantener la administración y el disfrute común del monte?

En esta perspectiva, el objetivo de este artículo es analizar la resistencia pasiva efectuada por el pueblo de Tepotzotlán ante la disposición federal que establecía la desamortización del cerro y monte de Tepotzotlán. Se trata de mostrar algunos de los mecanismos empleados por los vecinos del pueblo de Tepotzotlán para mantener el uso común de su propiedad; por ejemplo, las distintas peticiones a las autoridades federales y estatales para no realizar la adjudicación del monte, la omisión a las disposiciones que establecieron la desamortización del mismo, así como la formación de una sociedad agrícola para administrar y explotar el monte.

La hipótesis que se plantea es que fueron las prácticas comunitarias y los intereses económicos las que explican que la ley de 1856 no haya tenido impacto en la desamortización del monte. Ello permitirá ver que la resistencia mostrada por los pueblos ante la ley de desamortización no fue exclusivamente para conservar el disfrute comunal de los recursos del monte, sino también para mantener privilegios económicos.

Los conceptos que guían este trabajo son el de “pueblo indígena” y el de “resistencia pasiva”. Para ello, hemos de decir que la constitución de Cádiz de 1812 formalizó el establecimiento de pueblos pluriétnicos integrados por todos los vecinos sin distinción de razas (Marino, 2006: 439; Marino, 2009: 183); no obstante, conviviendo decir que hablamos de pueblos en los que la población predominante era la indígena. Por ello, empleamos el concepto de “pueblo indígena” para referirnos a un grupo de vecinos² de un pueblo con rasgos de identidad

2 La vecindad era: “un vínculo casi natural, una especie de parentesco que liga entre sí a todos los habitantes de un pueblo por la comunidad de intereses y los hace miembros de aquella fami-



colectiva como la ayuda mutua, el uso colectivo de recursos comunes y el interés común de lograr ciertos objetivos. El concepto de “resistencia pacífica” lo tomamos de James Scott para explicar la conducta y los mecanismos empleados por los vecinos de Tepotzotlán para conservar el disfrute común del monte, ya que dicho autor manifiesta que los subordinados producen, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador (Scott, 2000: 21). Es decir, los subordinados encuentran maneras no violentas de defender sus intereses manteniéndose dentro del marco de la ley; en este caso, mediante la petición, la omisión y la formación de una sociedad agrícola (Scott, 2000: 169).

La historiografía, comúnmente, ha mencionado que los ejidos estuvieron exentos de la desamortización hasta 1890. No obstante, el lector podrá apreciar que la desamortización de cerro y monte de Tepotzotlán se estableció desde diciembre de 1856 y que los vecinos y autoridades municipales actuaron en función de sus intereses sociales y económicos.

Los pueblos y su estructura corporativa

A inicios del siglo XIX, un pueblo de indios aún se definía como una entidad corporativa, donde existía una iglesia, gobernantes electos anualmente y una dotación de tierras suficiente para el sustento de los habitantes (Tanck, 1999: 31). El pueblo contaba con capacidad jurídica para litigar por sus bienes (tierras, montes y aguas) que servían para sufragar las necesidades del pueblo (Pacheco, 1889: 6). El régimen de propiedad era comunal, es decir, pertenecía al pueblo en su conjunto y no era enajenable.

Esta estructura corporativa de los pueblos sufrió distintos cambios durante la primera mitad del siglo XIX. La Constitución de Cádiz de 1812 desapareció las repúblicas de indios e implantó los ayuntamientos como instancias de gobierno local, en aquellos pueblos que contaran con más de 1000 habitantes. Con ello, muchos pueblos dejaron de tener sus autoridades porque el nuevo ayuntamiento abarcaba a varios pueblos; además, los indios perdieron la facultad de elegir entre los de su propia raza a sus gobernantes, como era su costumbre (Salinas, 2001: 61).

México inició su vida en el sistema federal con los ayuntamientos establecidos por la Constitución de Cádiz. En el Estado de México, el 9 de febrero de 1825 se publicó la ley *Orgánica de los ayuntamientos del estado*; la cual estableció una nueva estructura territorial al aumentar a 4000 habitantes la cantidad mínima requerida para poder formar ayuntamiento (Salinas, 2001: 62-64).

lia. Precisamente porque la comunidad se funda en la comunidad de intereses” (Carmagnani y Hernández, 1999: 375).



Lo anterior propició que algunos ayuntamientos indígenas desaparecieran y que la población fuese integrada a ayuntamientos conformados por blancos y mestizos. Así le sucedió al pueblo de Santa Bárbara en la jurisdicción de Cuautitlán que, habiéndose unido en 1821 a los pueblos de San Mateo, Santa María y San Sebastián para obtener el rango de ayuntamiento, lo perdió en 1825 quedando supeditado a la tutela de Cuautitlán. De la misma manera le sucedió a Xaltocan y Coyotepec que antes de dicha ley tenían su propio ayuntamiento (Neri, 2017: 79-80). La municipalidad de Tepotzotlán quedó conformada con cinco pueblos: San Martín Tepotzotlán (Cabecera), San Mateo, Santiago, Santa María y Tepojaco. El ayuntamiento quedó establecido en el primer pueblo.

Uno de los principales problemas de los nuevos ayuntamientos era el de las finanzas públicas, ya que no contaban con los recursos suficientes para mantenerse. Para solucionar el problema, la ley del 9 de febrero de 1825 estableció que los “propios” de los ayuntamientos se formarían con los bienes de los pueblos. Los pueblos contaban, básicamente, con cuatro tipos de tierra: el *fundo legal*, donde estaban los edificios públicos y las casas de los habitantes; *los propios*, terrenos que el ayuntamiento rentaba para solventar las necesidades municipales; las *tierras de común repartimiento*, parcelas individuales usufructuadas por las familias; y los *ejidos*, constituidos por montes, pastos y aguas destinados al servicio común (Fraser, 1972: 631; Knowlton, 1978: 27-28). Otros estudios consideran que también existían tierras de santos y propiedades individuales (Birrichaga, 2003: 208-225; Mendoza, 2011: 275-294, 297-207; Gutiérrez, 2002: 13-15):

Con la ley del 9 de febrero de 1825 los ayuntamientos adquirieron el derecho de recibir un pequeño canon o arrendamiento (enfiteusis) por las tierras de común repartimiento y la facultad de poder rentar los montes, pastos y aguas de los pueblos a particulares (Congreso Constituyente del Estado de México, 1825: 390-391). En Tepotzotlán, uno de los mayores ingresos a las arcas municipales era el de la renta de tierras de comunidad y montes, cuya renta a mediados del siglo XIX producían, más o menos, la cantidad de 320 pesos anuales.³ Por ejemplo, el 6 de agosto de 1853, ante el juez de paz, el ayuntamiento de Tepotzotlán rentó unos terrenos de comunidad a Don Rafael Leguizamo por la cantidad de 140 pesos anuales. En el mismo año se hizo público el remate de los pastos del cerro y demás terrenos de comunidad para darlos en arrendamiento al mejor postor; algunos de los cuales fueron tomados en renta por el propio Rafael Leguizamo por cinco años (1854-1858), quien ofreció la cantidad de 200 pesos de renta. Las tierras adquiridas no disfrutarían de aguas del pueblo, si Leguizamo quería regar tierras debía comprar el agua y limpiar la zanja. Otras tierras fueron

3 Archivo Histórico Municipal de Tepotzotlán (en adelante AHMT), Fondo: Fomento, Serie: Tierras, vol. 7, exp. 21, fs. 1-5.



rentadas a Joaquín Pérez Tejada, propietario de la hacienda de la Teja.⁴

Fue hasta la ley del 25 de junio de 1856 sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas cuando el disfrute y administración de los bienes comunales de los pueblos dieron un giro importante. Esta ley decretó que las corporaciones civiles debían adjudicar en propiedad particular⁵ sus bienes comunales, además prohibieron a los pueblos y ayuntamientos poseer bienes raíces a excepción de los ejidos y bienes destinados al servicio público. En este sentido, los rentistas y posesionarios de las tierras amortizadas podían reclamarlas en propiedad y si alguna tierra no estaba ocupada o el ocupante no la quería adquirir se subastaba.

Autores como Margarita Menegus, Robert Knowlton, Gloria Camacho, entre otros, han señalado que las primeras tierras en ser desamortizadas fueron las de común repartimiento y los propios de los ayuntamientos. En el primer caso, porque eran parcelas individuales que se entregaban a cada familia y sólo se procedió a adjudicar a título de propiedad privada la parcela; en el segundo caso, porque eran tierras que los ayuntamientos arrendaban a habitantes del pueblo o foráneos (Knowlton, 1998: 78-79; Menegus, 1995: 144-189).

Si bien los ejidos y tierras de uso público fueron exceptuadas de la desamortización en el artículo octavo de la ley del 25 de junio de 1856, posteriormente, el gobierno federal emitió circulares en las que determinó que dichas propiedades sí debían desamortizarse; ya que tal disposición era contraria a la propia ley. Dicha salvedad al no ser incluida en el artículo 27 de la Constitución federal de 1857 quedó abrogada (Labastida, 1893: 21). A pesar de ello, hemos dado por hecho que los ejidos (montes, pastos y aguas) estuvieron exceptuados de la desamortización hasta 1890 (Fraser, 1972: 615-652; Knowlton, 1998: 79, 92). Pero ¿qué eran los ejidos?

A decir verdad, aún se tiene poca claridad sobre qué era el ejido decimonónico; muy probablemente esta ambigüedad tiene que ver con los diferentes usos que los indígenas les daban a sus tierras de uso común. Autores como McBride, Lemus García, Knowlton y Fraser, sin hacer diferencia entre el periodo colonial y el siglo XIX, buscaron definir lo que era el ejido. En este sentido, durante el periodo colonial una real cédula del 1º de diciembre de 1573, ratificada el 15 de octubre de 1713, dispuso que los sitios destinados a la creación de pueblos o reducciones de indios tuvieran aguas, tierras y montes, así como un ejido de una legua de largo donde pudieran tener sus ganados (Knowlton, 1998: 72). Es decir, el ejido hacía referencia a un espacio común destinado a actividades

4 AHMT, Fondo: Fomento, Serie: Tierras, vol. 7, exp. 21, fs. 1-5.

5 La propiedad particular implicaba: el derecho que tenían los individuos a gozar y disponer libremente de un bien, con independencia de terceros; siempre y cuando las leyes no se opusieran o se perjudicasen los derechos de un tercero (ESCRICHE, 1851: 567-568, 1392).



relacionadas con el ganado; en tanto que montes y aguas, si bien eran de uso común, no constituían parte del ejido.

Con el tiempo, derivado de las transformaciones políticas, sociales y económicas, el ejido llegó a tener un significado más incluyente abarcando los montes e inclusive el agua. Así, el ejido se transformó con el paso del tiempo: de ser un área pequeña y relativamente desocupada a las afueras del pueblo a un espacio que incluía a todas las tierras de uso común del pueblo: *dehesas* para el ganado, bosques comunales, parcelas agrícolas comunales e incluso el agua (Knowlton, 1998: 73).

De esta forma, hemos dado por hecho que los bienes de uso común constituían el ejido, sin detenernos a analizar la legislación y la forma en que los pueblos disfrutaban de sus montes, pastos y aguas. Sin duda, los distintos tipos de bienes de uso común funcionaron de acuerdo a las circunstancias económicas y sociales de cada región o lugar; por ejemplo, en Yucatán el término ejido era utilizado para referirse al espacio de los pueblos en donde sus habitantes cultivaban y extraían los recursos necesarios para su vida cotidiana (Ortiz, 2014: 20); en Veracruz la ley número 27 del 17 de julio de 1889 estableció que los ejidos debían de tener bosques, fuentes de agua y materiales de construcción como piedra y arena (Knowlton, 1998: 75); en el valle de Cuautitlán los pueblos utilizaban sus ejidos para diferentes usos, dependiendo del tipo de terreno: pastar el ganado, recolectar madera, boñiga, tuna y tequesquite o para obtener tierra y hacer adobes (Neri, 2017: 205).

En Tepotzotlán, los vecinos consideraban el monte de como parte de su ejido, del cual obtenían los recursos necesarios para sobrevivir. A pesar de ello, y en contravención de lo establecido en el artículo octavo de la ley del 25 de junio de 1856, el 18 de diciembre de 1856 el gobierno federal determinó que a Santos Santillán se le debía adjudicar la parte de monte que le rentaba al ayuntamiento de Tepotzotlán; en tanto que, los demás terrenos debían ser divididos y adjudicados en propiedad particular entre los vecinos del pueblo.

De esta forma, el que no hayan sido desamortizados los montes no tiene que ver con cuestiones legales sino con aspectos sociales y económicos. Lo anterior debido a que el monte era un espacio libre en el que los integrantes de una comunidad podían extraer recursos para satisfacer necesidades primarias; además, era un espacio del que se extraían recursos para fines de aprovechamiento económico. Aquí cabría hacerse la pregunta: ¿cuál fue la reacción de los vecinos de Tepotzotlán ante la disposición del gobierno federal que estableció la desamortización del monte de Tepotzotlán? Los siguientes apartados buscan dar respuesta a esta interrogante.



Desamortización y resistencia

A mediados del siglo XIX la municipalidad de Tepetzotlán estaba conformada por los pueblos de San Martín Tepetzotlán (cabecera), San Mateo, Santiago, Santa María y Tepojaco. El ayuntamiento administraba los bienes de los pueblos: tierras de común repartimiento, tierras de comunidad cultivables, el agua del río Tepetzotlán y parte de los montes de la Sierra de Tepetzotlán; de esta forma, el ayuntamiento obtenía una cantidad considerable de recursos económicos, como vimos en el anterior apartado.

Al ser expedida la ley del 25 de junio de 1856 sobre desamortización el ayuntamiento de Tepetzotlán tenía en renta varias propiedades comunales, mismas que fueron denunciadas y adjudicadas a los arrendatarios conforme a la ley del 25 de junio de 1856. No sabemos si Rafael Leguizamo pidió la adjudicación de las tierras que rentaba; pero sí hay constancia de que Cayetano Gómez y Santos Santillán solicitaron la adjudicación de tierras de comunidad. En 1867 el licenciado Cayetano Gómez y Pérez, vecino de Cuautitlán y juez de primera instancia, denunció conforme a la ley de desamortización los terrenos conocidos con el nombre de la “Comunidad” (terrenos de labor y riego) y obtuvo la adjudicación por la cantidad de 2223 pesos.

Gómez y Pérez pidió ante el juez conciliador de Cuautitlán que se le entregaran las escrituras de los terrenos y los títulos,⁶ pero únicamente le fueron entregadas las primeras; debido a que sobre los títulos los demás adjudicatarios también tenían interés en ellos. No obstante, para garantizar los derechos del adjudicatario se presentaron los títulos para que Gómez y Pérez pudiera sacar las constancias necesarias. Los terrenos de la “Comunidad” tenían por el sur 400 varas; por el oriente, 850 varas; por el norte, 795 varas, y por el poniente 378 varas;⁷ es decir 222.900 m² (22.3 hectáreas).

Otro caso, y que es el que nos interesa, es el de las tierras del monte de Tepetzotlán. Al momento de expedirse la ley de desamortización Santos Santillán, vecino del pueblo de San Martín, tenía rentada una parte de las tierras del monte de Tepetzotlán; en tal virtud, Santillán solicitó la adjudicación de dicha propiedad conforme a la ley de desamortización. El ayuntamiento de Tepetzotlán se opuso a dicha adjudicación y a través de su apoderado, Marcelino Castañeda, solicitó al gobierno federal que se les permitiera mantener la posesión comunal de las tierras por ser un bien del que disfrutaban en común los vecinos de

6 La autoridad encargada de otorgar la escritura de adjudicación era el juez de primera instancia de distrito. En ese momento, el juez de primera instancia era Cayetano Gómez y Pérez, por ello tuvo que ser sustituido por el juez conciliador. Archivo Histórico de Notarías del Estado de México (en adelante AHNEM), Cuautitlán, Notaria 1, Gómez y Pérez, 1857, caja 5, leg. 7, fs. 95-103.

7 Una vara castellana equivalía a 838 milímetros (DE LA TORRE, 1888: 263-264).



Tepotzotlán. No obstante, el 18 de diciembre de 1856 Miguel Lerdo de Tejada, mediante una circular, determinó que:

No puede adjudicarse a dicho Santillán más que la parte del terreno correspondiente a la renta que paga, y que en consecuencia, valorizados los terrenos del *cerro y monte* de Tepotzotlán, se le adjudicará al repetido Santillán lo que toque al capital de \$1. 333, 33 que ha de reconocer, quedando el resto a favor de los actuales poseedores, entre los que se dividirá por partes iguales para que lo disfruten en lo sucesivo en absoluta propiedad (Labastida, 1893: 28-29).⁸

Las autoridades federales justificaron esta determinación diciendo que la disposición establecía en el artículo octavo de la ley del 25 de junio de 1856, que exceptuaba de la desamortización los ejidos y tierras de usos común, era contaría a la propia ley; además, el aprovechamiento de los recursos del monte por parte de los vecinos no constituía un servicio público. En este sentido, este tipo de tierras no estaban comprendidas dentro del artículo octavo de la ley del 25 de junio de 1856.

Veamos cuál fue la postura y las acciones que emprendieron los vecinos de Tepotzotlán para mantener la administración y el disfrute comunal del monte de Tepotzotlán, el cual tenía por linderos al oriente la hacienda la Teja, al poniente las haciendas de la Concepción y Xalpa al norte las de la Teja y Xalpa y al sur la hacienda de Xuchimangas.⁹ Todas ellas tenían una extensión aproximada de 1143.98 hectáreas (ocho y media caballerías de tierras y un sitio de ganado menor) (Pacheco, 2011: 18).

En un primer momento, las autoridades municipales se negaron a repartir el monte aduciendo inconvenientes como: el alto costo que representaba el deslinde, los deseos de la población de mantenerlo como un todo y que el monte no tendría ninguna utilidad fraccionado en lotes; además, consideraban que el individualizarlo y adjudicar las fracciones de tierra provocaría grandes perjuicios a la vida de los vecinos, ya que del monte obtenían los productos para su subsistencia.¹⁰

Los vecinos con mayores recursos económicos pagaban una renta al ayuntamiento para carbonear y obtener madera con fines comerciales; los demás vecinos llevaban a cabo faenas o pagaban una pequeña cuota para poder hacer uso del monte, pastar sus animales, sacar carbón, madera, piedra y pasto. También, obtenían tunas, hongos, nopales y quelites para complementar su alimentación, así como diferentes yerbas medicinales para aliviar sus enfermedades (Pacheco, 2011: 18).

8 La documentación de archivo consultada no nos permite establecer una clara diferencia entre “cerro” y “monte”. Por ello hemos decidido utilizar únicamente la palabra “monte” a lo largo del texto.

9 AHNEM, Toluca, Notario: Eulalio Díaz, 1887, libro 4, escritura. 337, fs. 9f-13v.

10 AHNEM, Toluca, Notario: Eulalio Díaz, 1887, libro 4, escritura 337, fs. 9-13v.



El ayuntamiento de Tepetzotlán solicitó al presidente de la república que el monte de Tepetzotlán no fuese desamortizado, ya que el pueblo de Tepetzotlán lo habían adquirido desde tiempo inmemorial por compra que de él hicieron a los padres jesuitas.¹¹ De esta forma, los vecinos de Tepetzotlán argumentaron que los terrenos eran de propiedad particular, puesto que el origen de la propiedad había sido un contrato de compraventa. En vista de ello, el presidente de la república reconoció la propiedad particular de los terrenos; no obstante, consideró que debía repartirse en lotes ya que la ley del 25 de junio de 1856 prohibía a las corporaciones tener bienes raíces.

Las autoridades municipales prefirieron no continuar arrendando el monte que perderlo en su totalidad.¹² De esta forma, las autoridades municipales y los vecinos hicieron caso omiso a la desamortización y continuaron disfrutando de los recursos del monte sin pagar algún tipo de contribución municipal; en tanto que el ayuntamiento dejó de recibir los ingresos económicos por las rentas que hacía del monte de Tepetzotlán. Otros ayuntamientos del Estado de México, a diferencia del de Tepetzotlán, continuaron arrendando los montes sin ningún problema después de 1856, generando con ello el disgusto de los vecinos. Por ejemplo, a principios del siglo XX los ayuntamientos de Calimaya y Tenango continuaban arrendando los montes a particulares para la extracción de recursos forestales (Escudero y Camacho, 2015).

Santos Santillán, ante la imposibilidad de que se le adjudicara la parte del monte que rentaba, promovió varias diligencias para que se cumpliera con dicha adjudicación. En este sentido, el 4 de febrero de 1858 nombró como su representante legal al licenciado Manuel Lozano, dueño de la hacienda de Xuchimaga, para que realizara los trámites pertinentes. Lo anterior hace evidente que la parte que Santos Santillán rentaba aún no le había sido adjudicada. Posteriormente, a finales de la década de 1860, José María Martínez de la Concha, gobernador del Estado de México,¹³ al hacer una visita oficial a la municipalidad incitó a las autoridades locales a realizar el fraccionamiento del monte, el cual hasta entonces no había podido verificarse.¹⁴

En 1874 los vecinos formaron una comisión para gestionar el asunto del monte ante el gobernador del Estado quien, después de admitir que los títulos (contrato de compraventa) eran buenos, decidió que el monte no estaba comprendido dentro de la ley de desamortización; no obstante, debía ser dividido

11 Archivo Histórico del Estado de México (en adelante AHEM), Fomento: Gobernación, Serie: Justicia, vol. 8, exp. 35, año 1884, f. 4; AHMT, Fondo: Fomento, Serie: Tierras, vol. 7, exp. 9, fs. 1-12, año 1878.

12 AHMT, Fondo: Presidencia, Serie: Cabildos, vol. 3, exp. 5, año 1886, fs. 32v-34v.

13 José María Martínez de la Concha fue electo gobernador el 18 de diciembre de 1867 y obtuvo licencia en marzo de 1868.

14 AHMT, Fondo: Presidencia, Sección: Cabildo, vol. 3, exp. 5, año 1886, f. 38v.



para no contravenir el artículo 27 de la constitución federal de 1857 que prohibía a las corporaciones adquirir y administrar bienes raíces. El gobernador llamó a junta a los vecinos del pueblo quienes nombraron a un apoderado y tres vecinos de cada barrio para decidir la administración del monte, en tanto se realizaba la división y adjudicación del mismo. Así, la renta del monte quedó en manos de los vecinos que habían sido nombrados apoderados y de manera velada en las del ayuntamiento (Pacheco, 2011: 19-20). En 1876, debido al constante deterioro del monte el regidor tercero pidió al ayuntamiento que fuera reglamentada la conservación del monte; sin embargo, esta sugerencia no se tomó en cuenta.¹⁵

En 1878 el monte se incendió debido a la época de seca y la falta de cuidado, por lo que los vecinos pidieron a las autoridades municipales que convocaran a una junta para determinar la manera de realizar el carboneo. Se nombró al cura José Arzola como tesorero y encargado de dirigir los trabajos de carboneo; además, se estableció un concejo formado por los vecinos de los barrios de Texcacoa, San Martín y Tlacateco para decidir el sueldo de los trabajadores y la inversión de los ingresos por la comercialización del carbón (Pacheco, 2011: 20).

El hecho de no realizar la división y adjudicación del monte permitió a los vecinos disfrutarlo como acostumbraban. No obstante, la falta de administración de los productos del monte originó problemas respecto a la explotación y sus dividendos; lo cual propició que el monte sufriera deterioro; debido a que algunos vecinos extraían piedra para construir sus casas y carboneaban el monte con fines comerciales (Pacheco, 2011: 20). Algunos miembros del ayuntamiento aprovechaban su posición para hacer uso del monte sin pagar algún tipo de cuota y favorecían a unos vecinos sobre otros al permitirles cortar árboles; es decir, el ayuntamiento continuó teniendo injerencia en la administración del monte.

Finalmente, el 24 de septiembre de 1883 en el excolegio de Tepetzotlán se reunieron un gran número de vecinos del pueblo de Tepetzotlán pertenecientes a sus tres barrios: San Martín (cabecera), Tescacoa y Tlacateco con objeto de acordar la mejor manera de usar y explotar el monte. Varios vecinos principales hicieron uso de la palabra y después se acordaron varios aspectos, mismos que se votaron y plasmaron en un acta. El presidente municipal y los regidores que componían el ayuntamiento formaron parte de la junta, dando sus opiniones y emitiendo sus votos afirmativamente, aunque con el carácter de simples vecinos.¹⁶ Es de resaltar que los demás pueblos de la municipalidad no participaron en la reunión y tampoco formaron parte de la sociedad agrícola que se conformó para explotar el monte de Tepetzotlán.

15 AHMT, Gobierno, Actas de Cabildo, vol. 2, exp. 2, año 1876, f. 5; AHMT, Gobierno, Actas de Cabildo, vol. 2, exp. 1, año 1875, f. 15.

16 AHEM, Fomento: Gobernación, Serie: Justicia, vol. 8, exp. 35, año 1884, fs. 7.



En la reunión se acordaron distintos puntos para la conservación del monte, entre ellos: a) El monte continuaría siendo del uso común de todos los vecinos según las necesidades de estos y de los servicios que aquel pueda prestarles. b) La leña seca o muerta y plantas del monte se aprovecharían colectiva e individualmente por los vecinos, según las leyes establecidas en las ordenanzas de tierras y aguas, y las dictadas por la autoridad. c) La madera de encino sería carboneada o labrada en bruto, según conviniera, sin que por ningún motivo llegase a ser talado el monte. d) El producto del carbón o madera se invertiría en la adquisición de objetos de notoria utilidad o beneficencia pública en la localidad, como la compra e introducción de agua¹⁷ para regadío, construcción de puentes, calles o caminos vecinales, establecimiento y sostenimiento de algún hospital o de casa de asilo para pobres y huérfanos, formación de algún jardín o lugar de recreo, de lavaderos o baños y compra de un reloj público; e) La explotación del monte y la administración de los fondos que resultaran serían a cargo de una junta.¹⁸

Los vecinos del pueblo de Tepotzotlán pidieron al gobernador que se aprobara la junta directiva y el reglamento acordado el 24 de septiembre de 1883, argumentando que la explotación del monte por el ayuntamiento no daría el resultado que ellos pretendían, ya sea por las multiplicadas atenciones que este tenía o por el cambio de su personal cada año.¹⁹ Ante la imposibilidad legal de que el ayuntamiento continuara administrando los recursos del monte, los vecinos vieron en la formación de una junta directiva la posibilidad de continuar con dicha administración y la explotación del mismo; pero el gobierno del Estado de México no les concedió a los vecinos de Tepotzotlán lo solicitado y mandó que se cumpliera con la suprema circular del 18 de diciembre de 1856, en la que se dispuso que se repartiera entre los poseedores la parte montuosa restante de lo adjudicado a Santillán, cuyo reparto no se había verificado hasta entonces.²⁰

Los vecinos y las autoridades municipales de Tepotzotlán no lograron que las autoridades federales y estatales les autorizaran conservar el monte de forma comunal, con ello perdieron los recursos económicos que obtenían a través de las rentas o el cobro de contribuciones por la extracción de recursos forestales. No obstante, los vecinos continuaron aprovechando los recursos del monte de forma común y, en la medida de lo posible, administrar el acceso al mismo.

Ante lo infructífero de las peticiones por parte de los vecinos y las autoridades municipales para conservar la propiedad comunal del monte de

17 Si bien, los pueblos de Tepotzotlán contaban con una merced de agua, a veces la cantidad de agua de la que disfrutaban no era suficiente y tenían que comprar agua a las haciendas; sobre todo a la de Xuchimangas.

18 AHEM, Fomento: Gobernación, Serie: Justicia, vol. 8, exp. 35, año 1884, f. 4.

19 AHEM, Fomento: Gobernación, Serie: Justicia, vol. 8, exp. 35, año 1884, fs. 5-6.

20 AHEM, Fomento: Gobernación, Serie: Justicia, vol. 8, exp. 35, año 1884, f. 15.



Tepotzotlán, los tres barrios del pueblo de Tepotzotlán decidieron crear una sociedad agrícola. Ello derivado de un movimiento comunalista que empezó a cobrar importancia a finales de la década de 1870 en varios estados de la república, producto del cual empezaron a crearse sociedades agrícolas, agrarias o condueñazgos.

La sociedad agrícola

En México inició el desarrollo industrial a finales del siglo XIX, se instalaron distintas clases de empresas nacionales y extranjeras que introdujeron nuevas maquinarias, tecnologías y transformaciones energéticas que hicieron del monte su principal fuente de recursos y materias primas. De esta forma comenzó una demanda hacia los espacios forestales, misma que se intensificó a medida que los recursos obtenidos de aquel espacio resultaran útiles para la nueva dinámica económica (Escudero y Camacho, 2015: 80).

En el Estado de México distintas zonas estaban siendo objeto de una extensa explotación maderera, por ejemplo: Jilotepec, San Felipe del Progreso, El Oro, Lerma, Ixtlahuaca, Valle de Bravo, Tenango y Villa Nicolás Romero (Almazán, 2011: 103). En general, la extracción comercial del monte se hacía mediante particulares dueños de montes, concesionarios de alguna industria y mediante el arrendamiento que los ayuntamientos hacían de los montes. Los arrendatarios, bajo el amparo del gobernador del Estado de México y de los presidentes municipales, explotaban extensas zonas de monte (Almazán, 2011: 105).

En la sierra de Tepotzotlán la extracción de madera era considerable. En 1894 en la estación de Huehuetoca del Ferrocarril Nacional Mexicano se embarcaban 4061 toneladas de productos forestales, en la de Teoloyucan 328 y en la de Cuautitlán 78 (Kuntz, 1998: 280; de la Torre, 1888: 43). En tanto que, en 1899 en la estación de Cuautitlán del Ferrocarril Central Mexicano, se embarcaron 365 toneladas de productos forestales, en la de Huehuetoca 33 y en la de Tlalnepantla 32. En la estación llamada “Leña”, en los límites del Estado de México con el estado de Hidalgo, se embarcaban 10 725 toneladas de productos foréstaes y en Polotitlán 2 449 (Kuntz, 1998: 274-275).

Durante el siglo XIX no existieron leyes sobre la explotación y conservación de los montes, únicamente se establecieron algunos reglamentos y se expidieron circulares encaminadas a la conservación de los mismos. En 1881 se estableció el reglamento al que debía sujetarse el corte de maderas en bosques y terrenos nacionales; al año siguiente, la Secretaría de Fomento reconoció, mediante la circular N° 8635, el problema de los montes de propiedad nacional. Tales disposiciones estuvieron encaminadas a procurar la conservación de los montes o a establecer reglas para el corte de árboles en terrenos nacionales, dejando a los gobiernos estatales lo concerniente a los montes de propiedad privada y



comunal (Escudero y Camacho, 2015: 85). Los gobiernos estatales se limitaron a emitir circulares y decretos exhortando a las autoridades locales y vecinos de los pueblos a cuidar los montes y evitar la sobreexplotación (Escudero y Camacho, 2015: 86), pero no existió una preocupación real por hacer que se cumplieran estas disposiciones.

En las municipalidades de Tepotzotlán y Huehuetoca algunos montes eran explotados por arrendatarios o concesionarios; por ejemplo, Felipe Mazarrosa extraía madera del monte de “Los Dolores” y Ramón Terreros, hacendado prominente, del monte de “La Concepción”, ambos ubicados en la municipalidad de Tepotzotlán; en tanto que, Alberto Terreros aprovechaba el monte de “El Sitio” en Huehuetoca (Neri, 2017: 55). Los vecinos de los pueblos poco a poco fueron desplazados del acceso libre a los recursos del monte; pero en algunos casos los pueblos lograron conservar el disfrute exclusivo de los montes mediante diversas vías como la individualización de los montes o la formación de sociedades agrícolas.

Las sociedades agrícolas han merecido sólo acercamientos preliminares en los estudios sobre los tipos de tenencia sobre la tierra. Estas investigaciones han permitido escribir a *grosso modo* las características más sobresalientes de este tipo de propiedad, pero su conocimiento dista todavía mucho de poder llegar a establecer una tipología de las sociedades, determinar su organización, así como su funcionamiento. No existe una “morfología” que dé cuenta cabal de sus diferentes versiones regionales y permita sentar las bases de una teoría que explique la conformación, consolidación y disolución de estas propiedades. Las sociedades agrícolas, formalmente, eran empresas para la explotación común de la tierra, la madera, los pastos o el agua. Se constituían a partir de la asociación de individuos que establecían un contrato notarial de explotación colectiva del recurso.

Antonio Escobar Ohmstede, para el caso de las Huastecas hidalguense y veracruzana, afirma que la formación de condueñazgos y sociedades agrarias después de la ley del 25 de junio de 1856 permitió la defensa del espacio comunal por parte de los pueblos indígenas. (Escobar, 1992: 1-21). El mismo autor expresa que uno de los principales papeles de los condueñazgos fue eliminar la injerencia del gobierno municipal en la administración del espacio territorial (Escobar, 1993: 171-188). Mendoza García, para el caso de Oaxaca, establece que los integrantes de los barrios constituyeron sociedades agrícolas para evitar perder sus propiedades comunales ante las políticas de privatización, y de esta forma seguir fungiendo dentro del marco de la ley. El propósito de los socios era ayudarse en sus mutuas necesidades, así como dar su contribución para sufragar los gastos del ayuntamiento del pueblo con motivo de alguna mejora que se emprendiera en beneficio de la población (Mendoza, 2005: 238).



En el Estado de México, comúnmente, los indígenas formaron sociedades agrícolas para defender y conservar el disfrute común de sus tierras; ya fuesen de común repartimiento, pastos o montes. Gloria Camacho manifiesta que la formación de una sociedad agrícola les permitió a algunos vecinos contrarrestar los posibles efectos negativos de la aplicación de la ley de desamortización y poder controlar el acceso a los recursos. Uno de los principales objetivos de las sociedades agrícolas también era dejar fuera de la administración del territorio comunal a las autoridades municipales y estatales (Camacho, 2007: 249-293). No obstante, en el caso de la sociedad agrícola formada por los vecinos del pueblo de Tepotzotlán vimos que tanto las autoridades municipales como los vecinos desempeñaron un papel importante en la defensa del uso común del monte de Tepotzotlán y en la formación de la sociedad. Es decir, en este caso no existía algún conflicto entre la población y las autoridades municipales en torno a la administración del monte.

En el anterior apartado vimos que desde que la autoridad federal declaró que el monte de Tepotzotlán debía adjudicarse en propiedad privada, tanto las autoridades como los vecinos de los tres barrios de Tepotzotlán se empeñaron en no realizar tal procedimiento. Vecinos y autoridades realizaban en conjunto reuniones para solucionar el problema y determinar la administración del monte. El tema era discutido en sesión de cabildo frecuentemente, en cuyas reuniones la prioridad era conservar el disfrute comunal del monte; por ello, se formaron distintas comisiones para solucionar el conflicto ante las autoridades federales y estatales. No obstante, dichos intentos por mantener la propiedad comunal del monte no tuvieron los resultados esperados; en vista de lo cual, los vecinos de Tepotzotlán decidieron formar una sociedad agrícola para administrar y conservar el disfrute comunal del monte dentro del marco legal.

En agosto de 1886 los vecinos del pueblo de Tepotzotlán por medio de los representantes de los tres barrios (San Martín, Tescacoa y Tlacateco) solicitaron al jefe político el usufructo del monte de Tepotzotlán mediante la formación de una sociedad agrícola. Dicha autoridad mandó la solicitud al ayuntamiento de Tepotzotlán y el 21 de agosto de 1886 se dio lectura a la solicitud en sesión de cabildo, bajo la presidencia de Mariano Pastén; pero al ser éste el representante del barrio de Tlacateco se excusó de presidir el cabildo y nombró al regidor primero para que le sustituyera.²¹

El regidor Eligio García manifestó que era indudable que los vecinos, no obstante algunas ambiciones, eran conscientes del perjuicio que les traería si dividían su propiedad. Por ello, nunca habían insistido en que se cumpliera con la división y adjudicación conformándose con carecer de sus productos (rentas) que

21 AHMT, Fondo: Presidencia, Sección: Cabildo, vol. 3, exp. 5, año 1886, f. 38v.



perderlo en un todo. Además, comentó que los gobiernos habían tolerado la explotación del monte por parte de los vecinos sin que estos hubieran quedado obligados a dar cuanta de la inversión de los productos, habiéndolos ocupado en lo que mejor les había convenido. Finalmente, comentó que las gestiones que distintas veces se hicieron para poder conservar el disfrute comunal del monte no obtuvieron resultados favorables y que durante la presidencia municipal de Joaquín Andonaegui y Martachi también se promovió el negocio sin resultado.

El presidente municipal dijo que era indudable que los vecinos de Tepotzotlán tenían la propiedad del monte, debido a que el pueblo de Tepotzotlán lo había comprado a los padres jesuitas en 1693 como constaba en la escritura de propiedad. En vista de lo cual habían sido desechadas de pleno las denuncias de adjudicación que distintas personas habían hecho, pues de otra forma las autoridades superiores habrían dado un sesgo para proceder a la desamortización.

El presidente municipal, tomando en cuenta lo manifestado por los concejales y los autos existentes, autorizó la formación de la sociedad solicitada por los representantes de los barrios siempre que éstos procedieran en los términos legales y asegurando el porvenir de los vecinos del pueblo y sus sucesores. Respecto a los recursos económicos que generaba el monte manifestó que el ayuntamiento no tenía derecho a recibirlos, porque el monte era propiedad de los vecinos del pueblo en su conjunto y al formar dicha sociedad correspondía a ésta recibirlos.²² De esta forma, los vecinos de Tepotzotlán encontraron en la formación de una sociedad agrícola la vía legal para conservar el disfrute comunal del monte, frente a las disposiciones federales encaminadas a privatizar las tierras comunales.

El gobernador del Estado de México, Jesús Lalanne, consideró que los vecinos de Tepotzotlán podían formar la sociedad agrícola para administrar el monte de su propiedad, ya que al ser de propiedad particular no estaba comprendido en las leyes de desamortización; porque desde 1693 no había pertenecido a ninguna corporación civil o eclesiástica, en consecuencia, los vecinos tenían absoluta libertad para disponer de esos bienes como lo estimasen conveniente. No obstante, Jesús Lalanne manifestó que el monte por mucho tiempo no había contribuido a los gastos generales del Estado ni a los municipales con los impuestos establecidos, por ello pidió que se valorizaran y compadronaran a fin de que en lo sucesivo pagasen al erario la contribución predial.

Atendiendo al reconocimiento que el gobernador hizo de la libertad que tenían los vecinos para administrar y explotar el monte de Tepotzotlán, éstos determinaron constituirse en sociedad y en junta general quedó aprobado el reglamento de la sociedad. Entre otros aspectos, los vecinos del pueblo de Tepotzotlán acordaron

22 AHMT, Fondo: Presidencia, Sección: Cabildo, vol. 3, exp. 5, año 1886, f. 40f.



constituirse en sociedad para: a) La defensa de sus derechos civiles, judiciales o extrajudiciales. b) La mejora, conservación y administración de sus intereses. c) La explotación del monte del ocote ubicado en la cabecera de la municipalidad, en beneficio de los asociados naturales de Tepotzotlán. d) Para la protección y socorro mutuo de los miembros que pertenecían a la sociedad. Resulta importante mencionar que los miembros del ayuntamiento formaron parte importante de la sociedad, pero no en su carácter de autoridades sino como personas civiles.

El 25 de octubre de 1886 los vecinos del pueblo de Tepotzotlán con derecho a los recursos del monte escrituraron la sociedad agrícola ante el juez de primera instancia de Toluca, lo cual les permitió obtener personalidad jurídica para administrar y explotar el monte. Las sociedades agrícolas del Estado de México se caracterizaban por estar representadas por una “junta menor”, generalmente formada por un presidente, un secretario y un tesorero. En algunas sociedades agrícolas, como en la que aquí se expone, se especificó claramente la función de los representantes, las obligaciones de los socios y la administración de los bienes, entre otros aspectos (Neri, 2011: 48-60).

Entre los estatutos de la sociedad se acordó que eran miembros de la sociedad todos los naturales hijos de la población y sus descendientes que se inscribieran en el registro de aquella y fueran dueños individuales de una porción de terreno en Tepotzotlán. Los vecinos propietarios tenían derecho a que, con los productos de la sociedad, se hicieran los gastos de instauración cuando estos fallecieran. Si era posible, se daría un auxilio pecuniario a la familia. Los socios estaban unidos entre sí con lazos de paternidad, respeto y consideraciones que se deben los individuos dedicados al fin noble del bien común. A todos los socios explotadores del monte se les permitía tomar gratis la leña que necesitaban para sus necesidades domésticas, pero la que sacaban para su venta causaba lo que se llamaba derecho de licencia y explotación que pagaban en la tesorería de la sociedad. Los socios tenían derecho a que los animales de su propiedad pastaran libremente en los terrenos de la sociedad, pero no podían arrendar pastos sin conocimiento de la presidencia y con su aprobación.

Una vez constituida la sociedad agrícola, los habitantes del pueblo continuaron disfrutando del monte en común; en tanto que los principales del pueblo eran quienes lo administraban, pero ahora como personas civiles miembros de una sociedad y no como autoridades del ayuntamiento. La sociedad agrícola les permitió a los vecinos de Tepotzotlán administrar y explotar el monte, actividad que el ayuntamiento realizó legalmente hasta 1856.

El 11 de junio de 1888 ante el juez de primera instancia de Cuautitlán quedó constituida la junta administrativa para la explotación del monte; la cual quedó compuesta por Mariano Pasten, presidente, Miguel Villareal, tesorero y Román Gómez, secretario. Las facultades de la junta eran limitadas en el caso de enajenación



de terrenos e inversión del dinero que se produjese, para lo cual la decisión se debía tomar en junta general.²³ Hay que decir que Mariano Pasten, presidente municipal en 1886, fungió como presidente de la sociedad agrícola desde su fundación en 1886 y hasta 1891 continuó apareciendo con ese cargo. Muy probablemente, Miguel Villareal y Román Gómez también fueron autoridades municipales.

Sin duda, la administración de los montes comunales implicaba el movimiento y la entrada de considerables recursos económicos por la extracción de recursos forestales, mismos que se registraban en los libros de cuentas. Desconocemos los ingresos de la sociedad y sus inversiones, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos; pero sí conocemos la compra de varias tierras que hizo la sociedad, lo cual demuestra su poder adquisitivo.

Compras de tierras realizadas por la sociedad agrícola²⁴

Vendedor	No. de tierras	Precio	Fecha de compra
Leocadio Vega	2	\$ 48	21 de septiembre de 1888
Mariano Pasten	1	\$ 65	3 de octubre de 1888
Juan Villareal	1	\$ 55	3 de octubre de 1888
Petronilo J.	1	\$ 16	22 de octubre de 1890
María de Jesús Reyes	1	\$ 15	22 de octubre de 1890
Valente Vázquez	3	\$ 55	25 de octubre de 1890
José y Francisco Cid del Prado	2	\$ 50	6 de noviembre de 1890
José y Francisco Cid del Prado	1	\$ 30	15 de enero de 1891
Pedro Neri	1	\$ 30	26 de agosto de 1891

23 AHNEM, Cuautitlán, Justino Alvarado, 1888, Protocolo 1, fs. 56v-57v.

24 AHNEM, Cuautitlán, Justino Alvarado, 1888/ Protocolo 1, fs. 2f-3f; AHNEM, Cuautitlán, Justino Alvarado, 1888, Protocolo 1, fs. 8v-9f; AHNEM, Cuautitlán, Justino Alvarado, 1888, Protocolo 1, fs. 9v-10f; AHNEM, Cuautitlán, Remigio Téllez, 1890, Protocolo 2, fs. 22v-23v; AHNEM, Cuautitlán, Remigio Téllez, 1890, Protocolo 2, fs. 25f-26v; AHNEM, Cuautitlán, Remigio Téllez, 1890, Protocolo 2, fs. 29f-30f; AHNEM, Cuautitlán, Remigio Téllez, 1891, Protocolo 1, fs. 5v-6v; AHNEM, Cuautitlán, Pedro Ochoterena, 1891, Protocolo 2, fs. 35v-36f.



Las ventas de tierra muestran que las actividades económicas de la sociedad no se limitaron a la extracción de recursos forestales, sino también a otras actividades como la compra y venta de tierras. Por ello, podemos decir que el objetivo de la sociedad agrícola no era únicamente el de conseguir la administración común de sus bienes; también era obtener personalidad jurídica para poder obtener recursos económicos, pero que al ya no ser autoridades municipales pueden considerarse como operaciones mercantiles. El análisis de esta sociedad agrícola nos obliga a no continuar pensando en los pueblos indígenas como grupos homogéneos, caracterizados únicamente por el interés de conservar el uso común de sus recursos; la actividad económica también representó un aspecto importante a través de la cual los pueblos solventaron diferentes actividades de su vida cotidiana.

Consideraciones finales

Este trabajo trató de analizar las acciones de resistencia pasiva efectuadas por el pueblo de Tepotzotlán ante la disposición federal que establecía la desamortización del monte que tenía en propiedad comunal. Se mostraron la petición, la omisión y la formación de una sociedad agrícola como mecanismos empleados por los vecinos del pueblo de Tepotzotlán para conservar sus derechos y mantener el uso común del monte. En este sentido, se puso énfasis en el papel desempeñado por las autoridades municipales y la formación de una sociedad agrícola enfocada en el aspecto económico.

Se ha dicho que los montes estuvieron exentos de la desamortización establecida por la ley del 25 de junio de 1856. Sin embargo, como hemos visto en este trabajo, el que los ejidos no hayan sido rápidamente desamortizados no se debió a cuestiones legales, ya que las autoridades federales establecieron la desamortización de los ejidos desde diciembre de 1856; y más exactamente al eliminar la excepción del artículo octavo de la ley de desamortización en el artículo 27 de la Constitución de 1857. En este sentido, el que no hayan sido desamortizado los ejidos se debió más bien a aspectos sociales y económicos, ya que eran bienes de uso común y representaban considerables ingresos a los ayuntamientos.

Comúnmente se considera que la resistencia de los pueblos a la ley del 25 de junio de 1856 buscaba conservar el disfrute comunal de sus recursos, y hay mucha razón en ello; pero se olvida el aspecto económico. Si bien, los vecinos de Tepotzotlán lograron conservar el disfrute colectivo de los recursos del monte durante veintiocho años con el simple hecho de hacer caso omiso a la disposición federal que estableció la desamortización del monte; notamos que a las autoridades o principales del pueblo también les interesaba conservar el disfrute común del monte para obtener recursos económicos. A diferencia de otras sociedades agrícolas creadas en torno a recursos comunales, podemos decir que la conformada por el pueblo Tepotzotlán fue una sociedad agrícola comercial, lo cual se



comprueba con la compra-venta de tierras.

Si bien, el sentimiento de comunidad y las prácticas de resistencia pasiva fueron importantes para evitar que la ley de 1856 tuviera impacto en la desamortización del monte; nos pudimos dar cuenta que el papel de las autoridades municipales y los principales del pueblo resultó de suma importancia para mantener el disfrute comunal del monte y su administración. ☸



Referencias

- ALAMAZÁN, REYES, MARCO AURELIO (2011). *Usos, perspectivas y conflictos por los recursos forestales en los pueblos de la montaña* (Nevado de Toluca) durante el Porfiriato, 1876-1911. (Tesis de maestría en Historia). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.
- BIRRICAGA GARDIDA, DIANA (2003). *Administración de tierras y bienes comunales. Política, organización territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857*. (Tesis de doctorado en Historia). El Colegio de México. México.
- CAMACHO PICHARDO, GLORIA (2015). *De la desamortización a la reforma agraria, 1856-1930. Los pueblos y sus tierras en el sur del valle de Toluca*. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
- _____. (2007). “Las sociedades agrícolas en los pueblos del sur del Valle de Toluca y la desamortización (1856-1900)”. En: César de Jesús Molina Suárez et. al. (Coordinadores). *La vida, el trabajo y la propiedad en el Estado de México*. (pp. 247-278). México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- CARMAGNANI, MARCELO Y ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ (1999). “La ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1900”. En: Hilda Sabato (coord.). *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*. (pp. 371-404). México: FCE-El Colegio de México-FHA.
- CONGRESO CONSTITUTUYETE DEL ESTADO DE MÉXICO (1825). *Actas del congreso Constituyente del Estado de México*. Tomo 2. Toluca: Imprenta de Martín Rivera.
- DE LA TORRE, JUAN (1888). *Historia y descripción del ferrocarril central mexicano*. México: Imprenta de Ignacio Cumplido.
- ESCOBAR OHMSTEDE, ANTONIO (2001) “La estructura agraria en las Huastecas 1880-1915”. En: Antonio Escobar. *Estructuras y formas agrarias en México del pasado y del presente*. (pp. 77-196). México: Registro Agrario Nacional/Archivo General Agrario/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- _____. (1993) “Los condueñazgos indígenas en las Huastecas hidalguense y veracruzana: ¿Defensa del espacio comunal?”. En: Antonio Escobar Ohmstede (coord.). *Indio, Nación y Comunidad en el México del siglo XIX*. (pp. 171-188). México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.



- _____. (1992). “Las sociedades agrarias en el norte de Hidalgo, 1856-1900”. *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 8, núm. 1, pp. 1-21.
- ESCRICHE, JOAQUÍN (1951). *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*. París: Librería de Rosa-Bouret y C.
- ESCUDERO MARTÍNEZ, CESAR FERNANDO y GLORIA CAMACHO PICHARDO (2015). “Los montes y su desamortización en los pueblos del sur del valle de Toluca (México), 1880-1917”. *HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local*, vol. 7, núm. 13, pp. 76-110.
- ESCUDERO MARTÍNEZ, CESAR FERNANDO (2010). *Desamortización y explotación de montes en el Disitrito de Tenango del Valle, el caso de Calimaya, 1890-1915*. (Tesis de licenciatura de Historia). Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.
- FRASER, DONALD (1972). “La política de desamortización en las comunidades indígenas, 1850-1872”. *Historia Mexicana*, vol. 21, núm. 4, pp. 615-652.
- GUTIÉRREZ, ANA MARÍA (2002). “El proceso agrario en las huastecas hidalguense y veracruzana, 1825-1874”. *Sotavento. Revista de Historia, Sociedad y Cultura*, número 11, pp. 9-38.
- KNOWLTON, ROBERT (1998). “El ejido mexicano en el siglo XIX”. *Historia Mexicana*, vol. 48, núm. 189, pp. 71-96.
- _____. (1978). “La individualización de la propiedad corporativa en el siglo XIX. Notas sobre Jalisco”. *Historia Mexicana*, vol. 28, núm. 1, pp. 24-61.
- KUNTZ FICKER, SANDRA (1998). “Los ferrocarriles”. En: *Historia general del Estado de México*, t. 5. (pp. 269-288). Zinacantepec: El Colegio Mexiquense.
- LABASTIDA, LUIS G. (1893). *Colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos relativos a la desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la nacionalización de los que administraron las últimas*. México: Tipografía de la oficina impresora de estampillas de palacio nacional.
- MARINO, DANIELA (2009). “El régimen jurídico de la propiedad agraria en el Estado de México, 1824-1870: de la comunidad al individuo”. En: Jaime del Arenal y Elisa Speckman (Coords.), *Guerra El mundo del derecho. Aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana (siglos XIX y XX)*. (pp. 173-195). México: IIH-UNAM, Porrúa, Escuela Libre de Derecho.



- _____. (2006). *La modernidad a juicio: Los pueblos de Huixquilucan en la transición jurídica* (Estado de México, 1856-1911). (Tesis de doctorado en Historia). El Colegio de México. México.
- MENDOZA GRACÍA, ÉDGAR (2016). *Agua y tierra en San Gabriel Chilac, Puebla, y San Juan Teotihuacán, Estado de México. El impacto de la reforma agraria sobre el gobierno local, 1917-1960*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- _____. (2011). *Municipios, cofradías y tierras comunales. Los pueblos chocholtecos de Oaxaca en el siglo XIX*. Oaxaca: CIESAS, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco-Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
- _____. (2005). *Poder político y económico de los pueblos chocholtecos de Oaxaca: municipios, cofradías y tierras comunales 1825-1890*. (Tesis de doctorado en Historia). El Colegio de México. México.
- MENEGUS, MARGARITA (1995). “Ocoyoacac- una comunidad agraria en el siglo XIX”. En: *Lecturas de Historia Mexicana. Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVII Y XIX*. (pp. 144-189). México: El Colegio de México.
- NERI GUARNEROS, JOSÉ PORFIRIO (2017). *Entre montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras en la subcuenca del río Cuautitlán 1856-1917*. (Tesis de doctorado en Historia). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Mérida.
- _____. (2011). *Las sociedades agrícolas en el Estado de México durante el Porfiriato: transformación de la propiedad de los pueblos indígenas*. (Tesis de maestría en Estudios Históricos). Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.
- ORTIZ YAM, ISAURA INÉS (2014). “Formación de ejidos en los pueblos de Yucatán, 1870-1909”. *Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales*, vol. 36, núm. 2, pp. 17-41.
- PACHECO, CARLOS (1889). *Disposiciones sobre designación y fraccionamiento de ejidos de los pueblos*. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento.
- PACHECO CHÁVEZ, MARÍA ANTONIETA ILHUI (2011). “La Ley Lerdo y su aplicación en Tepetzotlán, Estado de México”. *Historia Agenda*, núm. 25, julio-diciembre, pp. 15-24.



- POWELL, T. (1972). "Los liberales, el campesinado indígena y los problemas agrarios durante la reforma". *Historia Mexicana*, vol. 21, núm. 4, pp. 653-675.
- SALINAS SANDOVAL, MARÍA DEL CARMEN (2001). *Los municipios en la formación del Estado de México, 1824-1846*. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense.
- SCOTT, JAMES (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Era.
- TANCK DE ESTRADA, DOROTHY (1999). *Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821*. México: El Colegio de México.



Antrópica

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades



DOSSIER

Dinámicas sociales en contextos de cambio. México entre los siglos XIX y XX

Responsable del dossier:
Inés Cortés Campos

PRESENTACIÓN

Inés Cortés Campos
Dossier no. 3 "Dinámicas sociales en contextos
de cambio. México entre los siglos XIX y XX"

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Abel García Gómez
Un puente entre lo divino y el pueblo. El papel
de los fiscales en los pueblos de indios del siglo XIX

Marco Díaz Güémez
La Ciudad de los Muertos: la transformación
socialista del Cementerio General de Mérida,
Yucatán, 1918-1919

Julio César Hoil Gutiérrez
La Guerra de Castas y su impacto agrario
en los pueblos del oriente de Yucatán en
la segunda mitad del siglo XIX

Porfirio Neri Guarneros
El Cerro y Monte de Tepotzotlán.
Los pueblos frente a la desamortización,
1856-1900

Contacto: revista.antropica@gmail.com

Disponible en:
<http://www.antropica.com.mx>

